

Volumen 1

Número 1

Septiembre de 2014

CUESTIÓN AGRARIA

Seguridad y soberanía alimentaria entre
campesinos e indígenas



Revista Boliviana de Estudios Agrarios y Rurales

Cuestión Agraria

Volumen 1 Número 1 Septiembre de 2014

Seguridad y soberanía alimentaria entre
campesinos e indígenas



Cuestión Agraria

Es una revista boliviana especializada en estudios rurales y agrarios. Es una iniciativa de TIERRA para promover el pensamiento crítico y reflexivo en torno a las estructuras sociales, relaciones de poder, transformaciones agrarias, modelos productivos y movimientos campesinos e indígenas que hacen al mundo rural. La revista privilegia contribuciones orientadas a problematizar temas contemporáneos que aporten al análisis comparativo, debate y formación de agendas de trabajo.

Son bienvenidos trabajos tanto de carácter teórico como aquellos orientados a la formulación de ideas de políticas alternativas. Se aceptan contribuciones de académicos, agraristas y ruralistas tanto bolivianos como extranjeros con diversas orientaciones disciplinarias especialmente en: economía, sociología, ciencia política, geografía, historia, antropología, desarrollo rural, medioambiente, género y otros.

La revista publica dos números anualmente organizados alrededor de temáticas específicas y posee una estructura compuesta por un acápite introductorio y la colección de artículos correspondientes. Cada artículo tiene una extensión cercana a las 10.000 palabras y es presentado en estilo académico.

TIERRA cuenta con el apoyo institucional de:

PPM: Pan Para el Mundo - Servicio Protestante para el Desarrollo

ICCO: Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo

Los trabajos de investigación que conforman este volumen y esta publicación son posibles gracias al apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), Ottawa, Canadá.

DL: 4-3-67-14

Se autoriza la reproducción parcial o total y la difusión sin fines de lucro de esta revista siempre y cuando se cite debidamente la fuente.

©TIERRA, septiembre de 2014

Editor: TIERRA – Taller de Iniciativas en Estudios Rurales y Reforma Agraria.

Calle Hermanos Manchego, 2566, Sopocachi, La Paz – Bolivia.

Tel.: (591) 2 2432263

Email: tierra@ftierra.org

Sitio web: www.ftierra.org

Edición: Floriana Soria Galvarro, Rubén Martínez Miranda

Imagen de tapa: ELART

Diseño y diagramación: Chanel Colque

Impresión: Aruni impresores

Impreso en La Paz, Bolivia

Cuestión Agraria

Volumen 1

Número 1

Septiembre de 2014

Seguridad y soberanía alimentaria entre campesinos e indígenas

Contenido

- Seguridad y soberanía alimentaria entre los pequeños propietarios campesinos e indígenas: marco introductorio a los estudios de caso
Gonzalo Colque 7
- Artículos**
- Cuando la soya se impone: transformaciones en las comunidades campesinas y sus implicaciones alimentarias
Enrique Castañón Ballivián 27
- En el campo, los productores de mercancías prefieren comprar sus alimentos
Miguel Urioste F. de C. 55
- Dependencia y autoabastecimiento alimentario en la TCO Guaraní de Macharetí
Jose Luis Eyzaguirre Rodríguez 77
- La persistencia de la agricultura campesina y sus implicaciones alimentarias en Villa Serrano
Rossmory Jaldín Q. 105
- Mercado o seguridad alimentaria, dilema de los pequeños productores agrícolas de Rurrenabaque
Mamerto Pérez L. 137

Seguridad y soberanía alimentaria entre pequeños propietarios campesinos e indígenas: marco introductorio a los estudios de caso

Gonzalo Colque¹

Esta sección ofrece una discusión introductoria sobre el papel de los campesinos e indígenas para la seguridad y soberanía alimentaria. Expone algunos elementos comparativos y de análisis entre los conceptos más influyentes en las políticas alimentarias y agrarias: seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Aborda la cuestión invariablemente compleja sobre cómo medir la seguridad alimentaria a nivel de hogares, en particular entre los hogares de pequeños propietarios de la tierra que lidian entre si destinar de forma prioritaria tierra, capital y trabajo a la producción de alimentos o dedicar sus recursos y esfuerzos a actividades extraprediales. Presenta los cinco estudios de caso que aportan evidencias recogidas en terreno sobre el papel y la seguridad alimentaria de los campesinos e indígenas. Finalmente, sintetiza la metodología empleada para el recojo de información en trabajo de campo, haciendo énfasis en los indicadores de Puntaje de Consumo Alimentario (PCA) y en el Indicador de Acceso a Alimentos (IAA) que han sido utilizados a fin de entender la habilidad de los hogares para adquirir los alimentos que necesitan.

Palabras clave: seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, pequeños propietarios, tierra

Consideraciones iniciales

En esta colección de cinco estudios de caso centramos nuestra atención en el papel de la pequeña propiedad de base campesina e indígena para la seguridad y soberanía alimentaria. En su conjunto, los trabajos ofrecen evidencias e interpretaciones sobre las dinámicas locales y los esfuerzos de los campesinos e indígenas por abastecerse de suficientes alimentos por medio de diversas y cambiantes estrategias.

¹ Economista con especialidad en desarrollo rural. Tiene una maestría en estudios agrarios y medioambientales del *International Institute of Social Studies (ISS)*, La Haya-Holanda. Es autor de varias publicaciones y ensayos sobre cuestiones rurales, transformaciones agrarias y temas indígenas. Actualmente es Director Ejecutivo de TIERRA (g.colque@tierra.org).

El punto de partida ha sido plantearnos las siguientes preguntas: ¿Cómo obtienen acceso a los alimentos los pequeños propietarios de tierras?, ¿cuál es el estado del consumo alimentario en las cinco zonas de estudio?, ¿cuán sostenibles son las maneras y las fuentes de acceso a los alimentos?, y finalmente, ¿cuáles son las implicaciones para la seguridad y soberanía alimentaria a nivel local y nacional? En términos generales, hemos estado y estamos interesados en contrastar si la agricultura a pequeña escala es proveedora de la mayor parte de los alimentos disponibles en el mercado interno y, en consecuencia, si a futuro tiene potencial para contrarrestar los problemas de crisis alimentaria –cada vez más acentuados– que emergen ante las limitaciones estructurales de la agricultura comercial a gran escala (Tapella 2004, Tarancon, Díaz y Trueba 2011, Gordillo 2012).

El interés por encontrar respuestas urgentes a la crisis alimentaria ocupa un lugar prioritario en la agenda prácticamente de todas las organizaciones y movimientos vinculados al mundo de la agricultura. Organizaciones internacionales como la FAO, el FIDA o el Banco Mundial están destinando esfuerzos y recursos para incrementar la producción y productividad agrícola. Los gobiernos también han puesto en marcha nuevas políticas agrarias para expandir las tierras de cultivos, facilitar inversiones y actividades de las compañías transnacionales y establecer directrices internacionales de ‘gobernanza e inversiones responsables’ en tierra y recursos naturales (Banco Mundial 2008). Sin embargo, las políticas y enfoques que están por detrás de los programas de desarrollo agrícola no siempre son uniformes y a menudo son cuestionados desde la sociedad civil y particularmente desde los movimientos campesinos globales como Vía Campesina o activistas que dudan de las soluciones que propone el libre mercado (Hernández y Desmarais 2009). El escenario es complejo y contradictorio porque muchos defienden con un mismo ‘slogan’ diferentes intereses. En este contexto, la histórica cuestión de ¿quién nos alimentará?, ¿los agricultores a pequeña escala o la agricultura a gran escala?, vuelve con renovada fuerza y es motivo de múltiples estudios que están en curso alrededor del mundo (Rubio 2011).

En Bolivia, los pequeños propietarios tradicionales están asentados en las tierras altas, trabajando las escasas tierras cultivables de las pampas del altiplano y de las zonas accidentadas de los valles interandinos y los yungas. Muchos de ellos se dedican a la actividad pecuaria aprovechando las tierras menos fértiles para el pastoreo extensivo de animales. No son los únicos agricultores a pequeña escala porque en las últimas tres décadas ‘nuevos campesinos’ (interculturales) han consolidado su presencia en áreas de colonización en las zonas semi-tropicales de transición entre las montañas y las llanuras bolivianas (norte de La Paz, Chapare en Cochabamba, zonas de colonización en Santa Cruz). También forman parte de este sector los pueblos indígenas de las tierras bajas a pesar de que en muchos

casos no se los puede considerar agricultores o pequeños parcelarios debido al modo de vida que tienen y que está basado mayormente en el aprovechamiento de los recursos del bosque, pesca, recolección y venta de fuerza de trabajo. Recogiendo varios esfuerzos de conceptualización, podemos señalar que los pequeños propietarios tradicionales se caracterizan al menos por tres factores: son unidades de producciones orientadas cada vez menos al autoabastecimiento de alimentos y cada vez más al mercado, están operadas con base en la fuerza de trabajo familiar (incluyendo jornaleros campesinos a tiempo parcial) y están situadas en una posición subordinada dentro de la estructura agraria nacional controlada por la agricultura a gran escala² (Bernstein 2010, Vanhaute 2010).

Este tipo de pequeños propietarios es la unidad de análisis de esta colección de estudios. Las preguntas más específicas desarrolladas en cada trabajo exploran las dinámicas locales a nivel de comunidades campesinas e indígenas, desde ángulos y ópticas distintas pero complementarias.

Algunas de estas preguntas son:

- ¿Cuáles son las bases y/o causas que configuran la contribución de la pequeña propiedad agraria a la seguridad alimentaria de los propios campesinos e indígenas y de los consumidores urbanos?
- ¿Por qué cierto sector de pequeños propietarios prefiere comprar sus alimentos en lugar de producirlos directamente?, ¿qué influye para que la tierra y fuerza de trabajo familiar estén destinadas a producir *commodities* (soya, hoja de coca)?
- ¿El acceso a más tierras -mediante el reconocimiento jurídico de territorios indígenas- ha permitido mejorar las condiciones de vida, reducir la dependencia externa y atenuar la vulnerabilidad en el suministro y abastecimiento de los alimentos?

Estas son algunas de las preguntas que han dado lugar a los cinco estudios que componen este trabajo. En las siguientes secciones de este marco introductorio, vamos a abordar algunos de los temas emergentes sobre el papel que tienen y el lugar que ocupan los pequeños propietarios campesinos e indígenas para la seguridad y soberanía alimentaria.

² Esta caracterización preliminar más bien debería considerarse como un punto de partida provisional para el debate sobre qué es la pequeña propiedad o la agricultura campesina. Bernstein (2010) es uno de los académicos que más argumentos presenta sobre la necesidad de definir con claridad términos como 'agricultura familiar', 'agricultura a pequeña escala', 'agricultura campesina', entre otros. Una razón para esta discusión es la complejidad y diversidad de las formas de producción a pequeña escala, por tanto, el tratamiento indiferenciado no ayuda a entender las tensiones internas y los intereses sectoriales que cada vez son más evidentes dentro de los movimientos rurales.

Seguridad alimentaria vs. Soberanía alimentaria

Un primer punto que merece atención es la discusión entre dos conceptos competitivos entre sí: seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. El primero goza de una amplia aceptación y tiene un uso generalizado, sin embargo, es cuestionado con fuerza por movimientos campesinos y defensores de la producción a pequeña escala, quienes optan por planteamientos alternativos como 'soberanía alimentaria' (Vía Campesina 1996, IPC 2007, Windfuhr y Jonsén 2005). A continuación vamos a abordar brevemente esta cuestión.

Especialmente la crisis alimentaria de 2007-2008 y la elevación permanente de los precios de alimentos han provocado mayor atención mediática y generalizada preocupación sobre la 'seguridad alimentaria' a escala global, nacional y local. Pero, ¿qué es seguridad alimentaria? La definición de la FAO –la más conocida y expandida– se fundamenta en función de cuatro componentes: disponibilidad de alimentos, acceso de las personas a éstos, uso de los alimentos y estabilidad en el acceso (FAO 2006). La condición necesaria es que sean al menos suficientes en disponibilidad y acceso. Este y muchos otros intentos de conceptualización siguen siendo empeños inconclusos porque dan lugar a más preguntas ¿disponibilidad y acceso en qué términos?, ¿en términos de capacidad adquisitiva, precios o control (autoabastecimiento) de los alimentos? También no está claro si por 'suficiente' nos referimos a ingresos mínimos vitales o a requerimientos de energía y nutrientes.

En sus orígenes, el término 'seguridad alimentaria' fue usado para describir si un país tenía acceso a suficientes alimentos para satisfacer los requerimientos energéticos de su población (Pinstrup-Andersen 2009). La preocupación por la seguridad alimentaria nacional de alguna manera estuvo asociada al 'autoabastecimiento', esto es, políticas nacionales para producir a nivel de cada Estado-nación los alimentos que la población necesita. Por ejemplo, la preocupación boliviana posterior a la Reforma Agraria de 1953 fue la 'sustitución de los alimentos importados' mediante la producción nacional para alcanzar el autoabastecimiento (Sanabria 1993, Fifer 1982, Urioste y Pacheco 2001). Debido a estas razones históricas, hoy en día cuando se habla de 'soberanía alimentaria', con frecuencia aún se entiende por tal término la intención por producir y consumir alimentos nacionales prescindiendo de importaciones y del mercado externo de alimentos.

Sin embargo, 'soberanía alimentaria' tiene una connotación más compleja y está en permanente proceso de redefiniciones desde que, en 1996, Vía Campesina la introdujo como parte de su discurso contra la inclusión de la agricultura dentro de los procesos de globalización y políticas de liberalización de mercados. La primera definición establecida en la declaración "Soberanía Alimentaria, un futuro sin hambre", de 1996, señala que:

“Soberanía alimentaria es el derecho de cada nación para mantener y desarrollar su propia capacidad para producir los alimentos básicos de los pueblos, respetando la diversidad productiva y cultural. Tenemos el derecho a producir nuestros propios alimentos en nuestro propio territorio de manera autónoma. La soberanía alimentaria es una precondition para la seguridad alimentaria genuina” (Vía Campesina 1996:1).

Esta definición ha sido interpretada como una demanda de protección de mercados nacionales para incrementar el nivel de autoabastecimiento o autosuficiencia, sobre la base del desarrollo de la agricultura nacional (Lee 2007); sin embargo, desde el movimiento por la soberanía alimentaria se insiste en que existen otros componentes igual o más importantes, relacionados con la demanda de cambiar el modelo productivo dominado por el agronegocio, mejorar el acceso a recursos productivos para los campesinos e implementar el derecho humano a la alimentación (IPC 2006). Estas ideas adquieren una mayor complejidad a partir del Foro para la Soberanía Alimentaria de 2007, donde destacan demandas de nuevas políticas de comercio para cancelar los acuerdos internacionales basados en políticas neoliberales y restringir los modelos de agricultura que inhiben la expansión de alimentos localmente producidos y controlados (Foro para la Soberanía Alimentaria de 2007). En 2009, la “Evaluación Internacional del papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo” (IAASTD) introdujo una reinterpretación orientada hacia la exigibilidad de derecho a la alimentación. Desde entonces muchas veces por soberanía alimentaria se entiende como “el derecho de los pueblos y los estados soberanos a determinar democráticamente sus propias políticas agrícolas y alimentarias” (IAASTD 2009). Por tanto, el derecho a decidir tiene relación con preguntas como quién producirá los alimentos, cómo lo hará y quién se beneficiará. Patel (2009: 667) propone a modo de respuesta a estas preguntas que ‘soberanía alimentaria’ “es el derecho a tener derechos sobre los alimentos”.

En este escenario marcado por la presencia visible de movimientos por la soberanía alimentaria, el término de ‘seguridad alimentaria’ ha sido expuesto a una lluvia de críticas. La razón fundamental es que se lo asocia con las políticas de liberalización de los mercados internacionales de alimentos. Aunque sus defensores a menudo presentan el concepto de seguridad alimentaria como neutral respecto a políticas de libre mercado, la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha alimentado la polémica al señalar que las estrategias nacionales de seguridad alimentaria deberían basarse en el comercio internacional de alimentos debido a que éste hace posible la disponibilidad de alimentos a precios competitivos, activa incentivos económicos y da señales claras para que cada país produzca aquello en que tenga ventajas y mayor eficiencia (OMC 2002). El problema con esta mirada es que en los últimos años las políticas de los países desarrollados (Estados

Unidos, Unión Europea) solo favorecieron la creación de entornos propicios para comercializar, desde países como Bolivia, materias primas agrícolas mientras que sus mercados de alimentos y sector agrícola permanecen protegidos y subvencionados (McMichael 2005).

En algún momento, la propia FAO –cuya preocupación central es la seguridad alimentaria– ha puesto en duda las bondades de la liberalización del mercado internacional de alimentos aunque está claro que no es su opción política dominante (FAO 2003). El problema para los países pobres son las desiguales relaciones de poder que exponen a mayor vulnerabilidad económica y social a los pequeños productores y crean condiciones e incentivos perversos que sientan bases para que la agricultura comercial a gran escala, cada vez y con más fuerza, esté encaminada a producir materia prima agrícola para la exportación.

En Bolivia, el debate sobre la adopción de uno u otro término alcanzó su punto más alto durante la redacción de la Constitución Política del Estado (2007-2009). Pero el resultado más bien es impreciso porque fusiona ambos conceptos en un nuevo término: “seguridad y soberanía alimentaria”³. Esto implica i) incremento sostenido y sustentable de la productividad agrícola, pecuaria y agroindustrial, ii) articulación y complementariedad interna de las estructuras de producción agropecuarias y agroindustriales, iii) logro de mejores condiciones de intercambio económico del sector productivo rural en relación con el resto de la economía boliviana, iv) significación y respeto de las comunidades indígena originario campesinas y v) fortalecimiento de la economía de los pequeños productores agropecuarios y de la economía familiar y comunitaria (CPE 2009, art. 405). Según Pacheco (2009: 36) es “un proceso de ruptura con anteriores esquemas que no son cuestionadores de las influencias externas sobre las decisiones soberanas de los países y sus habitantes”. Esto se traduce básicamente en un rol más activo del Estado a través de la creación de empresas públicas de alimentos (EMAPA, AZUCAR BOL, LACTEOSBOL), seguro agrícola, prohibiciones temporales de exportación, programas de mecanización del agro y el Banco de Desarrollo Productivo (BDP). Sin embargo, este retorno del Estado al agro no tiene alcances significativos en los temas claves como la regulación del modelo agroindustrial de re-primarización o del uso indiscriminado de semillas transgénicas que condena el movimiento por la soberanía alimentaria. Es decir, la conjunción de los dos conceptos y su traducción en políticas públicas no implica necesariamente un avance conceptual coherente ni supera las contradicciones que persisten en la práctica.

3 El año 2011, el gobierno aprobó la Ley N° 144 de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria cuya finalidad es “lograr la soberanía alimentaria en condiciones de inocuidad y calidad para el vivir bien de las bolivianas y los bolivianos, a través de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria en el marco de la economía plural”. Es uno de los pocos documentos donde se utiliza el término “seguridad con soberanía alimentaria” pero sin prescindir del que está constitucionalizado.

Seguridad alimentaria a nivel de hogares

A diferencia de las visiones contrapuestas que existen cuando se habla de seguridad alimentaria a nivel nacional, a nivel micro (hogares, familias) este término ha sido utilizado ampliamente para evaluar el nivel de bienestar y desarrollar herramientas prácticas para la puesta en marcha de programas y proyectos. La multidimensionalidad con que la FAO (2006) aborda el tema se refleja en los cuatro componentes centrales: disponibilidad de alimentos, acceso y utilización de alimentos y estabilidad a lo largo del tiempo. En otros términos, se considera que un hogar tiene seguridad alimentaria si sus miembros tienen la habilidad de adquirir los alimentos que se requieren (Pinstrup-Andersen 2009). Es importante señalar que esta habilidad no siempre se traduce en la efectiva adquisición, particularmente cuando las familias priorizan la adquisición de otros bienes y servicios básicos como vivienda, educación, transporte, etc. La seguridad alimentaria a nivel de hogares tampoco se traduce automáticamente en una nutrición adecuada de las personas ya que para ello intervienen otros factores como el acceso a servicios básicos de salud, información nutricional, agua potable, entre otros. Por tanto, la habilidad económica para el acceso a alimentos es un factor importante pero no el único para la seguridad alimentaria de las familias.

Pero en términos metodológicos y prácticos, ¿es posible calcular la seguridad alimentaria de los hogares?, si son hogares de pequeños propietarios campesinos e indígenas, ¿su seguridad alimentaria se debería estimar de otra manera? Estas preguntas han sido parte de las discusiones que han acompañado la elaboración de los cinco estudios de caso que siguen a esta sección. Y es que la medición de seguridad alimentaria es por demás compleja.

Las dificultades en la medición de la seguridad alimentaria de los hogares rurales han provocado discusiones inconclusas sobre si tierra y fuerza de trabajo familiar deberían estar dedicadas a obtener ingresos monetarios o a producir la mayor variedad posible de alimentos para el consumo propio. La definición predominante de seguridad alimentaria tiende a asociar mayores ingresos económicos con mayor grado de seguridad alimentaria porque los componentes 'disponibilidad' y 'acceso' son los más preponderantes y están asociados a las operaciones y lógicas de economías de mercado. Bajo esta perspectiva, para el acceso a alimentos no interesa el control de los productores sobre los alimentos que consumen y, para alcanzar la seguridad alimentaria, es aceptable tanto el uso de modernas tecnologías (semilla transgénica, maquinarias) como el conocimiento tradicional de campesinos e indígenas (Lee 2007). También los problemas de medición afectan el uso y el destino de los recursos públicos porque la ambigüedad con que se

utiliza el término ‘seguridad alimentaria’ no proporciona argumentos sólidos para la toma de decisiones sobre si se debería promover principalmente la agricultura comercial orientada al mercado, un modelo regionalizado y combinado o la agricultura agro-ecológica a pequeña escala.

Los cinco estudios de caso también reflejan estas limitaciones e indefiniciones metodológicas, cuya explicación vamos a ampliarla más adelante. En terreno, hemos observado que el consumo alimentario depende de una amplia gama de estrategias económicas, desde pequeños propietarios especializados en un determinado rubro del agro (soya, coca, ganado), campesinos vendedores de su fuerza de trabajo, hasta pequeños productores tradicionales que aun diversifican su producción y consumo. Este último caso podría sugerir que la agricultura diversificada permite alcanzar un alto grado de seguridad alimentaria en términos nutricionales y de una dieta variada; sin embargo, a menudo está asociada con sistemas productivos pobres y con serias limitaciones para generar excedentes, en consecuencia, son hogares pobres que gastan la mayor proporción de sus energías e ingresos en alimentación. En contraste, podemos encontrar agricultores especializados en producción de materias primas agrícolas de exportación que tienen mayor habilidad económica para adquirir alimentos, situación que puede ser valorada como buen nivel de seguridad alimentaria pero este tipo de agricultores no cumplen una función social en calidad de productores de alimentos y, al contrario, refuerzan la dependencia de la población tanto urbana como rural de la agricultura comercial a gran escala que suministra alimentos a precios cada vez más elevados.

Pequeños propietarios: ¿productores de alimentos o simples consumidores?

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria (INE 2009), los principales granos y productos agropecuarios se producen en el departamento de Santa Cruz: 99 por ciento de soya, 89 por ciento de caña de azúcar, 82 por ciento de arroz, 72 por ciento de maíz y 64 por ciento de trigo. Sin embargo, según el último Censo de Población (INE 2012), el 80 por ciento de la población rural boliviana está asentada fuera de esta región del país quienes producen el resto –la parte minoritaria– de los productos mencionados y parte de otros productos agropecuarios. Este es el resultado de cambios agrarios recientes ante el auge del sector agroindustrial desde inicios de los noventa y, en contraposición, el declive de la producción campesina en las tierras altas (Colque 2014, Urioste 2011). Ante esta realidad nacional, es problemático sostener que los pequeños propietarios –objeto de nuestro análisis– cumplen una función social preponderante en calidad de productores

de alimentos para su propia seguridad alimentaria y menos aún para la seguridad y soberanía alimentaria nacional.

Uno de los varios escenarios posibles, que se aborda en esta serie es cómo la tierra, la fuerza laboral y el capital productivo son destinados a la producción de materia prima agrícola cuyo fin no es el abastecimiento del mercado interno de alimentos. En muchos casos se trata de procesos de sustitución de cultivos alimenticios típicos o tradicionales por cultivos comerciales (por ejemplo soya) cuyo costo ambiental es la deforestación del bosque y el costo social se refleja en procesos de diferenciación campesina donde unos pocos controlan la tierra y la renta agrícola mientras que la mayoría sufre despojo y marginalización (Castañón 2014). Es una opción que genera mayores ingresos de forma directa e indirecta para muchos productores, aunque así sea a costa de su subordinación al modelo agroexportador. De forma similar, está el caso de los pequeños propietarios que se dedican a la producción de cultivos con alto valor de mercado (por ejemplo hoja de coca) cuyo precio está fijado por la alta demanda no solo para el consumo tradicional (*acullico*) sino también porque tiene usos alternativos como materia prima en el mercado ilegal (Urioste 2014).

En contraposición a la intensificación de monocultivos de materias primas, está un modo de vida rural dominado por pequeños propietarios que producen parcialmente los alimentos que consumen y completan su capacidad adquisitiva vendiendo los pocos excedentes agrícolas y en muchos casos principalmente su propia fuerza de trabajo. Son productores de alimentos para el autoabastecimiento y para el mercado pero la actividad agrícola por sí sola es inhábil para absorber toda la fuerza de trabajo familiar. Son nuevas realidades que se caracterizan por la acentuada precariedad de su sistema productivo y su dependencia de ingresos no agrícolas. Algunos han problematizado esta realidad como la 'nueva ruralidad' con agricultores 'multifuncionales' (Teubal 2002, Llambí 2000b). Los programas de titulación promueven el acceso a tierras como una manera de combatir la precarización del campesinado, pero en esta publicación se exponen evidencias, por ejemplo, sobre cómo los indígenas guaraníes no lograron cambios sustanciales en su modo de vida con el reciente control territorial y acceso legal a la titulación de sus territorios.

Una limitación de importancia es que la titulación de tierras a favor de este sector solo ha consolidado derechos propietarios sobre tierras marginales con bajo potencial productivo. Esto porque las mejores tierras siguen siendo controladas por medianos productores y ganaderos; por tanto, las relaciones económicas y sociales preexistentes se mantienen, con un pequeño sector envuelto en el agro comercial y guaraníes trabajando en calidad de jornaleros dentro y fuera del agro

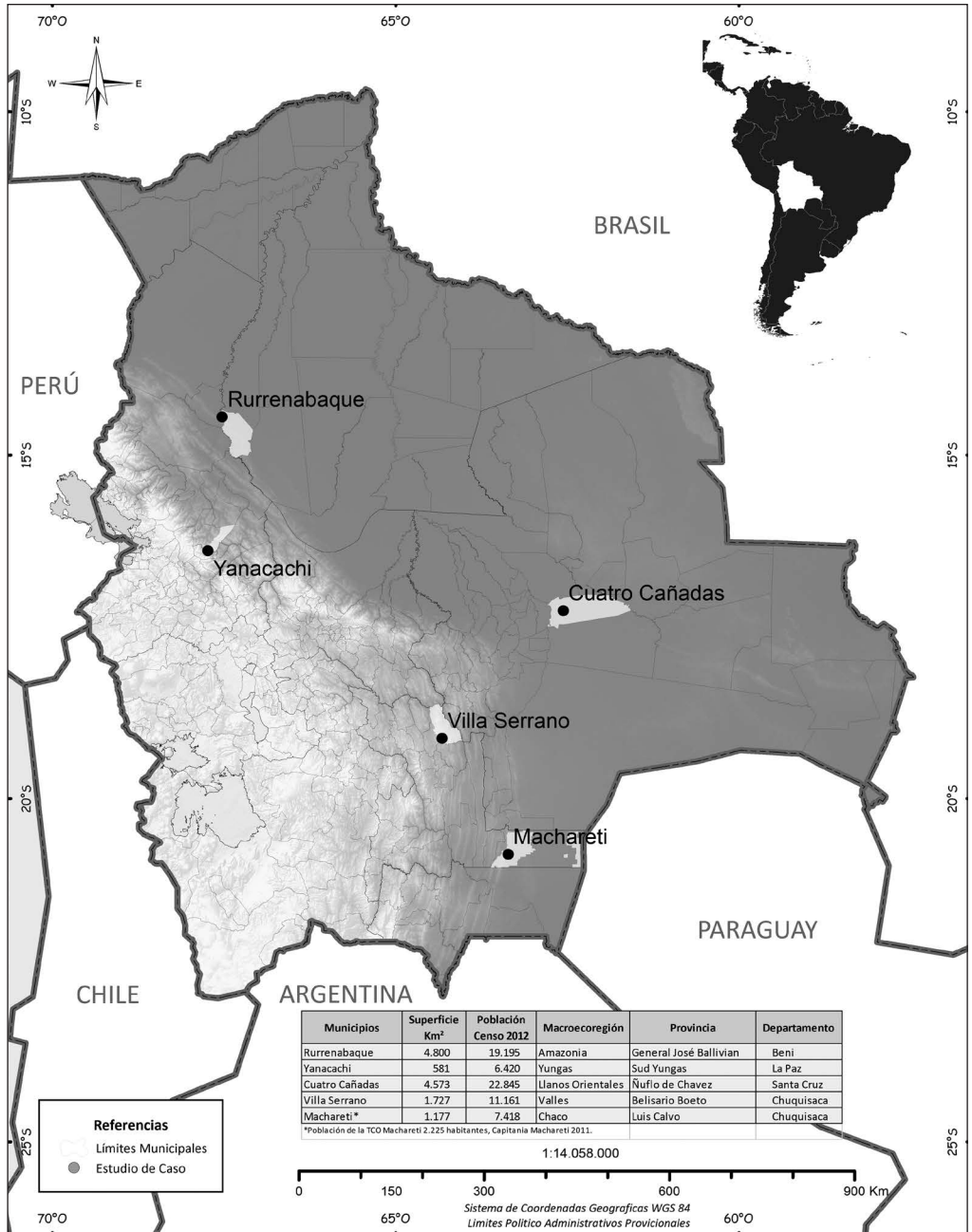
(Eyzaguirre 2014). La dedicación parcial de la fuerza laboral entre la agricultura y actividades extraprediales significa que la dedicación exclusiva a la explotación de las pequeñas propiedades no garantiza seguridad alimentaria familiar ni en términos de ingresos económicos suficientes para el mínimo vital, ni en términos de disposición de los alimentos consumidos en el hogar. También se presentan argumentos para sostener que, en ciertos contextos rurales donde el minifundio aun no es un problema agudo, el control de recursos y diversificación productiva contribuyen significativamente a la seguridad alimentaria de los hogares campesinos (Jaldín 2014).

Finalmente, otra realidad rural poco conocida refiere a campesinos que sí cumplen una función social en calidad de productores de alimentos. No son solamente consumidores. Uno de los trabajos (sobre la región de Rurrenabaque) señala que la concurrencia de una serie de factores genera condiciones óptimas para la configuración de una economía local/regional que integra de forma complementaria la agricultura y ganadería campesina con la economía urbana/regional que genera empleo para la fuerza de trabajo excedentaria y demanda alimentos para el consumo de la población urbana (Pérez 2014). En tal escenario, los pequeños propietarios alcanzan puntajes altos cuando se trata de valorar su consumo alimentario y también logran incrementar su habilidad para adquirir o acceder a alimentos al disponer de ingresos económicos relativamente más altos –obtenidos de la venta de ganado– con respecto a la situación de los campesinos empobrecidos.

Presentación de los estudios de caso

Los cinco estudios de caso tienen en común el propósito de aportar evidencias recogidas en campo sobre el papel de las pequeñas propiedades para la seguridad y soberanía alimentaria. La unidad de análisis es la familia campesina y/o indígena que tiene acceso a pequeñas parcelas de tierras y trabaja directamente las mismas. Cada estudio refleja la situación de los campesinos e indígenas en cinco contextos rurales ubicados en diferentes lugares de la geografía boliviana.

Mapa 1
Ubicación de los cinco estudios de caso



Cuadro 1
Características generales de las zonas de estudios de caso

Nº	Características	1. Municipio Cuatro Cañadas	2. Municipio Yanacachi	3. TCO Machareti	4. Municipio Villa Serrano	5. Municipio Rurrenabaque
A. INFORMACIÓN GENERAL						
1	Ubicación geográfica / macroregión	Dpto. de Santa Cruz, Prov. Ñuño de Chavez Llanos orientales	Dpto. de La Paz, Prov. Sud Yungas	Dpto. de Chuquisaca, Prov. Hernando Siles Chaco	Dpto. de Chuquisaca, Prov. Belisario Boeto Valles interandinos	Dpto. de Beni, Prov. José Ballivián Amazonia
2	Fisiografía	Llanuras aluviales antiguas	Montañas medias con disección fuerte	Colinas medias con disección fuerte a moderada	Serranías altas con disección fuerte	Serranías altas con disección moderada
3	Tipo de propiedad de la tierra	Individual	Individual	Comunal	Mixta comunal e individual	Individual
4	Población (Censo 2012)	22.845	6.420	7.418 a nivel municipal 2.225 en la TCO Machareti	11.161	19.195
5	Principales actividades económicas	Cultivos agroindustriales: soya, girasol	Cultivo de coca Minería	Venta de fuerza de trabajo Agricultura	Agricultura diversificada Ganadería	Ganadería Agricultura
6	Incidencia de la pobreza extrema (*) (2001)	0.592 (dato anterior a la creación del municipio, corresponde al municipio de San Julián)	0.397	0.660 (dato a nivel municipal)	0.771	0.412
B. DATOS DE LA ENCUESTA						
7	Unidad de análisis	Pequeña propiedad de campesinos colonizadores de origen quechua y aymara	Pequeña Propiedad campesina de origen aymara	Familias Indígenas de origen guaraní	Pequeña propiedad campesina de origen quechua	Pequeña propiedad colonizadores de origen aymara
8	Comunidades estudiadas	Naciones Unidas Nuevo Palmar	La Chojlla Santa Rosa Machacamarcá Chaco	Tentami Isipotindi Carandayticitio	Nuevo Mundo Zamora Lampacillos Huacahuasi Mendoza	San Silvestre Collana Piedras Blancas San Pablo Nuevos Horizontes Chocolatal Wara Wara
9	Número de familias encuestadas (Total 247)	55	65	39	55	60
10	Puntaje Consumo Alimentario (PCA) Promedio (**)	79	88	54	62	73
11	Porcentaje de familias con seguridad alimentaria	63%	82%	56%	67%	77%
12	Porcentaje de familias con inseguridad alimentaria Severa	2%	0%	18%	4%	0%

(*) Incidencia de la Pobreza Extrema. Refleja el porcentaje de personas que residen en hogares cuyos ingresos no alcanzan para adquirir una canasta básica de alimentos incluso destinando la totalidad de sus ingresos.

(**) PCA. Refleja la cantidad y/o calidad de la dieta de las personas, el valor energético y el contenido de macro y micronutrientes de los alimentos que consumen las familias (PMA 2009). El puntaje máximo posible de alcanzar es 112. Si el puntaje es menor a 28 el nivel de consumo alimentario es pobre en cantidad y calidad, cuando está entre 28 y 42 el consumo es satisfactorio en cantidad pero no en calidad y, finalmente, si es mayor a 42 puntos, el consumo es aceptable, esto implica que se consumen las cantidades mínimas de todos los grupos alimentarios.

Abrimos esta colección de estudios con el caso de campesinos soyeros en el municipio de Cuatro Cañadas del departamento de Santa Cruz. Aunque es un municipio compuesto por alrededor de 4.500 familias rurales, nuestro trabajo se basa en datos cuantitativos (55 boletas de encuesta de hogares) y cualitativos recogidos solamente en dos comunidades: Naciones Unidas y Nuevo Palmar. Este caso tiene una particular relevancia. Son campesinos colonizadores cuya dinámica productiva relativamente inactiva por varios años, se ha intensificado en los años recientes ante el *boom* de la soya. Las extensiones de tierras cultivadas se han ampliado rápidamente, los cultivos de ‘subsistencia’ han sido desplazados por cultivos comerciales y el uso de capital y tecnología es mucho mayor. El trabajo explica que este no es un proceso que afecta por igual a todos sino que impacta de forma heterogénea y surgen procesos de diferenciación social y económica entre los campesinos. En el contexto regional, estos cambios en la agricultura campesina son parte de las nuevas dinámicas agrarias liderizadas por los medianos y grandes propietarios. No son procesos de larga data pero uno de los temas de nuestro interés es centrar la mirada en quiénes pierden en este escenario y cómo esto afecta a su seguridad alimentaria.

El segundo caso es sobre los campesinos cocaleros en el municipio de Yanacachi del departamento de La Paz. Guarda algunas similitudes con el anterior caso en cuanto son pequeños agricultores que no producen alimentos sino materia prima agrícola. Los cocaleros también dependen intensamente del mercado para conseguir los recursos económicos que necesitan para comprar los alimentos que consumen. Son campesinos vendedores de hoja de coca y compradores de la mayor parte de los alimentos que consumen. No se trata de un proceso reciente de sustitución de cultivos sino que son productores tradicionales de hoja de coca cuyo modelo mercantil de cultivo de coca se remonta hasta épocas coloniales. Lo nuevo está en la intensificación de esta actividad especializada pero, al parecer, no tienden hacia un modelo a gran escala y acumulación de capital debido en parte al control social de los propios productores y debido a la naturaleza ilegal de una parte del mercado nacional de la hoja de coca. Esta intensificación ocurre ante la demanda estable y creciente de este producto y con precios cada vez más atractivos. El estudio ofrece evidencias para responder a interrogantes tales como por qué los yungueños no producen al menos una parte significativa de sus propios alimentos o por qué no producen alimentos para el mercado interno o nacional. Pero también ofrece argumentos para señalar que el mejor escenario posible, en términos de generación de ingresos económicos estables, es producir hoja de coca porque de esa manera elevan su habilidad de ‘acceso’ a alimentos y, probablemente, su nivel de seguridad alimentaria es mayor bajo esta estrategia que cultivando y consumiendo sus propios alimentos (Urioste 2014).

El tercer estudio está dedicado a los indígenas guaraníes de la TCO Macharetí, en el sur del departamento de Chuquisaca. En esta zona del chaco boliviano, las familias guaraníes se beneficiaron recientemente con la titulación de un territorio colectivo bajo la figura de TCO⁴. El territorio de Macharetí abarca 117.783 hectáreas y beneficia 2.225 pobladores, esto es 53 hectáreas por persona. A primera vista, se observa que el acceso a la tierra mejoró, al menos en términos de extensión titulada. Sin embargo, el trabajo ofrece evidencias y análisis que develan que la seguridad alimentaria sigue siendo frágil, vulnerable y dependiente de las bases materiales previas a la titulación de nuevas tierras. El trabajo ilustra la falta de correlación entre acceso a más tierras y mejor nivel de seguridad alimentaria destacando que las tierras con mejores condiciones productivas siguen en manos o bajo el control de otros actores y productores (patrones ganaderos), de modo que muchas familias guaraníes no tienen más opción que seguir empleándose como mano de obra en otras propiedades agropecuarias y sectores económicos a cambio de remuneraciones en dinero (Eyzaguirre 2014).

El cuarto caso trata la situación de los campesinos de Villa Serrano. Esto es en los valles de Chuquisaca donde predomina la falta de acceso al agua para riego. No es un caso que llame la atención por algún fenómeno reciente que haya ocurrido, como el auge de la soya, coca o acceso a más tierras. Se trata de campesinos tradicionales pobremente integrados al mercado. El trabajo explica la persistencia de un modo de vida rural típico en la zona andina y que ha sido ampliamente estudiado y categorizada muchas veces como economías de subsistencia que no están guiadas por la lógica capitalista (Albó 1985, Condarco y Murra 1987, Carter y Albó 1988). Atestigua la persistencia del campesino y niega las predicciones marxistas de desaparición del campesinado como modo de producción diferenciado del sistema capitalista. Indagando cambios en los patrones de consumo, interacciones entre tenencia y producción diversificada, el estudio sugiere que la seguridad alimentaria de los campesinos depende significativamente del autoabastecimiento pero también es evidente que su canasta básica alimentaria contempla productos de origen agroindustrial, por tanto, también crece la necesidad de emplearse como mano de obra barata en otros sectores económicos y en los centros urbanos, principalmente a través de migraciones temporales de los hombres (Jaldín 2014).

Por último, cerramos esta serie con el estudio sobre los campesinos colonizadores de Rurrenabaque, en la zona amazónica del departamento de Beni. Al igual que los campesinos soyeros, son campesinos migrantes de primera o segunda

4 TCO es el acrónimo de Tierras Comunitarias de Origen. Este es uno de los tipos de propiedad agraria reconocido en la ley de tierras desde 1996 (Ley 1715 del INRA) que protege los derechos colectivos y territoriales de los pueblos indígenas tanto en tierras bajas como en tierras altas.

generación. El estudio documenta el proceso histórico de las comunidades asentadas en esta región y el desarrollo de una economía local dinamizadora de un mercado de alimentos de carácter regional. Dado que es un proceso económico que afecta de forma desigual a las familias, el estudio identifica y explica los distintos estratos de riqueza y las fuentes de ingresos diferenciadoras como la ganadería campesina o la actividad turística. Al igual que en las otras secciones, el interés sigue siendo entender los efectos de estas dinámicas sobre la seguridad alimentaria. El resultado es que los campesinos habrían logrado insertarse exitosamente en una red de interdependencias y complementaciones económicas de carácter local/regional, alcanzando mejores niveles de seguridad alimentaria en cuanto a ingresos económicos y producción propia, pero tal equilibrio es posible solo bajo ciertas circunstancias y se encontraría amenazado por la expansión geográfica y espacial de la lógica de libre mercado (Perez 2014).

Cuestiones metodológicas

Los cinco estudios de caso corresponden a la segunda fase de un trabajo de investigación que comenzó el año 2011 con el apoyo de IDRC. Los resultados de la primera fase se publicaron bajo el título “¿Comer de nuestra tierra?: estudios de caso sobre tierra y producción de alimentos en Bolivia” el año 2013 (Fundación TIERRA 2013). En esa ocasión, se privilegió el análisis cualitativo en base a fuentes de información primaria recogida a través de entrevistas y trabajo de campo. Se realizaron entrevistas familiares, talleres participativos en las comunidades y grupos focales⁵.

Además de las fuentes de información y material producido en la mencionada primera fase, ahora estos estudios incorporan información primaria de carácter cuantitativo recolectada a través de la aplicación de una encuesta a nivel de hogares: 55 boletas en Cuatro Cañadas, 65 en Yanacachi, 39 en Macharetí, 55 en Villa Serrano y 60 en Rurrenabaque. En total son 247 boletas de encuesta⁶. La metodología se basa en el manual para la Evaluación de la Seguridad Alimentaria en Emergencias desarrollado por el Programa Mundial de Alimentos para identificar indicadores de la situación de seguridad alimentaria (PMA 2009). De entre varios indicadores que propone el PMA, se han utilizado los indicadores de consumo y de acceso a los alimentos.

El indicador de consumo de alimentos utilizado es el Puntaje de Consumo de Alimentos (PCA). “Se trata de un indicador proxy que representa la diversidad dietaria, el valor energético y el contenido de macro y micronutrientes de los ali-

5 Con respecto a la primera fase, el presente documento da continuidad a cuatro de los seis estudios de caso, excluyendo el caso del municipio de Comarapa (Santa Cruz) y el municipio de Tiwanaku (La Paz) e incluyendo el municipio de Rurrenabaque (La Paz). Los casos que no están contemplados aquí, forman parte de otra publicación en proceso de elaboración que profundiza temas complementarios a la preocupación central de esta publicación: seguridad alimentaria entre los pequeños propietarios.

6 Para interpretar los hallazgos, es importante tomar en cuenta que estas muestras no son representativas del universo de cada municipio/región, por tanto, cualquier interpretación basada en esta información se debe considerar solo como aproximaciones.

mentos que consumen las familias” (PMA 2009: 72). Para un periodo de referencia de siete días, se recolectan datos sobre el número de grupos de alimentos que consume un hogar, la frecuencia de consumo y la importancia nutricional relativa de los distintos grupos de alimentos. El puntaje PCA más alto posible de registrar es 112, lo que significa la más alta calidad del consumo alimentario (aporte calórico, energético, nutrientes, etc.)⁷. Se considera que el consumo alimentario es pobre cuando el PCA es menor a 28, el consumo está al límite cuando el indicador está entre 28 y 42 y, por último, se considera que el consumo es aceptable cuando el indicador es mayor a 42 puntos.

El indicador de acceso a alimentos mide la capacidad de un hogar para adquirir los alimentos disponibles. Tal como señala el manual de PMA (2009: 77), no es posible definir un único indicador estándar porque el acceso a alimentos depende de las múltiples estrategias y modos de vida. Para este trabajo, hemos adaptado y establecido lo que denominamos el Indicador de Acceso a Alimentos (IAA) que valora la confiabilidad y sostenibilidad de las fuentes de suministro de alimentos (compra, producción propia y otras) y de las fuentes de ingresos (venta de productos, venta de fuerza de trabajo, otras). Las distintas combinaciones posibles y valoraciones de las fuentes de alimentos e ingresos resultan y se categorizan como IAA bueno, regular y malo. La categoría IAA bueno indica una situación deseable con suministro continuo de alimentos, en suficiente cantidad para cubrir las necesidades y que cubren los requerimientos nutricionales. El IAA malo indica una situación deficitaria y de vulnerabilidad y el IAA regular una situación intermedia.

Es importante subrayar que estos indicadores tienen sus limitaciones debido a que la seguridad alimentaria de los hogares no es fácil de medir en todos sus componentes. Por ejemplo, las preguntas sobre el consumo alimentario ofrecen datos sobre qué alimentos consume la gente y con qué frecuencia pero la información obtenida no refleja necesariamente la disponibilidad continua de alimentos o las posibilidades económicas de adquirirlos. Los alimentos que se consumen en un hogar dependen de muchas otras variables como los precios, el sistema productivo local y regional, consumo de otros bienes de primera necesidad o los mecanismos de autoabastecimiento. Del mismo modo, averiguar las fuentes de ingresos y de alimentos puede ayudar a entender el grado de acceso a los recursos (recursos económicos y recursos naturales) de las familias rurales pero no nos dice mucho sobre por qué unos tienen un consumo más diversificado y otros lo contrario. En los hechos esto significa que si dos hogares que tienen similares fuentes de acceso a ingresos y alimentos, esto no se traduce necesariamente en que ambos tienen el mismo nivel de seguridad alimentaria en términos de una dieta alimentaria balanceada.

7 Para referencia metodológica detallada revisar PMA 2009 y Wiesmann y otros 2009.

Conclusión

En suma, esta colección de estudios presenta argumentos para sostener que el papel de la pequeña agricultura para la seguridad y soberanía alimentaria se está reconfigurando y de forma visible debido a las recientes y rápidas transformaciones agrarias orientadas a la consolidación de un modelo de agricultura comercial a gran escala que principalmente produce materia prima de exportación y secundariamente alimentos para el mercado nacional. Los pequeños propietarios de tierras tienden a producir menos alimentos porque en muchos contextos rurales la mejor alternativa es destinar tierra, trabajo y capital –de forma parcial o total– a otros rubros productivos que generan mayores rentas e ingresos. Esta propensión hacia agricultores no productores de alimentos que ocurre a nivel micro, tiene relación con los cambios agrarios del nivel macro que se caracterizan por el creciente control del sector agroindustrial sobre el conjunto del proceso productivo en todo el país y del mercado interno y externo de alimentos.

Los campesinos e indígenas han incorporado de forma creciente en su dieta alimentaria básica varios productos de origen industrial, casi indistintamente de la intensidad regional de las relaciones de mercado. Alimentos como el azúcar, arroz, aceite comestible y carne de pollo están entre los alimentos con mayor frecuencia de consumo en el campo. La capacidad adquisitiva de los campesinos e indígenas para comprar estos alimentos se basa en la especialización en uno o pocos rubros agropecuarios, en la venta de su fuerza de trabajo y en menor grado en remesas y otro tipo de transferencias. El consumo de alimentos de campesino a campesino (por ejemplo, campesinos productores de papa que compran maíz en mercados regionales) no guarda relación con la importancia histórica de estas prácticas debido al declive de los mercados campesinos de intercambio y la facilidad de sustitución de alimentos de origen campesino por productos de origen industrial, especialmente carnes, cereales y derivados (arroz, harina de trigo). La papa es uno de los pocos alimentos de origen campesino cuyo consumo está extendido en distintas regiones y entre distintos tipos de pequeños propietarios. Sin embargo, a pesar de que en Bolivia este tubérculo se cultiva casi en todas las regiones del país y proviene mayormente del autoabastecimiento, varias fuentes de información sugieren el paulatino crecimiento de la importación legal y de contrabando de la papa (Milenio 2014, Zeballos y otros 2009).

Una de las preguntas centrales que nos hemos planteado es ¿cuál es el estado del consumo alimentario en las zonas de estudio? En términos de los indicadores de PCA e IAA los estudios constatan que el consumo alimentario deficitario y vulnerable afecta a la menor parte de las familias campesinas e indígenas en las comunidades estudiadas, siendo el caso de la TCO Machareti la peor situación con una tasa de inseguridad alimentaria que afecta a 18% de las familias encuestadas.

Los agricultores de las zonas de colonización y yungueña tienen una situación más aceptable al disponer de fuentes de ingresos y consumo más estables y accesibles. La diferenciación económica entre los campesinos –más evidente en zonas de agricultura comercial– se refleja también en la composición de la canasta de alimentos ya que los campesinos ‘acomodados’ diversifican más su consumo y tienen acceso a alimentos no tradicionales que provienen de otras zonas a precios más altos, mientras que los campesinos ‘pobres’ satisfacen sus necesidades alimentarias a base de producción propia.

Para concluir, hemos encontrado que el papel disminuido de la pequeña agricultura de base campesina e indígena, en tanto productores de alimentos, no conduce necesariamente al empeoramiento de su consumo alimentario. Los estudios presentados sugieren que la pequeña agricultura de base campesina e indígena no es el principal proveedor de alimentos tanto para el autoabastecimiento de las propias familias rurales como para el mercado interno de alimentos. Sin embargo, al parecer este cambio no empeoró la frágil seguridad alimentaria de los campesinos e indígenas en términos de consumo alimentario sino que ellos han modificado sus estrategias económicas y productivas, reorientado el uso de la tierra hacia cultivos más comerciales y/o empleando la fuerza de trabajo familiar en economías no agrícolas a cambio de ingresos monetarios mayores y más estables. Esta dinámica y trayectoria campesina tiene previsibles consecuencias para la seguridad y soberanía alimentaria en Bolivia, sobre todo porque refleja una situación de precariedad e inestabilidad más pronunciada de los pequeños propietarios de la tierra. La brecha creciente entre la agricultura comercial en alza y la precarización de la agricultura campesina e indígena genera altos costos sociales y acelera la reconfiguración del acceso a la tierra con una marcada tendencia hacia la concentración y control de la tierra (incluyendo los beneficios que genera su usufructo) en las zonas agroindustriales y hacia nuevos procesos de diferenciación social y económica entre los propios campesinos e indígenas.

Referencias

- Albó, X. (1985). *Desafíos de la solidaridad aymara. Cuadernos de investigación N° 25*. La Paz: CIPCA.
- Banco Mundial. (2008). *Informe sobre el desarrollo mundial 2008. Agricultura para el desarrollo*. Washington D.C.: Banco Mundial, Mundi-Prensa y Mayol Ediciones, S.A.
- Bernstein, H. (2010). *Class Dynamics of Agrarian Change*. Halifax: Fernwood; US: Kumarian Press.
- Carter, W., y Albó, X. (1988). La Comunidad Aymara: Un mini-estado en conflicto. En X. Albó, *Raíces de América: el mundo aymara* (págs. 451-494). Madrid: Alianza, Unesco.
- Castañón Ballivián, E. (2014). *Cuando la soya se impone: transformaciones en las comunidades campesinas y sus implicaciones alimentarias*. La Paz: TIERRA.
- Colque, G. (2014). *Expansión de la frontera agrícola: Luchas por el control y apropiación de*

- la tierra en el oriente boliviano*. La Paz: TIERRA.
- Condarco, R., y Murra, J. (1987). *La teoría de la complementariedad vertical eco-simbiótica*. La Paz: Hisbol.
- Eyzaguirre, J. (2014). *Dependencia y autoabastecimiento alimentario en la TCO Guaraní de Machareti*. La Paz: TIERRA.
- FAO. (2003). *Trade Reforms and Food Security: Conceptualising the Linkages*. FAO.
- FAO. (2006). *Seguridad Alimentaria*. Roma, Italia: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
- FAO. (2006b). Seguridad alimentaria. *Informe de Políticas 2* (junio).
- FAO. (2014). *Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe: Recomendaciones de Política*. Santiago, Chile: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
- Fifer, V. (1982). The Search for a Series of Small Successes: Frontiers of Settlement in Eastern Bolivia. *Journal of Latin American Studies*. 14, 407-432.
- Fundación TIERRA. (2013). *Informe 2012: ¿Comer de nuestra tierra? Estudios de caso sobre tierra y producción de alimentos en Bolivia*. La Paz Bolivia: Fundación TIERRA.
- Gobierno de Bolivia. (18 de octubre de 1996). Ley N° 1715. *Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (Ley INRA)*. La Paz, Bolivia.
- Gobierno de Bolivia. (2009). Constitución Política del Estado. Estado Plurinacional de Bolivia.
- Gordillo, G. (2012). Una política alimentaria para tiempos de crisis. *El Trimestre Económico* 79.3, 483-526.
- Hernández, L., y Desmarais, A. (2009). Crisis y soberanía alimentaria: vía campesina y el tiempo de una idea. *El Cotidiano* (153), 89-95.
- IAASTD. (2009). *International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development*. By: McIntyre, Beverly D., and Science Knowledge. Island Press.
- INE. (2009). *Encuesta Nacional Agropecuaria 2008*. La Paz, Bolivia: Instituto Nacional de Estadística.
- INE. (2012). Recuperado el 6 de marzo de 2014, de Resultados Censo Nacional de Población y Vivienda 2012: <http://datos.censosbolivia.bo/binbol/RpWebEngine.exe/Portal?&BASE=CPV2012COM>
- IPC. (2006). *International Planning Committee for Food Sovereignty, IPC Focal Points*. Obtenido de <http://www.foodsovereignty.org>
- IPC. (2007). *International Planning Committee for Food Sovereignty*. Obtenido de <http://www.nyeleni.org/spip.php?rubrique3>
- Jaldín, R. (2014). *La persistencia de la agricultura campesina y sus implicaciones alimentarias en Villa Serrano*. La Paz: TIERRA.
- Lee, R. (2007). Food Security and Food Sovereignty. *Centre for Rural Economy Discussion Paper Series No. 11*.
- Llambí, L. (2000b). Globalización y Desarrollo Rural. *Seminario Internacional 'La Nueva Ruralidad en América Latina'*. Bogotá (22-24, agosto): Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).
- McMichael, P. (2005). Global Development and the Corporate Food Regime. En F. Buttel, y P. McMichael (eds), *New Directions in the Sociology of Global Development* (Vol. 11, págs. 269-303). Amsterdam: Elsevier.
- Milenio. (2014). Importación y contrabando de alimentos a Bolivia. *Informe Nacional de Coyuntura N° 238*, (2 de mayo).
- OMC. (2002). *World Food Summit Trade liberalization and food security*. Obteni-

- do de http://www.wto.org/English/news_e/news02_e/speech_rodriguez_mendoza_11june02_e.htm
- Pacheco B., D. (2009). Avances en Soberanía y Seguridad Alimentaria en Bolivia. En J. Campero, *Memoria II Ciclo de Talleres de Análisis desde la sociedad civil de Modelos y Políticas de desarrollo sostenible en Bolivia* (págs. 27-40). La Paz, Bolivia: ABDES.
- Patel, R. (2009). Food sovereignty. *Journal of Peasant Studies*, 36:3, 663-706.
- Pérez, M. (2014). *Mercado o seguridad alimentaria, dilema de los pequeños productores agrícolas de Rurrenabaque*. La Paz: TIERRA.
- Pinstrup-Andersen, P. (2009). Food security: definition and measurement. (1:5-7).
- PMA. (2009). *Manual para la Evaluación de la Seguridad Alimentaria en Emergencias*. Roma, Italia: Programa Mundial de Alimentos (PMA), Servicio de Análisis de la Seguridad Alimentaria.
- Rubio, B. (2011). *Crisis mundial y soberanía alimentaria en América Latina*. Recuperado el 10 de septiembre de 2014, de Revista de Economía Mundial: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86622169002>
- Sanabria, H. (1993). *The Coca boom and rural social change in Bolivia*. Michigan, USA: University of Michigan Press.
- Tapella, E. (septiembre-diciembre de 2004). Reformas estructurales en Argentina y su impacto sobre la pequeña agricultura. ¿Nuevas ruralidades, nuevas políticas? *Estudios Sociológicos*, XXII (3), 669-700.
- Tarancon, M., Díaz, C. H., y Trueba, J. I. (2011). ¿Cómo alimentar a 9.000 millones de personas en el 2050? *XV Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos*. Huesca, España.
- Teubal, M. (2002). Globalización y Nueva Ruralidad en América Latina. En N. Giarraca (compiladora), *¿Nueva Ruralidad en América Latina?* (págs. 45-65). Buenos Aires: CLACSO.
- Urioste, M., y Pacheco, D. (2001). *Las tierras bajas de Bolivia a fines del siglo XX*. La Paz, Bolivia: PIEB.
- Urioste, M. (2014). *En el campo, los productores de mercancías prefieren comprar sus alimentos*. La Paz: TIERRA.
- Vanhaute, E. (2010). Peasants and depeasantization. Handbook of World-Systems Analysis. (G. University, Ed.) *Agrarian Change and Peasant Studies Series*.
- Vía Campesina. (1996). Obtenido de <http://nyeleni.org/spip.php?article38>
- Wiesmann, D., Basset, L., Benson, T., y Hoddinot, J. (2009). *Validation of the World Food Programme's Food Consumption Score and Alternative Indicators of Household Food Security*. Washington: IPFRI.
- Windfuhr, M., y Jonsén, J. (2005). *Soberanía Alimentaria. Hacia la democracia en sistemas alimentarios locales*. Reino Unido: FIAN-Internacional, ITDG.
- Zeballos, H., Balderrama, F., Condori, B., y Blajos, J. (2009). *Economía de la papa en Bolivia 1998-2007*. Cochabamba: PROINPA.

Cuando la soya se impone: transformaciones en las comunidades campesinas y sus implicaciones alimentarias

Enrique Castañón Ballivián¹

A partir de la Reforma Agraria de 1953, la política agraria del Estado boliviano se enfocó en establecer y desarrollar un sector agrícola moderno de corte industrial en el departamento de Santa Cruz. Este sector, que en un primer momento tenía por fin el abastecimiento doméstico de alimentos en el marco de una política de sustitución de importaciones, sufrió un cambio radical en 1985 con el ajuste estructural y las políticas económicas neoliberales que impulsaron un nuevo modelo productivo de agronegocio enfocado en los mercados internacionales. En este marco histórico, el presente documento describe algunas de las transformaciones que se suscitaron en las comunidades campesinas del municipio de Cuatro Cañadas a consecuencia de la expansión del agronegocio sojero en el departamento de Santa Cruz. A través de un análisis comparativo, el documento argumenta que el paso hacia el modelo de agronegocio ha representado un cambio significativo no solo de las condiciones agrarias y productivas sino también ha impactado en la composición socio-económica y los patrones alimentarios. Con base en estas transformaciones se discuten implicaciones alimentarias relevantes a nivel local y nacional.

Palabras clave: agronegocio, seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, comunidades campesinas, transformaciones rurales, neoliberalismo

Introducción

Históricamente las esperanzas de lograr autoabastecimiento alimentario en Bolivia han sido depositadas en el departamento de Santa Cruz debido a sus suelos fértiles y clima cálido propicios para la agricultura. Desde los años cincuenta hasta la actualidad, el Estado boliviano, con diferentes matices y fines, ha apostado por hacer de esta región el centro de la actividad agropecuaria. Tanto

¹ Investigador boliviano. Máster en Medioambiente y Desarrollo de la Escuela de Ciencias Sociales y Política Pública del King's College, Universidad de Londres (Distinción). Cursó sus estudios de postgrado gracias a una beca Chevening del consejo británico. Su trabajo explora las transformaciones rurales en contextos de expansión del capitalismo agrario desde la perspectiva de clase. Actualmente trabaja como investigador en TIERRA (e.castanon@tierra.org).

los gobiernos del llamado “Nacionalismo Revolucionario”² como los gobiernos militares impulsaron una producción agrícola de corte capitalista como parte de una política de sustitución de importaciones que permitiría satisfacer las necesidades alimentarias del mercado nacional. Es a partir de 1985 con el ajuste estructural y los gobiernos neoliberales que la agricultura en Santa Cruz gira hacia la priorización del mercado externo de commodities en concordancia con la política de apertura comercial. Este viraje en la política económica trajo consigo profundas transformaciones en el sector agropecuario con importantes implicancias a nivel nacional.

En efecto, estos cambios en la agricultura cruceña han significado la modificación de la estructura agrícola boliviana en su conjunto. Mientras que a principios de la década de 1980 solo el 9% de la superficie cultivada en el país estaba destinada a *commodities* industriales, hoy en día ocupan cerca del 48% de dicha superficie (Castañón 2014). Este notable incremento está asociado directamente con la expansión del agronegocio sojero que empieza a principios de los años noventa. La construcción de la base material para la expansión del agronegocio fue obra del Estado neoliberal que, contradiciendo su ortodoxia ideológica, jugó un rol activo tanto en políticas públicas como en proyectos de inversión (Pérez 2007).

Allá donde se ha expandido, el agronegocio ha supuesto la transformación y reconfiguración de espacios rurales. Estudios sobre la expansión sojera en la región han demostrado sus impactos negativos tanto sociales como medioambientales (e.g. Santos y otros 2012, Catacora-Vargas y otros 2012) así como sus repercusiones en la soberanía alimentaria nacional (Joensen y otros 2005, Pengue 2004). En Bolivia, los análisis se han enfocado ya sea en el desarrollo del sector sojero en general como consecuencia de la política neoliberal (Pérez 2007) o en estudios de caso sobre el sistema productivo y su relación con las comunidades locales (e.g. PNUD 2005, Castañón 2013). Sin embargo, los análisis sobre las transformaciones rurales influenciadas por el agronegocio y sus implicancias para la problemática alimentaria han recibido menor atención. Es en este sentido que el presente trabajo pretende aportar. Para desarrollar el argumento, la investigación utiliza como estudio de caso dos comunidades campesinas asentadas en el actual municipio de Cuatro Cañadas del departamento de Santa Cruz. Ubicadas en un municipio agroindustrial por excelencia, estas comunidades pueden ser consideradas representativas de la realidad campesina en la región, pues la dinámica productiva así como las determinantes de la política económica son muy similares. La investigación gira en torno a las siguientes preguntas principales:

2 Se denomina Nacionalismo Revolucionario al periodo histórico en el cual gobernó el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), desde la Revolución Nacional de 1952 hasta 1964.

¿En qué medida la implementación del agronegocio sojero ha transformado las condiciones en las comunidades campesinas de Cuatro Cañadas?

¿Qué implicaciones tienen la dinámica productiva del agronegocio y las transformaciones evidenciadas sobre la problemática alimentaria a nivel local y nacional?

El texto sugiere que la expansión del agronegocio sojero ha significado importantes transformaciones en las comunidades campesinas que han terminado por reconfigurar no solo las condiciones agrarias y productivas sino que además han supuesto cambios en la composición socio-económica y los patrones de consumo alimentario. El paso hacia una agricultura de corte industrial ha profundizado las relaciones capitalistas en estas comunidades generando dos principales consecuencias. Primero, la diferenciación social aparenta haberse exacerbado debido a la exclusión de las familias que no poseen el capital suficiente para incursionar en el agronegocio y, paralelamente, a la escasez de tierra para las familias nuevas y las que continúan migrando. Segundo, la tierra se destina principalmente al cultivo de la soya abandonando lo que en el pasado fue una producción agrícola diversificada. A partir de estas dinámicas se presenta un análisis sobre las implicancias alimentarias resaltando los cambios en la dieta de las familias y los riesgos que conlleva el creciente acceso a los alimentos vía mercado. Se constata por un lado que la dieta de las familias campesinas es hoy en día más diversificada y nutritiva de lo que era hace un par de décadas. Por otro lado, no obstante, los datos muestran que la gran mayoría de los alimentos consumidos son obtenidos mediante la compra lo que a su vez supone dos principales riesgos: 1) vulnerabilidad alimentaria en los estratos de menores ingresos económicos ante posibles alzas de precios y 2) una paulatina pérdida de control sobre los alimentos de la dieta familiar los cuales cada vez más son producidos por la agroindustria.

La presente investigación adopta una perspectiva de análisis histórica para examinar las distintas transformaciones que se han suscitado en este contexto particular. Esto porque se parte de la premisa que la realidad coyuntural responde siempre a un conjunto de determinantes que fueron interactuando a través del tiempo; la realidad no es solamente históricamente situada, sino que también históricamente determinada. El grueso del análisis se centra en un ejercicio comparativo que contrasta la situación de las comunidades campesinas en dos momentos específicos. El primer momento puede entenderse como previo a la expansión del agronegocio sojero –principios de la década de 1990– mientras que el segundo muestra el panorama actual caracterizado por la consolidación de este modelo productivo. La discusión sobre las condiciones alimentarias es abordada desde la

perspectiva de clase y si bien se utilizan conceptos ligados a la noción de “seguridad alimentaria”³, estos no son utilizados normativamente sino críticamente como sugieren las reflexiones finales.

La información para el estudio fue obtenida tanto de fuentes primarias como secundarias. Los datos primarios fueron recolectados a través de boletas de encuesta realizadas a 50 familias en las comunidades Naciones Unidas y Nuevo Palmar del mencionado municipio. Estas boletas permitieron capturar información detallada sobre los medios de vida de la gente y su dieta alimentaria según estratos de riqueza definidos. Central en la metodología fue la utilización del indicador Puntaje de Consumo de Alimentos (PCA) desarrollado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas. Estos datos primarios se consideran suficientes para hacer generalizaciones respecto a las comunidades campesinas del municipio; sin embargo, se reconoce de manera explícita que los datos obtenidos no son estadísticamente representativos de todo el municipio, por lo que la evidencia presentada debe considerarse a la luz de esta limitación. La investigación se ha beneficiado además de la observación directa del autor y una serie de entrevistas semi-estructuradas con informantes clave que fueron realizadas en el marco de un trabajo previo en la misma zona. Los datos secundarios provienen de estadísticas oficiales, informes del sector agroindustrial y una revisión de literatura tanto nacional como internacional.

El presente documento está dividido en cuatro secciones incluyendo esta introducción. La segunda sección presenta los resultados del trabajo investigativo respecto a las transformaciones que se han suscitado a través del tiempo. Coherente con la perspectiva histórica, la sección empieza examinando los antecedentes que dieron lugar a la formación de una agricultura capitalista en las tierras bajas de Bolivia como consecuencia de una apuesta estatal después de la Revolución Nacional de 1952. Seguidamente, se presenta un análisis del surgimiento del agronegocio sojero como parte del proyecto neoliberal implementado en el país desde 1985. Estos análisis históricos permiten entrar a puntualizar las transformaciones que se han suscitado en la realidad campesina en el municipio de Cuatro Cañadas, particularmente desde principios de la década de 1990. La tercera sección contiene un esfuerzo reflexivo a modo de discusión que pretende ensayar algunas implicancias de tipo alimentaria en base a las transformaciones previamente descritas. La cuarta y última sección cierra presentando las conclusiones generales del trabajo.

3 Según la FAO (2006), la noción de seguridad alimentaria comprende cuatro principales conceptos: 1) la disponibilidad de alimentos entendida como la existencia física de cantidades suficientes de alimentos en un área determinada, 2) el acceso a los alimentos determinado por el abanico de recursos que disponen las personas para adquirir alimentos apropiados, 3) la utilización biológica de los alimentos relacionada a insumos no alimentarios como el agua potable, sanidad y atención médica, y 4) la estabilidad que hace referencia a la necesidad de que tanto la disponibilidad como el acceso garanticen la satisfacción de las necesidades alimentarias en todo momento.

Resultados

Marcha al oriente: establecimiento de la agricultura capitalista en las Tierras Bajas

Los antecedentes históricos que dieron origen a la agricultura capitalista en el oriente boliviano se remontan a las recomendaciones del denominado “Plan Bohan”. Este plan, elaborado en la década de 1940 por una comisión económica estadounidense encabezada por Merwin Bohan, planteó en esencia el establecimiento de un nuevo polo de desarrollo económico al este del país en base a la agricultura de tipo industrial. Los principales objetivos fueron: 1) superar el carácter monoprodutor de la economía boliviana que hasta ese entonces había estado basada casi exclusivamente en la explotación minera y 2) dar paso a la sustitución de importaciones agrícolas permitiendo la importación de otros bienes estratégicos como maquinaria y productos manufacturados (Romero 2003). El establecimiento de este nuevo polo de desarrollo requería un gran movimiento demográfico –principalmente campesino– desde las tierras altas hacia las tierras bajas, política que llegó a denominarse “marcha al oriente”. Además de proveer la necesaria mano de obra barata a los nuevos complejos industriales, este movimiento de campesinos también reduciría la presión demográfica sobre la tierra tanto en el altiplano como en los valles. Unos cuantos años después, estas orientaciones generales del Plan Bohan pasarían a ser parte central de la política económica implementada por los gobiernos del llamado nacionalismo revolucionario desde 1952 hasta 1964.

Previo al proceso de colonización se suscitó la reforma agraria de 1953. Esta reforma, considerada una de las más radicales del continente, tuvo un impacto profundo en altiplano y valles pues significó la recuperación casi total de tierras por parte de poblaciones indígenas y campesinas (Urioste 2011), aunque en el oriente del país se produjo más bien un proceso de consolidación de latifundios bajo el rótulo de “empresa agropecuaria” (Romero 2003). Esta consolidación de haciendas fue un hecho coherente con la visión modernizadora del gobierno de ese entonces que pretendía la construcción de un capitalismo agrario en el país. De hecho, la transición hacia relaciones de producción capitalistas fue calificada de necesaria incluso por los socialistas contemporáneos como medida de superación de la etapa feudal y como paso previo a la construcción del socialismo. Para Soruco (2008), la reforma agraria tuvo como principal fin la liberación de mano de obra del régimen hacendal poniéndola a disponibilidad de las empresas agrícolas, en particular hacia las emergentes en el oriente del país debido a la necesidad nacional de productos como el azúcar y el arroz. Lo cierto es que la reforma agraria catalizó la dotación de tierras en el oriente⁴ por lo que marcó el

4 Entre 1952 y 1956 se dotaron alrededor de 98 mil hectáreas (MDRAyMA 2006).

inicio en sí de la colonización en la región junto a la construcción de la carretera Cochabamba–Santa Cruz en el mismo año (Vadillo 2013).

Aunque hubo incursiones espontáneas previas y proyectos pilotos, la colonización al norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra empieza con fuerza desde 1955. El grueso de los asentamientos tuvo un carácter espontáneo (68%), mientras que el resto se dividió entre asentamientos dirigidos (10%) y semi-dirigidos (21%). Bajo una combinación de estas modalidades⁵, los migrantes se asentaron en cinco principales zonas de colonización: Antofagasta, Berlín, El Chore, Huaytú y San Julián (Soria 1996). San Julián ha sido la zona donde se establecieron la mayor cantidad de asentamientos con cerca del 60% de comunidades campesinas hasta principios de la década de 1990. Ha sido una de las zonas más atractivas debido a sus características productivas –precipitación regular y suelos planos– y los beneficios económicos y logísticos que derivaban de su cercanía a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Como se mencionó anteriormente, los esfuerzos de colonización tenían por fin último el establecimiento de un sector agrícola industrial de corte capitalista. Por tanto, el Estado debía garantizar la presencia de los dos elementos centrales que hacen a la lógica capitalista: capital y trabajo asalariado. El trabajo asalariado vendría entonces de este masivo desplazamiento demográfico de campesinos. Al haber sido liberados del régimen hacendal se contaba con su rápida subordinación a las relaciones de producción, mientras que su gran número garantizaba precios bajos de la mano de obra (Soruco 2008). Evidentemente, la migración espontánea de campesinos hacia el oriente continuaría por la creciente demanda de mano de obra particularmente durante la zafra de caña de azúcar o la cosecha del algodón, casi siempre bajo condiciones laborales precarias.

Por otro lado, la construcción de este polo de desarrollo agroindustrial demandaba además flujos de capital y la incursión de “empresarios agrícolas” como directores del sector. El Estado boliviano realizó importantes inversiones⁶ para edificar las bases materiales de la emergente industria con un apoyo más que significativo del gobierno de Estados Unidos tanto en créditos como en donaciones. Solo entre 1953 y 1961, el financiamiento estadounidense para el desarrollo agrícola en Santa Cruz bordeó los 30 millones de dólares. De hecho, en la década de 1950 Bolivia pasó a ser el segundo país del mundo con mayor financiamiento estadounidense per cápita después de Israel. Se ha argumentado que tal compro-

5 Los asentamientos dirigidos contaron con apoyo directo de instituciones estatales y privadas y respondieron generalmente a una planificación previa. La modalidad semidirigida delegó mayores responsabilidades a los colonizadores y el apoyo que recibieron fue parcial. Finalmente, los asentamientos espontáneos, como su nombre lo indica, se dieron sin el apoyo de instituciones externas siendo los propios colonizadores los que planificaron y ejecutaron el asentamiento generalmente en tierras fiscales cuya legalización se tramitaba posteriormente ante el Consejo Nacional de Reforma Agraria.

6 Destaca la inversión realizada por el Banco Agrícola Boliviano que canalizaba dinero público, créditos y donaciones. Se estima que entre 1955 y 1984 este banco concedió préstamos a nivel nacional por un valor de 584 mil millones de bolivianos, de los cuales el 37% correspondieron al departamento de Santa Cruz.

miso con el país y el desarrollo del sector agrícola capitalista en las tierras bajas era de gran interés para la potencia del norte dada su necesidad de consolidar su hegemonía en la región ante la irradiación comunista (Soruco 2008).

Paralelamente, el Estado realizó una extensiva distribución de tierras a privados desde 1952 hasta principios de la década de 1990. Se estima que durante este periodo se repartieron alrededor de 43 millones de hectáreas de las cuales cerca del 15% eran predios que superaban las 10 mil hectáreas. De esta manera, se reconfiguró la estructura de tenencia de la tierra que pasó a estar dominada por grandes propietarios. Si bien la consolidación de un grupo empresarial productor fue la justificación central para tal distribución de tierras, en la práctica estuvieron presentes interés de la élite boliviana, y particularmente cruceña, que en complicidad con la clase política buscó reproducir su poder a través del control de la tierra. No es casual que sean los gobiernos militares, y especialmente el del dictador Hugo Banzer de origen cruceño, los que procesarían casi la mitad de los expedientes de las grandes propiedades (Soruco 2008).

Establecidas las bases para el desarrollo del sector, la producción agroindustrial fue creciendo de manera paulatina. Un primer momento estuvo marcado por la caña de azúcar como parte central de la política de sustitución de importaciones, y en un segundo momento se destacó el cultivo de algodón a partir de los años setenta hasta finales de la década de 1980. El tercer momento de la agroindustria cruceña se relaciona casi directamente con el cultivo de la soya y una dinámica de agronegocio más profunda que permea la vida social, cultural, económica y política de la región.

La soya es la reina: neoliberalismo y agronegocio

La implementación del modelo neoliberal en 1985 supuso cambios profundos en el agro boliviano. Siguiendo los preceptos ideológicos de este proyecto, los gobiernos de turno redujeron el rol estatal al mínimo necesario asignándole simplemente funciones de carácter normativo y regulatorio con el fin de garantizar “un buen clima de negocios” (Harvey 2005, 48). Este giro tuvo un efecto desastroso en la agricultura familiar campesina en el occidente del país pues se desmantelaron prácticamente la totalidad de programas e iniciativas de apoyo a este sector dejándolo a merced de la volatilidad e imperfección del mercado en un contexto de mayor riesgo climático. En contraste, sin embargo, el Estado neoliberal fue muy activo en la promoción y consolidación del agronegocio en Santa Cruz cuyo cultivo emblemático ha sido la soya. Esta aparente contradicción ideológica fue justificada desde la necesidad de consolidar esta *commodity* de exportación debido a la ventaja comparativa del país (Pérez 2007).

Si bien la producción sojera a gran escala empieza a partir de 1986 después de la liberación comercial, su despegue en términos de superficie cultivada y niveles de producción se da recién en 1993 a consecuencia de dos principales acontecimientos. El primero fue la declaratoria de Unión Aduanera al interior de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en 1993 que levantó las barreras arancelarias a los productos originarios de los países miembros, fijando un Arancel Externo Común y Bandas de Precio. Dentro del bloque, Bolivia era el único país que había logrado desarrollar su industria sojera por lo que la CAN se convirtió en el mercado natural para la soya boliviana dada su imposibilidad de competir con la producción del grano oleaginoso brasilera o argentina (Pérez 2007).

Un segundo acontecimiento fue la ejecución del Proyecto *Tierras Bajas del Este* que contó con financiamiento del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Con un monto cercano a los 50 millones de dólares, el proyecto ejecutado por la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz (CORDECRUZ) construyó infraestructura caminera y productiva, desarrolló mecanismos de crédito para la adopción de nuevas tecnologías y propició la liberalización en el control de la tierra. Este último componente estaba en línea con la reinversión de una nueva modalidad de reforma agraria en los años noventa, promovida por el Banco Mundial, basada en el principio mercantilista de oferta y demanda (Bernstein 2010). De esta manera se dinamizó el mercado de tierras sin control alguno por parte del Estado lo que a su vez contribuyó a la concentración de este recurso. Este proyecto no solo representó un empujón importante a la dinámica productiva sino que además logró aperturar una nueva zona de producción, la denominada “zona este de expansión”.

Es en este contexto de lógica de mercado y comercio exterior que la soya se convierte en “la reina”, como suelen llamarla los empresarios del agronegocio. Entre 1991 y 2012, la superficie cultivada de soya creció en un 500%, de 200.000 a 1.165.000 hectáreas. Tal incremento la ha convertido en el principal cultivo del país representando más de un tercio de la superficie cultivada total. Con la expansión de la soya se intensificó la concentración de la tierra y la deforestación. Hoy en día, un grupo pequeño de grandes productores (2% del total) controlan más de la mitad de la superficie cultivada de soya mientras que la abrumadora mayoría de productores pequeños campesinos (74%) solo controlan el 28% de dicha superficie (Castañón 2014). Paralelamente, se ha estimado que de las 1.821.153 hectáreas deforestadas en la última década, el 53,7% corresponde a la expansión de la agricultura mecanizada en Santa Cruz (Muller y otros 2012).

Si bien la producción agroindustrial se caracteriza por un uso intensivo de capital y tecnología, el agronegocio sojero representa además la penetración del poder transnacional y su proyecto particular de una agricultura globalizada bajo

su control (Bernstein 2010). En efecto, el agronegocio asentado en Santa Cruz responde y reproduce intereses transnacionales que mediante la llamada “agricultura por contrato” determinan últimamente qué, cómo y para quién se produce. Así, los sojeros en Santa Cruz producen la *commodity* asignada por los mercados internacionales y la división internacional del trabajo –determinados en gran parte por intereses transnacionales– y utilizan los insumos y tecnologías⁷ desarrolladas por estos mismos grupos de corporaciones supranacionales. Asistimos pues a un escenario productivo que de la mano del modelo neoliberal no solo ha reproducido las históricas relaciones capitalistas en la agricultura sino que las ha profundizado y complejizado al conectarlas con capitales transnacionales. Tal contexto ha derivado en profundas transformaciones en las comunidades campesinas, mismas que a continuación se presentan utilizando como estudio de caso aquellas asentadas en el actual municipio de Cuatro Cañadas.

De zona de colonización a capital de la soya: transformaciones en las comunidades campesinas de Cuatro Cañadas

En el marco histórico desarrollado en las secciones previas, esta sección pretende dar cuenta de las principales transformaciones que se han suscitado en las comunidades campesinas que actualmente existen en el municipio de Cuatro Cañadas. Para fines didácticos, se distinguen transformaciones en la realidad agraria/productiva, en la composición socioeconómica y en los patrones alimentarios, aunque por supuesto todas estas se encuentran interrelacionadas y conectadas de manera compleja. Si bien se describen los antecedentes históricos de la zona desde los inicios de su colonización, el grueso del análisis se concentra en las transformaciones a partir del surgimiento del agronegocio sojero a principios de la década de 1990 hasta nuestros días. Los datos y argumentos presentados a continuación corresponden a un análisis comparativo entre investigaciones realizadas en la zona a principios de los años noventa y datos primarios obtenidos por el autor en trabajo de campo realizado en el año 2013⁸.

Un primer momento de colonización en esta zona empieza en los años posteriores a la revolución nacional de 1952 hasta fines de la década de 1960. En este periodo los asentamientos espontáneos que surgen corresponden a gente de las mismas tierras bajas como ser indígenas de la Chiquitanía y ex-peones de colonias previamente establecidas como la de Okinawa a orillas del Río Grande. Posteriormente, se materializan los planes gubernamentales de colonización a través del

⁷ De hecho, más del 95% de la soya que actualmente se cultiva en el país es de origen transgénico. La principal variedad es la denominada RR (Round up Ready) que se cultiva utilizando el herbicida Round up, ambos de propiedad de la empresa Monsanto.

⁸ Por tanto, en el contexto de esta sección, debe entenderse que los datos que hacen referencia a las circunstancias actuales de las comunidades fueron derivados de encuestas y entrevistas semi-estructuradas.

Instituto Nacional de Colonización (INC) que durante los años setenta catalizará asentamientos semi-dirigidos. En este periodo se conforma un número importante de núcleos de colonización -23 en Brecha Casarabe y 9 en San Julián Centro- que en su gran mayoría estuvieron constituidos por familias migrantes del occidente del país. La consolidación de estos núcleos será después determinante en la configuración demográfica y organizativa en la zona pues se transformarán en sindicatos agrarios que han de crear la Federación Especial de Colonizadores de San Julián (FECSJ). En el proceso de colonización de esta zona es posible distinguir un tercer momento marcado por asentamientos de carácter espontáneo que a la larga constituyeron cerca del 40% del total de comunidades. Son estos asentamientos espontáneos los que terminaron dando lugar a una nueva zona denominada San Julián Sur (Soria 1996). Precisamente una parte importante de esta nueva zona es la que en 2002 pasará a independizarse del municipio de San Julián formando el actual municipio de Cuatro Cañadas, cuyo nombre tiene relación a los cuatro principales flujos de agua que atraviesan el municipio.

Transformaciones agrarias/productivas

A consecuencia de la expansión del agronegocio sojero, la agricultura campesina en Cuatro Cañadas sufrió una transformación profunda. El sistema productivo tradicional de “roza y quema” -característico de los asentamientos colonizadores en la región- fue reemplazado por un sistema de corte industrial enfocado netamente en la producción para el mercado. Es este hecho el que ha supuesto cambios profundos en la estructura agraria y productiva de las comunidades campesinas en particular y del municipio en general.

Hasta inicios de la década de 1990, la principal forma de acceso a la tierra para las familias campesinas era la dotación. De un total de 899 parcelas existentes en la entonces zona de San Julián Sur, se estima que el 76% correspondieron a procesos de dotación mientras que solo el 23 y 1% fueron compradas y heredadas, respectivamente. Prácticamente la totalidad de las familias en esta zona (97,5%) aún disponían de parcelas -dispuestas en núcleos de colonización- con una superficie tipo de 50 hectáreas. Por este motivo, de las 652 familias campesinas asentadas en la zona, 81% utilizaba tierra propia para sus labores productivas, 12% empleaba tierras en préstamo (a menudo de algún familiar), 5% buscaba tierra extra para alquilar, mientras que solo el 2% de los agricultores trabajaba bajo la modalidad ‘al partir’ (CORDECRUZ-CIPCA-SACOA 1992).

Como se mencionó, el sistema productivo predominante en las comunidades campesinas era el denominado “roza y quema”. Este sistema se caracteriza por la utilización progresiva de pequeñas parcelas que son habilitadas manualmente.

Una vez desmontada la parcela, el campesino usualmente siembra arroz y/o maíz aprovechando la fertilidad del suelo de los primeros dos o tres años. Al cabo de este tiempo el rebrote masivo de malezas hace que sea más factible la habilitación de una nueva parcela por lo que el terreno utilizado entra en una fase de descanso denominada “barbecho”. Se ha argumentado que la reutilización de tierras en descanso puede conducir a la llamada “crisis de barbecho” (Maxwell 1979) donde una productividad agrícola menor –fruto de suelos menos fértiles y con alta incidencia de malezas– se conjuga con mayores costos de producción debido a la necesidad de controlar las malezas⁹. Los impactos de esta crisis sobre la economía familiar campesina son considerables pudiendo inclusive determinar la emigración aunque es también común la adopción de otras estrategias como el destronque que permita mecanizar la agricultura o el establecimiento de pasturas para la cría de ganado (Soria 1996).

El predominio de este sistema productivo permitió que en San Julián Sur se mantenga una parte importante del monte alto (82%) hasta inicios de los años 1990. De hecho, solo el 16% del territorio estaba destinado a labores agrícolas ya sean parcelas nuevas o en barbecho. El principal uso del suelo (82%) era para cultivos anuales, mientras que los cultivos perennes y pastos alcanzaban cada uno un 9%. Los cultivos anuales más preponderantes eran el arroz (28%) y el maíz (64%) que se sembraban durante la campaña de verano. Por otro lado, la campaña de invierno era mucho más reducida equivaliendo solo al 12% de lo que se sembraba en verano y estaba enfocada en la producción de hortalizas y papa. En este sentido, se priorizaba la campaña de verano como generadora de ingresos, mientras que la de invierno tenía fines principalmente de autoconsumo. Asimismo, el 78% de las familias poseían cultivos perennes como ser cítricos, plátano y mango, mismos que estaban destinados principalmente al consumo familiar. Finalmente, el establecimiento de pastos estaba relacionado con la cría de ganado bovino aunque en estos años solo el 16% de las familias campesinas en la zona de San Julián Sur realizaban esta actividad (CORDECRUZ-CIPCA-SACOA 1992, Soria 1996).

Este panorama agrario y productivo ha sido profundamente modificado en tan solo 20 años con el surgimiento y consolidación del agronegocio soyeero en la región. La rentabilidad de este modelo no solo ha direccionado a los productores locales hacia esta commodity sino que también ha atraído a nuevos actores productivos –principalmente grandes empresarios tanto nacionales como extranjeros– complejizando la configuración productiva de la región. Esta reconfiguración de actores productivos, junto con la profundización de las relaciones de mercado y las características propias del sistema productivo de agronegocio han sido los factores centrales que han dado paso a una nueva realidad agraria y productiva.

⁹ Se ha calculado que el gasto en productos agroquímicos representaba el 9,3% del costo total de producción (Soria 1996).

Un primer aspecto sobresaliente es el surgimiento de un mercado de tierras dinámico a medida que la compra-venta se ha convertido en la principal modalidad de acceso a este recurso. Dicho mercado, sin embargo, adquiere un carácter “dual” pues sus características difieren en función al tipo de productores. El mercado de tierras entre medianos y grandes empresarios es bastante dinámico, estas transacciones se catalizan por los precios internacionales de la soya y cuentan con la intermediación de inmobiliarias (Urioste 2011), mientras que el mercado de tierras en las comunidades campesinas es limitado por la falta de tierra y capital que tienen estas familias. Si bien los datos recolectados en las comunidades estudiadas muestran que aún cerca del 73% de las familias mantiene parcelas propias con una superficie promedio de 31 hectáreas, es interesante notar que la concentración de la tierra se da al momento del uso. Es decir, a pesar de contar con parcelas propias, muchas familias no poseen el capital suficiente para producirlas bajo el modelo agroindustrial por lo que se ven obligadas a alquilarlas a terceros, principalmente vecinos de la comunidad aunque también es común que se alquile a menonitas y empresarios privados. De hecho, según información derivada de mapas parlantes, entre 25 y 30% de las parcelas en las comunidades estudiadas están siendo alquiladas a terceros (Castañón 2013). En la misma línea, la encuesta realizada muestra que aproximadamente el 54% de las familias trabajan su tierra durante la campaña de verano y que solo el 10% es capaz de alquilar tierra extra, cifra que coincide con el 10% de campesinos ricos o acomodados según el estratificado de riqueza que se realizó¹⁰.

Por otro lado, las características propias del modelo productivo de agronegocio marcan un nuevo escenario para las familias campesinas. Al ser un modelo altamente intensivo en el uso de capital y tecnología establece de facto la exclusión de una gran parte de los campesinos. Esto porque el costo de producción por hectárea –que actualmente supera los 400 USD/ha (CAO 2013)– se encuentra por encima del capital disponible por estas familias, siendo necesario recurrir al crédito en caso de optar por esta actividad agrícola. Si bien permite la incursión en la dinámica agroindustrial, el crédito representa también un mecanismo de extracción del excedente generado por el trabajo campesino, e incluso en ocasiones puede derivar en procesos de dependencia crónica en el sentido que el trabajo de las familias alcanza simplemente para el pago del crédito y cubrir las necesidades básicas sin que exista un nivel de acumulación significativo (Castañón 2013). En el plano tecnológico, la escala de producción necesaria para obtener rentabilidad hace indispensable la mecanización de las labores culturales. La mecanización viene acompañada de un uso cada vez mayor de insumos agrícolas como ser

10 Existen cifras muy similares durante la campaña de invierno donde el 52% trabaja tierra propia y solo el 8% alquila tierra extra.

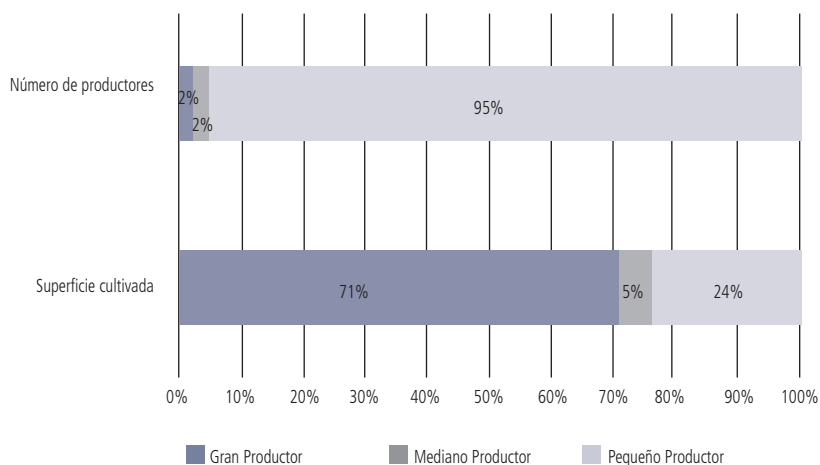
los agroquímicos y semillas transgénicas. En el caso de la soya en particular, la siembra directa, el glifosato y la semilla transgénica RR, representan la base del paquete tecnológico que es implementado prácticamente por la totalidad de productores independientemente de su escala de producción. Asistimos pues a una agricultura completamente tecnificada con las mismas condiciones que las que se encuentran en las potencias soyeras del cono sur.

Las implicancias de estas transformaciones en cuanto al uso del suelo también son significativas. Hoy en día, los productores campesinos se han especializado en el cultivo de la soya como resultado de la política económica regional impuesta por el agronegocio. Los datos obtenidos dan cuenta que durante la campaña de verano, el 90% de los productores campesinos siembran soya, mientras que solo el 4% arroz, un cambio radical en comparación a los años 1990. Asimismo, la campaña de invierno pasó de ser marginal y enfocada en el autoconsumo a ser generadora de ingresos complementarios. En invierno la producción de las comunidades campesinas se enfoca en tres principales cultivos: el sorgo, el maíz y el girasol que ocupan 50, 25 y 20% de la tierra cultivada respectivamente. Finalmente, el boom de la soya ha significado un alto grado de deforestación. Al interior de las comunidades, la mayoría de las familias tiene menos del 10% de monte en sus parcelas y las áreas verdes planificadas dentro de los núcleos de colonización han sido repartidas y habilitadas para el cultivo.

Estos patrones que marcan la dinámica sojera en las comunidades son reproducidos a escalas mayores por parte de los grandes empresarios agrícolas, hecho que a su vez ha transformado radicalmente la geografía agraria del municipio. Así, mientras que a principios de los años 2000 la soya de verano cubría una superficie de 140.000 hectáreas, durante la última campaña agrícola 2012/13 se sembraron un total de 245.000 hectáreas, correspondiendo al 97% del total del área cultivada en el municipio (CAO 2013, Anapo 2014). De hecho, Cuatro Cañadas se ha convertido en el municipio con mayores hectáreas sembradas de soya en el país, por lo que es posible plantear que en la práctica se ha convertido en la nueva capital sojera de Bolivia¹¹. En el transcurso del tiempo, sin embargo, esta dinámica productiva ha llevado de manera inevitable a la concentración de la tierra y el capital en pocas manos. Los grandes productores que constituyen solamente el 2% del total de productores sojeros en el municipio controlan el 71% de la superficie sembrada, mientras que la abrumadora mayoría de pequeños productores campesinos (95%) controla solo el 24% de dicha superficie (ver Gráfico 1).

11 Un fenómeno similar sucede en el municipio de San Pedro, véase PNUD (2005).

Gráfico 1
Cuatro Cañadas: porcentaje de superficie cultivada de soya según tipo de productor



Fuente: Castañón (2013) en base a datos de Anapo citados por Álvarez (2005).

Transformaciones en la composición socio-económica

El diagnóstico socio-económico de la Colonia San Julián realizado a principios de los años 1990 (CORDECRUZ-CIPCA-SACOA 1992) muestra que prácticamente el 90% de las familias campesinas vivían de trabajar su tierra aunque en ocasiones recurrían también a la venta de su fuerza de trabajo. La agricultura fue de hecho la fuente principal de empleo para todos los miembros de las familias, pues en ese entonces el sistema productivo era intensivo en mano de obra requiriendo un promedio de 13,7 jornales por hectárea. Si bien el hombre adulto lideraba las labores agrícolas, estas no eran en absoluto su potestad exclusiva. De hecho, las mujeres tenían un rol crucial en la labores de cosecha, carpida, despizada, pastoreo, ordeño y elaboración de queso, constituyéndose hasta en el 40% de la fuerza laboral para estas actividades.

Si bien las actividades agropecuarias eran fundamentales para la alimentación de las familias, también se constituían en la principal fuente de ingresos representando el 57% del total en la zona de San Julián Sur. Dado el acceso diferenciado a tierra y capital, la composición socio-económica de las familias era variada aunque podían distinguirse dos grandes grupos. Por un lado, se encontraban los jornaleros y no agricultores que en conjunto representaban cerca del 10% de la población local. Mientras que los primeros eran de los pocos agricultores sin

tierra (4%) que se constituían en el proletariado rural, los segundos eran un grupo reducido (6%) de pequeños artesanos, maestros y comerciantes (CORDECRUZ-CIPCA-SACOA 1992, Soria 1996).

Por otro lado, dentro de los agricultores con tierra existía un amplio abanico de situaciones. Los campesinos muy pobres cultivaban superficies menores a 1,6 hectáreas basados exclusivamente en la mano de obra familiar, consecuentemente, sus ingresos eran muy limitados y comúnmente se veían obligados a vender su fuerza de trabajo a terceros para satisfacer sus necesidades básicas. Un segundo grupo lo constituían los denominados campesinos pobres que cultivaban entre 1,6 y 4 hectáreas y aunque también predominaba la mano de obra familiar les era posible contratar jornaleros para actividades específicas como la cosecha. En conjunto estos dos grupos representaban la mayoría de la población campesina en la zona de San Julián Sur llegando a un 64% del total. El estrato medio de campesinos (26%) se caracterizaba por cultivar superficies mayores a 4 hectáreas y contaban con un capital de operaciones que permitía no solo el pago de jornaleros sino también la compra de insumos agrícolas especializados. Si bien su nivel de capital les alcanzaba incluso para incursionar en la pecuaria, aún su situación económica se mostraba inestable y dependiente de apoyo institucional externo (*ibid.*).

Finalmente, los estratos superiores los ocupaban campesinos acomodados (8%) y campesinos ricos (2%). Ambos disponían de un ingreso económico estable y con márgenes de ahorro, lo que favorecía su independencia ante instituciones financieras. A menudo se constituían en comerciantes intermediarios y su producción agrícola, aunque parcialmente mecanizada, estaba basada en mano de obra contratada. A diferencia de los campesinos acomodados, sin embargo, los campesinos ricos disponían además del capital suficiente para ir concentrando activos como la tierra y acceder a tecnologías de punta. Además, estos últimos lograron diversificar aún más sus ingresos mediante el alquiler de maquinaria, el transporte y el comercio (*ibid.*).

Las transformaciones en la base material económica que se dieron en los últimos 20 años terminaron por reconfigurar la composición socio-económica de las comunidades campesinas. El establecimiento del agronegocio sojero como el modelo productivo hegemónico ha derivado en cambios en los patrones laborales y de diferenciación social. Dado que el modelo de agronegocio supone ciertos niveles de capital para su implementación, la venta de la producción agrícola ha pasado a ser una opción viable para un grupo reducido de familias campesinas. Hoy en día, solo el 33% de las familias reporta la venta de su producción agrícola como su principal fuente de ingresos. En contraste, la venta de fuerza de trabajo se constituye en la principal fuente de ingresos para el 25% de las familias, mientras que el alquiler de la tierra y la cría de ganado lo son para el 17 y 12,5%, respectivamente.

Asimismo, los datos recogidos muestran mayores niveles de diversificación en las actividades económicas de las familias. En este sentido, es común que la estrategia de vida familiar esté conformada por una combinación de dos o tres actividades. Así, si bien la cría de ganado es la principal actividad económica para solo el 12,5% de las familias, se constituye en la actividad secundaria para prácticamente la mitad de los hogares. Esta diversificación puede ser entendida como una adaptación campesina ante un contexto excluyente que ha hecho de la agricultura una actividad altamente intensiva en capital. La diversificación parece una consecuencia necesaria e impuesta por la diferenciación social antes que una elección propia de las familias. Además, las características mismas de la agricultura agroindustrial como la mecanización han despojado de trabajo a una parte importante de la población. Aquí resulta interesante destacar los testimonios de las mujeres que ven en la mecanización su exclusión de las labores agrícolas con la correspondiente pérdida de ingresos propios y por ende de poder al interior del núcleo familiar (Castañón 2013).

Como sucedía a principios de los años 1990, el acceso diferenciado a la tierra y capital continúa siendo la raíz de la diferenciación social en las comunidades campesinas. A diferencia de aquellos años, sin embargo, la diferenciación ha adquirido un carácter más tajante constituyendo tres estratos claramente definidos. Un primer estrato corresponde a los que denominaremos campesinos vulnerables. Estas familias por lo general carecen de tierra propia aunque algunas disponen no más de 1,4 hectáreas donde cultivan alimentos como el arroz y la yuca, principalmente. Establecen sus precarias viviendas en pequeños predios ubicados en la periferia de las comunidades, razón por la cual se los denomina “pobladores”. Dadas sus limitaciones de recursos, basan su estrategia de vida en la venta de su fuerza de trabajo principalmente en labores agrícolas tanto al interior de las comunidades –en las parcelas de los campesinos acomodados– como fuera de éstas principalmente en las colonias menonitas. Sin embargo, la demanda de trabajo es volátil por lo que en ocasiones practican otro tipo de oficios en la zona urbana como ser la albañilería, la cocina y la limpieza. En otras palabras, estos son los jornaleros sin tierra que se constituyen en el proletariado local. Los datos obtenidos muestran un notable crecimiento de este estrato pues del 4% registrado en los años 1990 hoy en día pasaron a aglutinar a cerca de un tercio de la población en las comunidades estudiadas (31%).

Un segundo estrato medio está conformado por familias campesinas que pese a que poseen parcelas propias (en promedio 40 hectáreas) no cuentan con el capital suficiente que les permita incursionar en la producción de tipo industrial. Consecuentemente, la mayoría deriva sus ingresos del arrendamiento de una parte de su tierra y la cría de ganado de manera extensiva. Esta combinación de fuentes de ingresos suele significar mayor estabilidad económica principalmente

porque el ganado representa una forma de ahorro para situaciones de necesidad. Según la encuesta realizada, este es el estrato mayoritario en las comunidades estudiadas abarcando al 58% del total de hogares. Familias de este estrato en ocasiones optan por el crédito para poder acoplarse a la dinámica agroindustrial, aunque tal acción implica altos grados de riesgo. En el peor de los casos terminan vendiendo sus parcelas para pagar los créditos y en el mejor se encaminan en un proceso de acumulación que de manera lenta puede significar su salto hacia el estrato económico superior conformado por los campesinos ricos (ibid.).

Finalmente, los campesinos ricos constituyen solo el 10% de la población y se caracterizan por su inclusión en la dinámica del agronegocio. También denominados pequeños productores, estas familias acceden a importantes superficies de tierra pues aparte de sus parcelas propias, alquilan y compran otras. Si bien el promedio de hectáreas propias en este estrato de riqueza es de 67, mediante el arrendamiento llegan a sembrar entre 100 y 220 hectáreas. Aunque también suelen recurrir a créditos, este segmento del campesinado posee el capital suficiente para encarar deudas con solvencia. Una parte importante de su capital lo invierte en la compra de maquinaria que no solo reduce considerablemente sus costos de producción sino que además les permite generar ingresos extras por la venta de servicios. Su exitosa incorporación a la dinámica del agronegocio les ha asignado un lugar de poder de base tanto material como simbólica en las comunidades.

Transformaciones en los patrones alimentarios

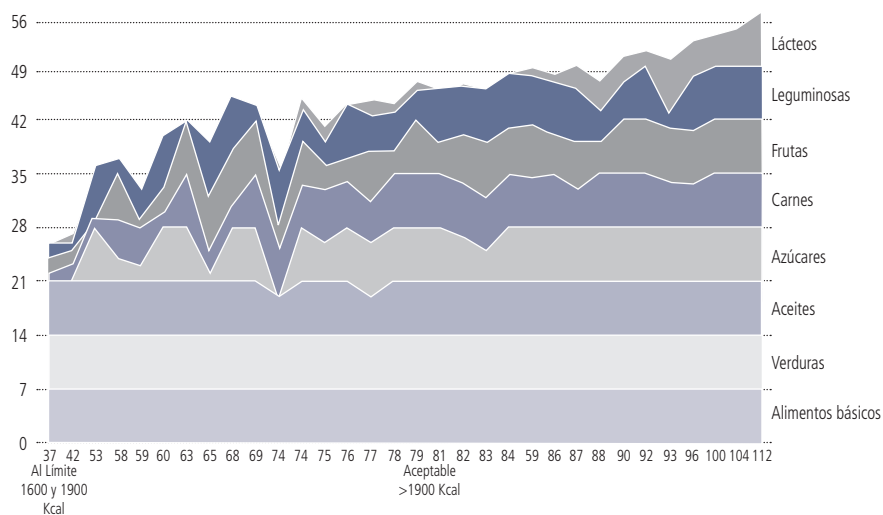
Como se describió anteriormente, a inicios de la década de 1990 la producción agrícola campesina en San Julián Sur comprendía un amplio abanico de productos como ser arroz, maíz, yuca, maní, soya, sandía, frejol, papa, cítricos, plátano, mango y otras hortalizas. Si bien la mayoría de la producción agrícola estaba destinada al mercado (74%), las familias satisfacían sus necesidades alimentarias principalmente a través de su producción propia. Incluso en el caso de cultivos altamente comerciales como el arroz y el maíz no se realizaba la comercialización total de la producción pues aproximadamente un 20% era destinado al autoconsumo familiar. Otros cultivos como la papa, la sandía y el frejol se vendían casi en la misma proporción en la que se consumían, mientras que los cultivos perennes como los cítricos, plátano y mango eran prácticamente solo de autoconsumo (Soria 1996).

Aunque no se cuenta con datos específicos sobre los patrones alimentarios de ese entonces, se sabe que la alimentación basada en sus propios productos derivaba en una dieta rica en hidratos de carbono por el consumo de arroz, yuca y maní. Si bien existía el consumo de hortalizas y frutales no se conoce si las cantidades eran las apropiadas. No obstante, el consumo de carnes y lácteos era reducido por lo que de manera general existían déficits importantes en cuanto a

calorías y proteínas. De hecho, según datos del diagnóstico realizado por CORDECRUZ-CIPCA-SACOA (1992), cerca del 70% de los niños menores de 6 años en San Julián presentaban deficiencias en su crecimiento a causa de la desnutrición.

En la actualidad, los datos recogidos en las comunidades estudiadas muestran que la familia campesina tiene una dieta alimentaria más variada pero que prácticamente la totalidad de sus alimentos los adquiere vía mercado. En función a la diversidad de la dieta y la frecuencia de consumo, el Puntaje de Consumo de Alimentos (PCA) divide los hogares en tres principales categorías de consumo: pobre, al límite y aceptable. En las comunidades estudiadas no se encontró ningún caso de consumo pobre, el 4% posee un consumo al límite, mientras que el restante 96% entra en la categoría de aceptable. Como se observa en el Gráfico 2, los alimentos básicos, verduras y aceites son consumidos a diario por la totalidad de familias. En los hogares de consumo al límite, sin embargo, se observa un consumo muy reducido de carnes, frutas y leguminosas, mientras que el consumo de lácteos es prácticamente inexistente. En contraste, los hogares de consumo alimentario aceptable gozan de una dieta bastante diversa y apropiada que incluye todos los grupos alimentarios a excepción de los lácteos que marcan la diferencia en el caso de hogares con los más altos índices de PCA.

Gráfico 2
Puntaje de Consumo Alimentario (PCA)

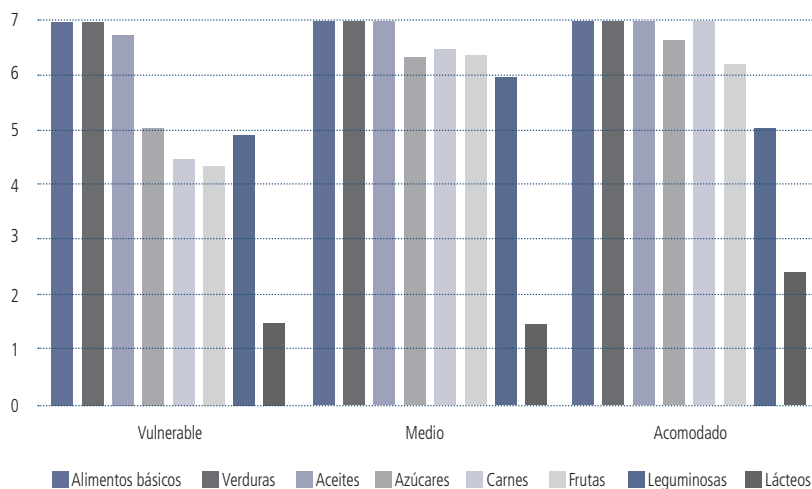


Fuente: elaboración propia en base encuesta familiar 2013.

Un análisis más detallado en base a los estratos de riqueza identificados confirma que la diversidad de la dieta posee correlación con el nivel de ingresos (ver

Gráfico 3). Los campesinos vulnerables consumen diariamente alimentos básicos, verduras y aceites. Sin embargo, su consumo de carne, azúcar, frutas y leguminosas es esporádico pues en promedio los consumen entre 4 y 5 días a la semana, mientras que el consumo de lácteos por parte de estas familias es aún muy bajo, aproximadamente una vez a la semana. Este marcado déficit en el consumo de lácteos se repite en las familias de estrato medio; aunque, en relación al resto de los grupos alimentarios, estos hogares reportan un consumo regular que permite buenos niveles de nutrición. Finalmente, las familias campesinas acomodadas también gozan de una dieta diversa donde a diferencia del estrato medio el consumo de carne es diario y los lácteos son consumidos más de dos veces a la semana, una mejora importante aunque aún por debajo de los requerimientos óptimos.

Gráfico 3
Consumo alimentario por estratos de riqueza



Fuente: elaboración propia en base encuesta familiar 2013.

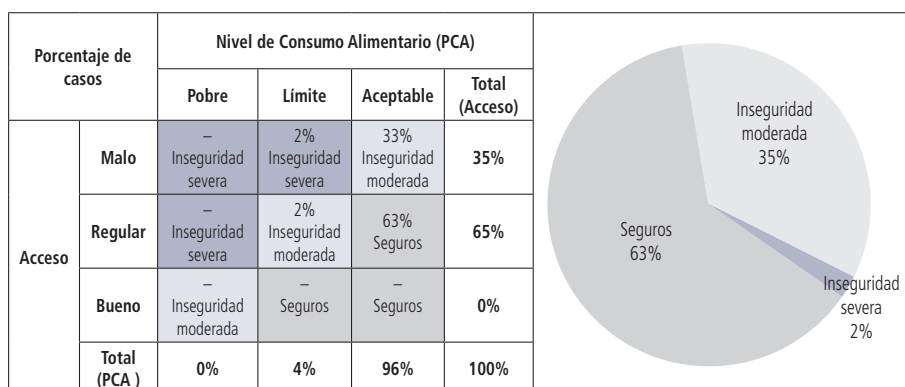
Según el Programa Mundial de Alimentos, es posible aproximarse al estado de seguridad alimentaria de una unidad determinada mediante el cruce del Puntaje de Consumo Alimentario con el nivel de acceso a alimentos¹². El Gráfico 4 muestra el mencionado ejercicio con relación a las comunidades que fueron encuestadas. Los hogares con un grado de consumo alimentario al límite (4%) presentan a la vez restricciones en cuanto al acceso pues dependen fuertemente

¹² Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) se puede estimar el "acceso a alimentos" mediante una combinación de criterios en cuanto a la fuente de procedencia de los alimentos (por ej. la compra, producción propia o trueque) y la sostenibilidad de ingresos que permite evaluar el grado de acceso alimentos vía mercado.

del mercado para su abastecimiento de alimentos pero además sus fuentes de ingresos son inestables y tienden a ser insostenibles en el tiempo. Este grupo representa a los hogares con marcadas limitaciones en cuanto a recursos productivos y cuya única fuente de ingresos es la venta de su fuerza de trabajo. Su deficitario consumo alimentario no es más que la traducción de su vulnerabilidad socio-económica.

Por otro lado, entre los hogares que han logrado un consumo alimentario aceptable (96%), el grado de acceso a los alimentos se encuentra entre malo y regular. Esto se debe fundamentalmente a las transformaciones productivas que han hecho de la compra la forma predominante de obtener alimentos; es decir, el acceso a alimentos es prácticamente en su totalidad vía mercado, lo que significa mayor vulnerabilidad ante la volatilidad de precios y la pérdida de control sobre la alimentación, tal y como se discute más adelante. Consecuentemente, en este contexto el grado de estabilidad y sostenibilidad de los ingresos juega un papel importante en la determinación de la inseguridad alimentaria de los hogares. Mientras que el 33% de estos hogares deriva sus ingresos de fuentes más inestables como la venta de fuerza laboral y la ganadería, el restante 63% posee ingresos más estables provenientes de la actividad agrícola o el arriendo de la tierra. Por tanto, siguiendo con las premisas analíticas del PMA, se podría afirmar que existe seguridad alimentaria en un 63% de las familias encuestadas, una inseguridad alimentaria moderada en un 35% y solo un 2% se encuentra en una situación de inseguridad severa.

Gráfico 4
Situación de la seguridad alimentaria según indicadores PMA



Fuente: elaboración propia en base encuesta familiar 2013.

Discusión

Como se demostró previamente, las comunidades campesinas en el área de estudio han sufrido una serie de transformaciones como resultado de las nuevas determinantes impuestas por la política económica del agronegocio sojero. Estas transformaciones acarrear implicaciones complejas y de diversa índole. Sin embargo, dado el fin particular de este documento, la siguiente discusión se centra en aquellas relacionadas con la problemática alimentaria tanto a nivel local como nacional.

En las últimas décadas se ha suscitado un cambio trascendental en el modelo productivo que ha pasado de una agricultura de “roza y quema” hacia otra de corte agroindustrial. Como bien lo señala Bernstein (2010), la implementación de tecnologías y prácticas de tipo industrial en la agricultura buscan lograr patrones de estandarización y eficiencia que faciliten la acumulación de capital de un modo más previsible y directo; es decir, el modelo agroindustrial significa la profundización de las relaciones capitalistas en la agricultura. Es de esta profundización que se desprenden importantes implicancias sobre la situación alimentaria.

A medida que la lógica del capital se impone en las actividades agrícolas, el uso de la tierra privilegia la maximización de la ganancia por sobre cualquier otro criterio. Así, la tierra que a inicios de los años 1990 facilitaba tanto la generación de ingresos como el autoabastecimiento alimentario familiar, es hoy en día un recurso destinado casi de manera exclusiva a la producción comercial de soya. Como la tierra ya no se usa para la producción doméstica de alimentos, el acceso a los mismos pasó a estar casi totalmente mediado por el mercado. De hecho, los datos recogidos por la encuesta muestran que el 89,6% de los alimentos consumidos por las familias son actualmente obtenidos mediante la compra. La mayoría de estos alimentos provienen de otras zonas del país y son comercializados mediante intermediarios ya sea en el mercado local o en las propias comunidades.

Desde el punto de vista del consumo alimentario, sin embargo, esta penetración de relaciones de mercado ha significado una mejora en las condiciones alimentarias de la población. El mercado ha hecho que una mayor variedad de productos agrícolas estén disponibles. Los datos recogidos en base al Puntaje de Consumo de Alimentos muestran que, a diferencia de la década de 1990, la dieta de las familias campesinas incluye prácticamente todos los grupos alimentarios establecidos, aunque de manera general el consumo de lácteos continúa siendo deficitario. No obstante, la predominancia del acceso a los alimentos vía mercado conlleva una serie de riesgos para la alimentación de las familias, a continuación se distinguen dos principales.

Primero, el campesino queda expuesto a la volatilidad de precios característica del mercado lo que puede significar su tránsito hacia situaciones de inseguridad

alimentaria transitoria o severa. Esto es particularmente problemático para los estratos más vulnerables de la clase campesina donde la venta de fuerza laboral permite acceder de manera ajustada a los alimentos. En otras palabras, su nivel de ingresos no permitiría una alimentación aceptable en caso de una eventual subida de los precios de los alimentos. La vulnerabilidad de este grupo se ve exacerbada por su falta de acceso a la tierra que le niega la posibilidad de cultivar al menos una fracción de los productos que componen su dieta. Por tanto, la marcada dependencia alimentaria ante el mercado consolida su posición de proletario pues este segmento vende su mano de obra como mercancía simplemente para poder acceder a otras mercancías esenciales para su subsistencia. Evidentemente, tal y como muestran los datos, este no es el grupo mayoritario aunque representa cerca de un tercio de la población campesina. El resto de las familias poseen un nivel de ingresos que les permite acceder a una dieta diversificada. Si bien las fuentes de estos ingresos –agricultura, ganadería y arrendamiento de la tierra, principalmente– son sostenibles en el corto y mediano plazo, es muy probable que a largo plazo estos ingresos disminuyan sustancialmente a causa de una menor productividad agrícola. De hecho, se ha evidenciado en otras zonas de Santa Cruz que el uso intensivo de la tierra bajo el agronegocio sojero conlleva eventualmente a una pérdida de fertilidad de suelos, lo que a su vez repercute seriamente sobre la productividad alcanzada (Castañón 2013, Suárez, Camburn y Crespo 2010, Urioste 2001).

Un segundo riesgo para la seguridad alimentaria de las familias está asociado al control mismo sobre los alimentos. Es evidente que a medida que se profundizan las relaciones capitalistas en la agricultura, los campesinos están perdiendo el control que solían tener sobre los alimentos. Como el campesino ya no produce lo que come, entrega una de sus principales armas ante el despojo capitalista, pues pierde su capacidad de autoabastecerse de los productos vitales. El control está pasando a manos del sector agroindustrial a medida que alimentos básicos como el fideo y el arroz pasan a ser los predominantes en las dietas de las familias. Consecuentemente, existe un proceso de homogenización del consumo alimentario, pues este está cada vez más determinado por lo que es posible y rentable producir desde el modelo agroindustrial. Estos patrones de consumo son promovidos por las generaciones jóvenes que los consideran un elemento modernizante en comparación a las dietas de sus padres y abuelos que solían priorizar cultivos de base campesina como la papa y la quinua. Por tanto, se puede argumentar que los campesinos están siendo cada vez más funcionales a la agroindustria pues no solo se constituyen en su mano de obra barata sino también en sus consumidores.

Como la consolidación del agronegocio sojero no es un fenómeno exclusivo del municipio de Cuatro Cañadas sino más bien uno que se extiende en gran parte de los llanos cruceños, es posible destilar algunas implicaciones alimentarias a nivel nacional. En particular, corresponde preguntarse sobre el aporte del sector

campesino de la región debido a que se constituye en el objeto de estudio del presente trabajo. Al analizar los cambios en la producción campesina en las últimas décadas, resulta evidente que su contribución en la producción de alimentos ha disminuido. Hasta inicios de los años noventa, las colonias campesinas en esta zona del país contribuían con el 12% del arroz y el 20% del maíz del total producido en el departamento de Santa Cruz además de abastecer de hortalizas a la población urbana del departamento, principalmente a la ciudad de Montero (Soria 1996). La tierra en las comunidades campesinas cumplía una clara función productiva de peso en el mercado de alimentos regional. Hoy en día, no obstante, los campesinos asentados en Santa Cruz –al igual que los empresarios y menonitas– se han especializado en el cultivo de soya llegando a sembrar cerca del 28% del total departamental (Castañón 2014, Anapo 2014). Aunque no se cuenta con datos desagregados a nivel departamental, la información primaria recogida sugiere que el 90% de las familias campesinas destinan su tierra para el cultivo de soya, solo el 4% al cultivo de arroz, mientras que la producción comercial de hortalizas es virtualmente inexistente; los campesinos en esta región han dejado de ser productores de alimentos.

La expansión sojera significa la homogenización de la producción agrícola pues cada vez son más las hectáreas que se destinan a este cultivo lo que crea un desbalance con otros cultivos de mayor importancia alimentaria para el país. Por ejemplo, cifras recientes muestran que en Bolivia por cada hectárea de papa o trigo existen más de seis de soya (Castañón 2014). La tierra y el trabajo agrícola son puestos al servicio de esta commodity de exportación que ha sido impuesta en el cono sur dentro de la nueva arquitectura global alimentaria promovida por intereses transnacionales (Bernstein 2010). En efecto, no se puede explicar la expansión del agronegocio sojero en Santa Cruz sin considerar estas dinámicas supranacionales. De este modo, la predominancia del agronegocio sojero representa un retroceso en términos de soberanía alimentaria para el país pues no solo se produce la commodity establecida por los intereses transnacionales sino que además se pasa a depender de los insumos que son de propiedad de las propias empresas transnacionales.

Finalmente, es interesante notar que los aspectos previamente discutidos sobre el control de la tierra y los alimentos no son considerados directamente por el concepto de “seguridad alimentaria”. Es por esto que la adopción exclusiva de este concepto resulta siempre en un análisis limitado. Si bien la inclusión de la dimensión de acceso representó un importante avance en comparación a perspectivas pasadas que consideraban simplemente la disponibilidad de alimentos (Maxwell y Wiebe 1998), la seguridad alimentaria como perspectiva de análisis ignora cuestiones de poder implícitas en las dinámicas que gobiernan la producción y el consumo de alimentos. De esta manera, pretende mostrarse como un

concepto políticamente neutral, aunque en la práctica termina reivindicando un enfoque neoclásico para la política económica de los alimentos.

Así dentro del enfoque de “seguridad alimentaria” el acceso a los alimentos está en última instancia determinado por las dinámicas de mercado con la noción implícita que esta es la forma más eficiente para garantizar la alimentación de la población. Como es el mercado el mecanismo privilegiado, no es relevante si la producción de alimentos se realiza en el ámbito local pues perfectamente estos podrían provenir de otras regiones, tal y como pasa en el contexto estudiado. Este último hecho también tiene su connotación nacional pues implica que un país podría alcanzar la seguridad alimentaria no necesariamente centrandos sus esfuerzos en la producción de alimentos para su población, pues estos podrían importarse si se consiguen los recursos económicos a través de otras actividades productivas. Consecuentemente, el concepto de “seguridad alimentaria” está en concordancia con nociones económicas clásicas como las “ventajas comparativas” y los tratados de libre comercio. Entonces, desde esta perspectiva, destinar los mejores suelos del país a una commodity de exportación como la soya no representa un problema medular dado que el país siempre podrá optar por la importación de alimentos, aunque por supuesto esto lo somete a la volatilidad de los precios internacionales que, como se evidenció en el año 2008, puede llegar a ser una estrategia por demás riesgosa.

Conclusiones

A partir de 1985 el giro neoliberal que tomó la política económica en Bolivia ha priorizado el establecimiento del agronegocio sojero como apuesta agraria y productiva. Esta apuesta estuvo principalmente focalizada en el departamento de Santa Cruz donde la agricultura industrial de corte capitalista se había desarrollado desde la reforma agraria. La expansión de este nuevo modelo productivo ha supuesto profundas transformaciones en las comunidades campesinas asentadas en las zonas productivas de Santa Cruz. En este documento se analizaron estas transformaciones y sus implicancias alimentarias. Para esto se tomó el caso de las comunidades campesinas localizadas en el municipio de Cuatro Cañadas que actualmente se ha ganado el apelativo de “capital nacional de la soya” por ser el que concentra la mayor superficie cultivada de este grano oleaginoso.

Mediante un análisis comparativo entre las condiciones de las comunidades a principios de los años 1990 –cuando aún el agronegocio no se había expandido en la zona– y datos recientes capturados mediante una encuesta de hogar, se evidenciaron importantes transformaciones. En el plano agrario/productivo el paso de una agricultura de “roza y quema” a otra de tipo agroindustrial ha derivado en un acceso a la tierra considerablemente más desigual. Mientras algunas familias

acceden a más de 200 hectáreas, un tercio de la población carece de tierra. Asimismo, el uso del suelo se ha intensificado y homogenizado pues en la actualidad queda menos del 10% de monte alto en estas comunidades y cerca del 90% de los productores campesinos priorizan la soya. El paisaje agrario de la zona ha cambiado radicalmente en comparación con el de los años noventa cuando existía cerca del 80% del monte alto y se sembraba regularmente una gran variedad de cultivos como cereales, tubérculos, hortalizas y frutales.

La composición socio-económica de las comunidades campesinas también se ha modificado. El análisis realizado da cuenta de una exacerbación de la diferenciación social como resultado de una nueva forma de hacer agricultura. Se ha producido un proceso de industrialización de la agricultura que, al ser más afín a la dinámica de acumulación de capital, profundiza las relaciones de producción capitalistas. A medida que la commodificación de la producción agrícola se consolida, la agricultura pasa a ser una actividad factible solo para aquellas familias que cuentan con el capital y los conocimientos necesarios para su implementación; hecho que a su vez termina por marginar a una parte significativa de la población campesina. La reproducción de la diferenciación social en estas comunidades está estrechamente ligada a esta dinámica. En este contexto, surge una mayor diversificación de las actividades generadoras de ingresos que aparenta ser una estrategia impuesta por la política económica imperante antes que una opción consciente de las familias.

En cuanto a la situación alimentaria, se ha evidenciado que de manera general la diversidad de la dieta campesina ha mejorado en las últimas décadas. A excepción de los lácteos, el resto de los grupos alimentarios establecidos son consumidos de manera regular por la mayoría de los hogares. El acceso a los alimentos, sin embargo, se da principalmente vía mercado, por lo que el nivel de ingresos de las familias resulta determinante para la calidad de su dieta. Esta quizás sea la principal transformación alimentaria que se ha suscitado en la zona pues a principios de la década de 1990 una parte importante de los alimentos eran producidos por las propias familias. Dada esta creciente dependencia ante el mercado, el análisis destaca además que existen dos principales riesgos para las familias campesinas. Por un lado, los hogares quedan a expensas de la volatilidad mercantil lo que puede comprometer su alimentación en caso de eventuales subidas de precio. En particular, los jornaleros locales son los más vulnerables ante este riesgo debido a su limitado nivel de ingresos pero también a su carencia de tierra para cultivar.

El segundo riesgo identificado está relacionado a la pérdida de control sobre los alimentos. De manera general, las familias campesinas ya no destinan tiempo ni fuerza laboral al cultivo de sus propios alimentos por lo que están eventualmente cediendo el control de los mismos al sector agroindustrial y sus productos

estandarizados. Esta situación lleva a una pérdida de soberanía por doble partida, no solo ya no controlan lo que producen, sino que, como clase campesina, tampoco controlan lo que consumen. Por tanto, a pesar de que el actual modelo productivo ha permitido generar ingresos suficientes para garantizar un consumo alimentario aceptable entre las familias campesinas, este modelo termina por impedir que la tierra sea utilizada para la producción de alimentos, lo que a su vez representa un factor de riesgo para la alimentación campesina.

Finalmente, la consolidación del agronegocio sojero como modelo productivo hegemónico en la región pone en entredicho la contribución de los productores campesinos a la soberanía alimentaria del país. Esto porque se ha reemplazado una producción variada de alimentos que abastecían mercados locales y regionales por una commodity cuyo destino principal es satisfacer la demanda internacional. Así, los suelos fértiles de una región que históricamente había sido proyectada como la proveedora de alimentos para el mercado doméstico nacional son, cada vez más, puestos al servicio de un proceso de acumulación de capital mediado por intereses corporativos foráneos.

Referencias

- Álvarez, N. (2005). *Cuatro Cañadas: Tierra y Desarrollo Rural*. Santa Cruz, Bolivia: Fundación TIERRA.
- Anapo. (Julio de 2014). *Anapo en Cifras*. Recuperado el Agosto de 2013, de Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo - Anapo: http://www.anapobolivia.org/documento/doc_2013.08.23_342159.pdf
- Barrientos, I. (Entrevista realizada por Enrique Castañón). Historia y situación de la Asociación Comunitaria Integral de Pequeños Productores Agrícolas de Cuatro Cañadas (ACIPACC). Cuatro Cañadas, julio de 2012.
- Bernstein, H. (2010). *Class Dynamics of Agrarian Change*. Canadá: Fernwood Publishing.
- CAO. (2013). *Números de Nuestra Tierra*. Santa Cruz, Bolivia: Cámara Agropecuaria del Oriente.
- Castañón, E. (2013). *Comunidades campesinas en territorio agroindustrial: diferenciación social y seguridad alimentaria en el municipio de Cuatro Cañadas*. Obtenido de Fundación TIERRA: http://www.ftierra.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1219&Itemid=65
- Castañón, E. (Febrero de 2014). *Las Dos Caras de la Moneda: Agricultura y Seguridad Alimentaria en Bolivia*. Obtenido de Fundación TIERRA: http://www.ftierra.org/index.php?option=com_content&view=article&id=18197:las-dos-caras-de-la-moneda&catid=159:sa&Itemid=239
- Catacora-Vargas, G., Galeano, P., Agapito-Tenfen, S., Aranda, D., Palau, T., y Onofre, R. (2012). *Producción de Soya en el Cono Sur de las Américas: actualización sobre el uso de tierras y pesticidas*. Cochabamba, Bolivia: Vimegraf.
- CORDECRUZ-CIPCA-SACOA. (1992). *Diagnóstico socio-económico de la colonia San Julián*. Santa Cruz: CORDECRUZ, Unidad de Planificación de Proyectos.
- Crespo, M. A. (Entrevista realizada por Enrique Castañón). Características de la agroindustria cruceña. Santa Cruz de la Sierra, 28 de agosto de 2013.

- FAO. (2006). *Seguridad Alimentaria*. Roma, Italia: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
- Harvey, D. (2005). *A Brief History of Neoliberalism*. New York: Oxford University Press.
- INE. (20 de 12 de 2013). *Instituto Nacional de Estadística*. Obtenido de Censo de Población y Vivienda 2012: <http://www.censosbolivia.bo/binbol/RpWebEngine.exe/Portal?&BASE=CPV2012COM>
- Joensen, L., Semino, S., y Paul, H. (2005). *Argentina: A Case Study on the Impact of Genetically Engineered Soya*. London: The Gaia Foundation.
- Maxwell, D., Wiebe, K. (1998). Land Tenure and Food Security: A Review of Concepts, Evidence, and Methods. *LTC Research Paper 129*, 41.
- Maxwell, S. (1979). *Colonos marginalizados al Norte de Santa Cruz - Avenidas de escape de la crisis del barbecho*. Santa Cruz, Bolivia: CIAT/BTAM Working Paper 4.
- MDRAyMA. (2006). *Plan Nacional de Saneamiento y Titulación*. La Paz, Bolivia: Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente.
- Muller, R., Muller, D., Schierhorn, F., Gerold, G., y Pacheco, P. (2012). Proximate causes of deforestation in the Bolivian lowlands. *Reg Environ Change*, 445-459.
- Pengue, W. (2004). *La transnacionalización de la agricultura y la alimentación en América Latina*. Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente.
- Pérez, M. (2007). *No todo grano que brilla es oro. Un análisis de la soya en Bolivia*. La Paz, Bolivia: Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
- PNUD. (2005). San Pedro: Un enclave productivo sojero. En PNUD, *La economía más allá del gas* (págs. 184-208). La Paz, Bolivia: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD.
- Romero, C. (2003). La Reforma Agraria en las Tierras Bajas de Bolivia. En C. -U. Desarrollo, *Proceso Agrario en Bolivia y América Latina*. La Paz: Plural Editores.
- Santos, C., Oyhantcabal, G., y Narbondo, I. (2012). *La expansión del agronegocio agrícola en Uruguay: impactos, disputas y discursos*. San Francisco, California: Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos.
- Soria, C. (1996). *Esperanzas y realidades: Colonización en Santa Cruz*. La Paz: CIPCA.
- Soruco, X. (2008). De la goma a la soya: El proyecto histórico de la elite cruceña. En X. Soruco, W. Plata, & G. Medeiros, *Los Barones del Oriente. El poder en Santa Cruz ayer y hoy* (págs. 1-100). Santa Cruz, Bolivia: Fundación TIERRA.
- Suárez, R. V., Camburn, M., y Crespo, S. (2010). *El pequeño productor en el clúster de la soya. Caso cruceño*. Santa Cruz, Bolivia: PROBIOMA.
- Urioste, M. (2001). El monocultivo de la soya en el municipio de Pailón. En M. Urioste , & D. Pacheco, *Las tierras bajas de Bolivia a fines del siglo XX*. La Paz, Bolivia: PIEB, Fundación TIERRA.
- Urioste, M. (2011). *Concentración y extranjerización de la tierra en Bolivia*. La Paz, Bolivia: Fundación TIERRA.
- Vadillo, A. (Entrevista realizada por Enrique Castañón). Tierra y agronegocio en Santa Cruz. Santa Cruz de la Sierra, 27 de agosto de 2013.

En el campo, los productores de mercancías prefieren comprar sus alimentos

Miguel Urioste F de C¹

Utilizando algunos instrumentos del Programa Mundial de Alimentos (PMA) este ensayo explica cómo en el municipio yungueño de Yanacachi los coccaleros, floricultores y mineros, alcanzan un destacado puntaje de consumo de alimentos (PCA), pero lo hacen a través de la compra de casi la totalidad de su comida. También revela que su dieta es variada y cubre los ocho grupos alimentarios que satisfacen sus necesidades alimenticias. Sin embargo, los yanacacheños son dependientes de los alimentos comprados y no tienen capacidad de auto abastecerse de su propia producción debido a las prácticas de monocultivo determinadas por los altos precios de las mercancías que producen o extraen: coca, flores y minerales. El artículo muestra que los coccaleros están integrados al mercado global y que forman parte del agro extractivismo. Concluye señalando que el mayoritario uso de la tierra para la producción de hoja de coca, si bien resuelve las necesidades de alimentación de los coccaleros mediante la generación de ingresos monetarios que se destinan a la compra de comida, no contribuye a la seguridad alimentaria nacional y menos aún a la soberanía alimentaria del país.

Palabras clave: Yanacachi, alimentos, precio, mercancía, extractivismo, monocultivo, commodity, coca, minerales, flores

Introducción

Pocos son los estudios sobre la realidad rural enfocados en la demanda alimentaria de los campesinos. Por razones obvias –en general– las investigaciones sobre la economía y la agricultura rural se centran en la oferta, es decir en las condiciones de producción de las unidades familiares campesinas (rendimiento por hectárea, tipos de semillas, acceso al riego, uso de fertilizantes y otros agroquímicos). Este estudio se concentra en las fuentes de los alimentos consumidos habitualmente por los habitantes del municipio de Yanacachi, en los Yungas de La Paz.

¹ Miguel Urioste es investigador de TIERRA, ha publicado diversos libros, ensayos y artículos sobre desarrollo rural, reforma agraria, minifundio y latifundio, extranjerización y uso de la tierra. Economista agrícola. Licenciado en Economía en la Universidad Católica Boliviana (UCB – La Paz, Bolivia). Especializado en Desarrollo Rural en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica y en el Institute of Latin American Studies (ILAS), London University, Londres, Inglaterra. Fue fundador y director de TIERRA desde 1991 hasta 2008 y actualmente es investigador en esta institución (m.urioste@ftierra.org).

Para profundizar nuestro conocimiento sobre el nivel de consumo alimentario a través de la cantidad y la calidad de alimentos consumidos y así aproximarnos a los aspectos nutricionales, nos preguntamos:

- ¿Cuál es el estado del consumo alimentario en Yanacachi y cómo acceden a los alimentos los diferentes tipos de productores cocaleros, floricultores y mineros?
- ¿Por qué los yanacacheños prefieren comprar sus alimentos en vez de producirlos y cuál es la racionalidad subyacente en esta conducta económica?

En síntesis, queremos averiguar cuál es la naturaleza de los cambios en la dieta alimenticia local, cómo estos cambios afectan a la alimentación de las familias y por qué en el municipio de Yanacachi hay un sostenido crecimiento de la cantidad de alimentos comprados, es decir, por qué los yanacacheños prefieren depender del mercado de alimentos antes que producirlos localmente.

Metodología

La metodología empleada se basa en el análisis de los datos de una encuesta *tipo* a 65 familias² de las comunidades del municipio de Yanacachi sobre los alimentos consumidos los siete días anteriores a la aplicación de la boleta³. La encuesta fue realizada a mediados del año 2013 por el equipo de investigación de TIERRA⁴. De las 65 boletas, 40 corresponden a familias de cocaleros, 20 a familias mineras y 5 a floricultores, lo que de alguna manera refleja la proporcionalidad en la distribución poblacional del municipio según su principal ocupación. Si bien esta clasificación es consistente, debe tomarse de manera indicativa ya que también existen algunas pocas comunidades cocaleras en cuyos territorios hay pequeñas cooperativas auríferas cuyos miembros son simultáneamente campesinos a media jornada, dependiendo del precio de los minerales en el mercado.

La cuestión alimentaria en el municipio de Yanacachi⁵

Ynacachi es la tercera sección de la provincia Sud Yungas en el departamento de La Paz. Tiene dos Cantones: Yanacachi y Villa Aspiazu (antiguamente llamado Chupe),

2 Encuesta familiar Yanacachi, TIERRA 2013. En adelante se utilizará "encuesta familiar 2013" en referencia a la misma.

3 A partir de esta información se han construido parámetros para establecer el Puntaje de Consumo Alimentario (PCA) y de Situación de Seguridad Alimentaria (Wiesemann y otros 2009).

4 Agradezco la colaboración de Rossmary Jaldín, Floriana Soria Galvarro, Camila Ugalde, Gladis Calle, José Luis Eyzaguirre, Enrique Castañón y Cesar Monasterios, en las entrevistas de campo y el llenado de las encuestas. De manera muy especial a Jose Luis Eyzaguirre por el procesamiento de los datos y la elaboración de todos los cuadros y gráficos de este informe. También agradezco las sugerencias de los demás investigadores de los otros estudios de caso.

5 En los otros estudios de caso de esta publicación se ha utilizado la misma metodología de PCA del Programa Mundial de Alimentos (PMA) adecuando algunas preguntas a las particularidades de cada región.

28 comunidades y cuatro centros poblados. Continúa siendo el municipio menos poblado de la mancomunidad de los Yungas a pesar de que aumentó un poco su población desde el Censo de 2001, particularmente en la mina La Chojlla, debido al auge del precio de los minerales durante la última década (2004-2013). El Censo de población y vivienda del año 2012 establece que la población total del municipio es de 6.302 personas de las cuales 1.573 viven en el campamento minero de La Chojlla.

Por este municipio atraviesa el camino del Takesi⁶, milenaria construcción de una de las primeras vías de acceso del altiplano hacia la región de los Yungas, tradicional zona de producción de coca desde épocas de Tiwanaku y del Incario hasta nuestros días. Este maravilloso camino empedrado, que atraviesa gigantescas montañas en cuyas partes bajas existen aún graderías o tacanas de piedra donde se cultivaba la hoja de coca hace por lo menos mil años, es la mayor evidencia de la importancia económica del comercio de este producto desde tiempos en que no existía moneda como medio de intercambio. La coca se transaba en el mercado de trabajo y de mercancías y hacía las veces de cuasi dinero. Varios estudiosos afirman que –dada su alta especialización productiva en la hoja de coca y las características particulares de sus muy empinados y escarpados terrenos– los Yungas siempre fueron deficitarios en alimentos (Murra 2002, Spedding 2004). Es conocida la crónica dependencia yungueña del mercado de alimentos producidos en otras regiones, pero esta situación ha evolucionado en las últimas décadas (desde 1980 en adelante) hasta el grado en que en los Yungas de hoy se produce ante todo coca y casi la totalidad de los alimentos son comprados de fuera de la región⁷. Solo un 15% de los alimentos que consumen los cocaleros de Yanacachi proviene de sus huertos. Las escasas plantaciones de cítricos y cafetales están prácticamente abandonadas u orientadas exclusivamente al consumo familiar. En este contexto estudiaremos los cambios ocurridos en los últimos años en el régimen alimenticio de la población de Yanacachi, el municipio de entrada a los Yungas.

Disponibilidad de bienes por tipo de productor

El Cuadro 1 muestra que, a diferencia de muchas áreas rurales de Bolivia, en Yanacachi es relativamente común que los hogares posean televisores (casi la

6 El camino del Takesi recorre desde la población de Palca (cerca de la ciudad de La Paz del lado del altiplano), hasta los Yungas del Sur, atraviesa todo el municipio de Yanacachi y llega a los poblados de Chulumani e Irupana, tiene una extensión aproximada de 70 kilómetros, constituyendo una intrincada red de conexiones viales entre diferentes valles en los que la producción de hoja de coca fue y es la principal actividad productiva (Di Cossimo 2003).

7 En los Yungas el café es el segundo cultivo en importancia, sin embargo está muy por debajo de la producción de hoja de coca en cuanto a superficie de tierra destinada y mano de obra. El reciente cultivo del café cada vez involucra menos a los cocaleros, sino más bien a vecinos residentes en las ciudades que tienen unidades de producción medianas de carácter empresarial muy distintas de las unidades familiares campesinas que caracterizan a la producción de la hoja de coca. Mientras el cultivo del café es cada vez más de carácter "empresarial", la coca mantiene su naturaleza familiar campesina-mercantil consolidada desde la Reforma Agraria de 1953 y notablemente acentuada en las últimas dos décadas (Mamani 1996).

mitad con pantalla plana) y antenas parabólicas, refrigeradores para conservar sus alimentos, muchos poseen motos y algunos autos (especialmente los mineros) para su transporte y trabajo en la región.

Cuadro 1
Disponibilidad de bienes por tipo de productor

Bienes	Cocaleros	Mineros (Chojlla)	Floricultores	Yanacachi General
Televisor pantalla plana	25,0%	25,0%	0,0%	23,1%
Antena parabólica	36,4%	43,7%	60,0%	40,0%
Refrigerador	63,6%	87,5%	0,0%	64,6%
Moto	20,4%	6,2%	0,0%	15,4%
Vehículos	20,4%	18,7%	9,2%	15,4%

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta familiar 2013.

Nota: el porcentaje de personas encuestadas que afirma tener antenas parabólicas no es igual al de la gente con TV pantalla plana. Se entiende que la diferencia tiene televisores normales.

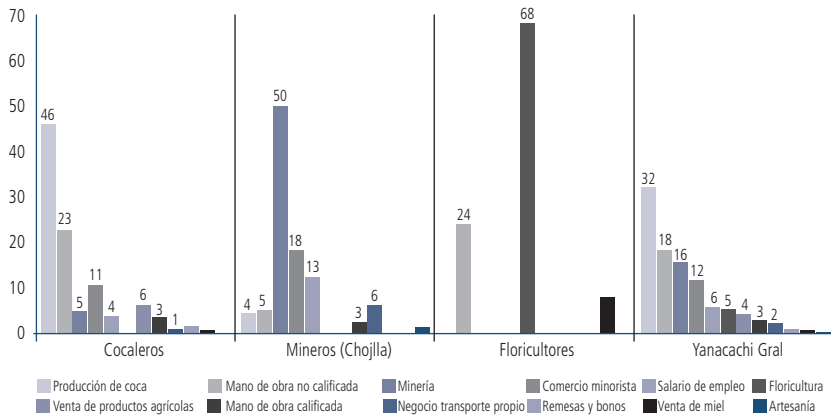
La disponibilidad de bienes de los mineros de La Chojlla medida en términos de TV plana, antena parabólica, refrigerador, motos y vehículos, está por encima de la media. Es decir que los mineros de La Chojlla tienen más bienes materiales que los cocaleros y los floricultores. Los floricultores están en la base de la escala, mientras que los cocaleros se ubican en el nivel medio-alto. En el municipio de Yanacachi habría cierta diferenciación medida en términos de tenencia de bienes por tipo de productor. Los mineros cooperativistas auríferos trabajan concesiones mineras generalmente a las orillas de los ríos y los mineros de la empresa privada La Chojlla explotan polimetálicos (concentrado de estaño y wólfram) mediante arreglos laborales peculiares con la empresa Minning Company, mientras que los cocaleros son monocultivadores y propietarios privados de las tierras que recibieron con la Reforma Agraria de 1953.

Fuentes de ingreso por tipo de productor

Es particularmente interesante analizar los distintos tipos de productores del municipio de Yanacachi según las fuentes de ingreso que tienen. El Gráfico 1 muestra que en el municipio de Yanacachi la principal manera de generar recursos monetarios es la producción de coca, seguida por la prestación de servicios de mano de obra no calificada, la minería y el comercio minorista. Se entiende que el jornaleo es importante en la medida en que la cosecha de hoja de coca exige la contratación temporal de comunarios y comunarias y esto representa un valor

importante en el ingreso. Esto es particularmente visible en familias dedicadas a la coca y a la floricultura, donde además de cultivar sus tierras, trabajan como jornaleros para apoyar a sus vecinos.

Gráfico 1
Fuentes de Ingreso por tipo de productor



Fuente: elaboración propia en base a la encuesta familiar 2013.

Por otra parte, también hay actividades menores que generan algunos recursos monetarios como trabajar de empleado en la municipalidad, conseguir un contrato para la ejecución de obras con la alcaldía (mediante relaciones políticas), o ser empleado de la Empresa Hidroeléctrica Taquesi, actividades de servicio, comercio y transporte. Algunos comunarios son también cuidadores de las viviendas de residentes y vecinos que viven en La Paz. En el municipio de Yanacachi hay especialización productiva y existe alguna *diferenciación interna* entre las familias según la actividad que desempeñan y la cantidad de tierra que poseen y trabajan.

Destino del gasto por tipo de productor

De acuerdo a la información recogida por nuestra encuesta, en todos los casos el principal gasto cotidiano de las familias de Yanacachi se destina a satisfacer las necesidades de alimentación. Esto significa que –en general– la población del municipio destina la mayoría de sus ingresos para comprar comida, no porque sea extremadamente pobre o porque no tenga tierra suficiente, sino porque

en Yanacachi ya no se produce alimentos. En Yanacachi *no se usa la tierra para producir alimentos* ya que resulta poco atractivo mientras los precios de los minerales, de la coca y de las flores sean altos, como ocurre desde hace por lo menos una década⁸. Además, como muchas comunidades del municipio de Yanacachi están cerca de La Paz –entre dos y tres horas de viaje–, es relativamente fácil viajar periódicamente a la ciudad para hacer el mercado, visitar a los familiares y hacer trámites y gestiones de diversa naturaleza. Los comunarios de *adentro* hacen sus compras semanales generalmente en la población de Chulumani –el poblado más grande de Yungas del Sur– pero también salen a La Paz periódicamente.

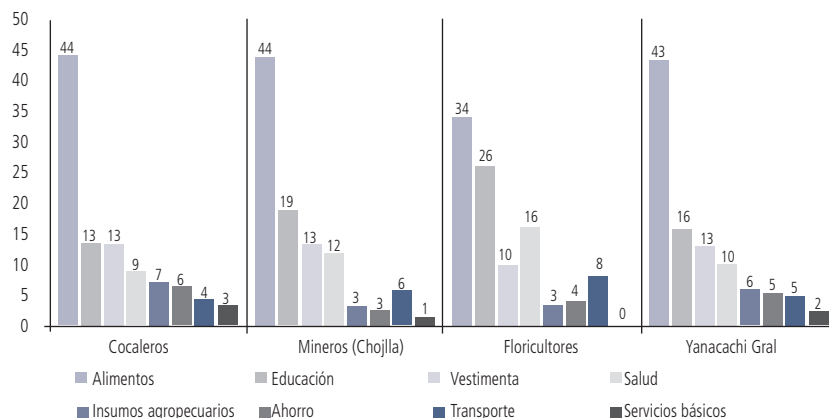
La mitad del tramo caminero (unos 70 kilómetros desde Unduavi para adentro) está en muy malas condiciones y es muy accidentado, pero los yungueños están acostumbrados a sortear los peligros. De los municipios que están *adentro*⁹ como Chulumani, Irupana o La Asunta, los coccaleros también *salen* a La Paz a vender su coca y a hacer sus compras de alimentos pero más esporádicamente, por eso casi a diario ingresan a los Yungas del Sur camiones cargados de todo tipo de alimentos, incluida fruta, cerveza y refrescos que traen los comerciantes mayoristas –que han generado un sistema de aprovisionamiento de alimentos– y se expenden en los mercados de las capitales de provincia, ciertamente a precios un 30 o 40% mayores que en los mercados de La Paz, según informan nuestros entrevistados. Pero, aun así, resulta más cómodo y accesible para los coccaleros comprar esa comida cara, en lugar de producirla. Prefieren destinar todo su tiempo y su mano de obra a producir y vender la coca porque es mucho más rentable que trabajar la tierra para producir alimentos para su consumo familiar. Están aplicando lo que se llama “costo de oportunidad”.

El Gráfico 2 muestra como en Yanacachi los tres tipos de productores entrevistados (coccaleros, floricultores, mineros) gastan la mayoría de sus ingresos en la compra de alimentos. En los tres grupos el segundo gasto en importancia es la educación de los hijos y el tercero es la vestimenta. Un estudio de la UMSA del año 2012 destaca que el ahorro familiar en los Yungas es muy alto, cercano a 500 dólares por mes (UMSA - IETA 2012), lo que explica la notoria presencia de electrodomésticos, vehículos y artículos electrónicos de alto valor en las comunidades.

8 El precio del oro y de otros minerales y metales comenzó a bajar el año 2013 sin embargo la minería continúa siendo atractiva.

9 Los habitantes del municipio de Yanacachi llaman a los pobladores de Chulumani, Irupana y especialmente de La Asunta, los de adentro, haciendo referencia a la mayor distancia de estos municipios con la ciudad de La Paz, conectados por el camino que entra desde Unduavi hasta los confines de Sud Yungas. Estos municipios de adentro son los principales productores de coca.

Gráfico 2
Destino de gastos por tipo de productor



Fuente: elaboración propia en base a la encuesta familiar 2013.

Origen de los alimentos

Los datos de la encuesta muestran el bajo nivel productivo de alimentos (marginal) por parte de los agricultores del municipio de Yanacachi. Compran casi todos los alimentos que consumen. Los cocaleros producen en sus pequeños huertos apenas un 15% del total de los alimentos que consumen y se trata por lo general de alimentos nativos como la yuca, waluzza, racacha, plátanos o zapallos, cultivados entre sus cocales en pequeñas huertas en las que de alguna manera se practican policultivos. Además tienen algunas gallinas caseras que les proveen de huevos y unos pocos comunarios crían conejos que provienen de proyectos públicos (FONADAL 2012). Llama la atención que sus huertos generalmente están en medio del chume (maleza, mala hierba). Según informan las personas entrevistadas el cuidado de las huertas es ahora tarea casi exclusiva de las mujeres porque los hombres viajan mucho a las reuniones.

Frecuencia del consumo¹⁰

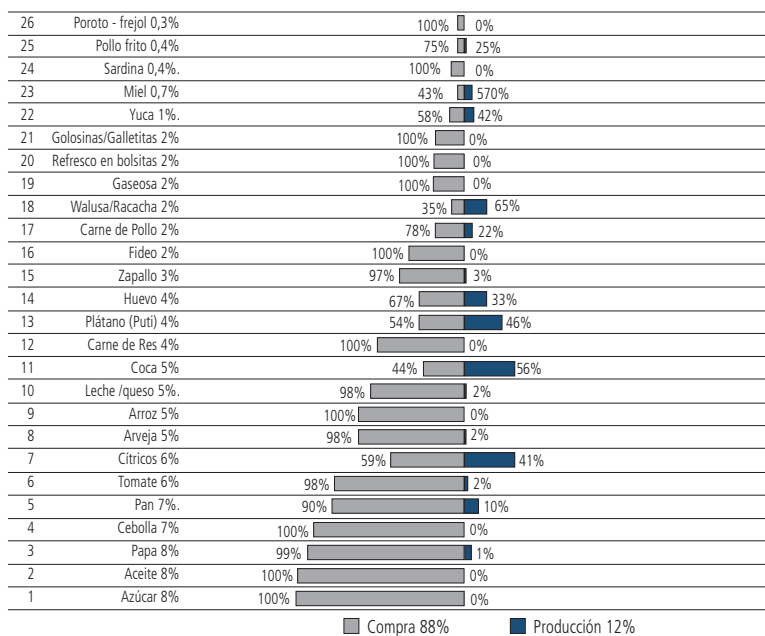
El Gráfico 3 muestra un panorama general de la frecuencia de consumo de alimentos de una familia de Yanacachi, durante una semana, clasificada por fuente de suministro: producción propia o comprada. El lado izquierdo de la pirámide muestra que el azúcar, el aceite, la papa, la cebolla, el pan, el arroz y el fideo son consumidos casi todos los días y comprados de fuera de su sistema productivo.

¹⁰ Los siguientes cuadros y gráficos no discriminan por *tipo de productor* porque las diferencias observadas no son relevantes. Es decir que mineros, cocaleros y floricultores tienen conductas similares.

Pequeñas proporciones de carne de res (generalmente chalona secada al sol) o de pollo y algo de tomate son consumidas varias veces a la semana y también son compradas. En el campamento minero de La Chojlla hay tiendas y un pequeño mercado que venden productos alimenticios pero –de acuerdo a nuestra observación– son muy caros, escasos y de mala calidad. Por eso, los mineros o sus familiares viajan periódicamente a la ciudad de La Paz a proveerse en mejores condiciones. Del total de los alimentos frecuentemente consumidos en el municipio de Yanacachi, el 88% son comprados, mientras que los producidos localmente son únicamente el 12%.

Los productos nativos y tradicionales de la dieta alimenticia en Yanacachi, como la yuca, la walusa, la racacha y los cítricos están siendo desplazados por otros procedentes de la agroindustria. Notablemente, los alimentos de menor frecuencia de consumo son el frejol y la yuca, y del total de cítricos consumidos en Yanacachi cada semana, más de la mitad son comprados (seguramente producidos en El Chapare o Santa Cruz). Casi todos cocinan a gas y algunos comunarios hacen pan generalmente los fines de semana y en días de fiesta. A pesar de todo, el plátano cocido o *puty* sigue siendo parte de la dieta como acompañante, pero el pan horneado localmente con harina importada de la Argentina lo está desplazando gradualmente.

Gráfico 3
Frecuencia de consumo de alimentos por fuente de suministro



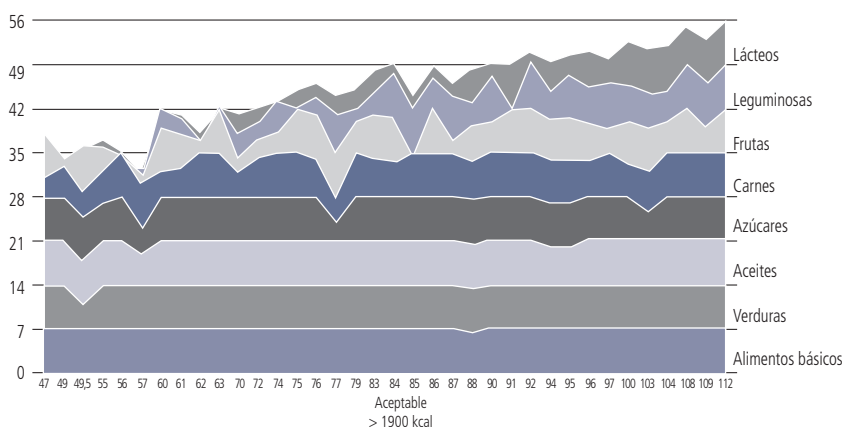
Fuente: elaboración propia en base a la encuesta familiar 2013.

Como los ingresos monetarios de los mineros y cocaleros están por encima de los de la mayoría de las áreas rurales agrícolas del país, no es de extrañar que ese dinero les permita comprar casi todos los alimentos que necesitan. Para establecer los niveles de acceso alimentario se han combinado las fuentes de ingreso monetario (FI) y las fuentes de suministro de alimentos (FA). Es decir, la manera en que la producción propia o la compra de alimentos mediante la generación de ingresos monetarios permiten el suministro de alimentos para el consumo diario. A través de la combinación de *ingresos y compra* es posible afirmar que el 49% de los entrevistados en Yanacachi el año 2013 tiene buen acceso a los alimentos y el 32% acceso mediano y juntos hacen el 81 % del total. Solo un 18% tiene un acceso pobre o insuficiente, es decir que no han logrado las fuentes de ingresos necesarias ni la producción propia para acceder a una alimentación adecuada. La mayoría de la población de Yanacachi accede sin problemas a los alimentos que necesita porque tiene buenas fuentes de ingresos monetarios. Los yungueños en general y yanacacheños en particular aseguran una alimentación relativamente diversificada y constante de sus familias mediante los ingresos provenientes de la venta de minerales, coca y flores que les permite comprar su canasta alimenticia.

Puntaje de consumo de alimentos

El Gráfico 4 muestra como en el municipio de Yanacachi el puntaje de consumo alimentario (PCA) es adecuado (aceptable) ya que la frecuencia tanto en cantidad (días consumidos) como en calidad (grupos de alimentos) permite una ingesta de alimentos básicos, azúcares, aceites o grasas, carnes y verduras que cubre las necesidades estimadas por los indicadores del Programa Mundial de Alimentos (PMA). Sin embargo, serían parcialmente deficitarios en el consumo de leguminosas y lácteos.

Gráfico 4
Puntaje de Consumo Alimentario (PCA)



Fuente: elaboración propia en base a la encuesta familiar 2013.

Seguridad alimentaria

Finalmente, en el Cuadro 2 se muestra la combinación de las variables establecidas para medir el acceso a alimentos y el nivel de consumo alimentario (PCA). Según los índices construidos por el PMA para este efecto, el 82% de la población encuestada tiene seguridad alimentaria y apenas un 18% sufre de inseguridad moderada. Según los datos, no existen familias que tengan inseguridad alimentaria severa. Esta información revela que el comportamiento o racionalidad económica de los cocalleros y mineros (no tanto los floricultores) consigue el propósito de asegurarse una alimentación variada y constante todo el año y durante períodos prolongados, además de destinar –en promedio– la mitad de sus ingresos a educación, salud, vestimenta y otros. El centenar de productores de flores que existen a la entrada del municipio han encontrado una interesante fuente de ingresos –complementaria a otros ingresos familiares seguramente no agrícolas– que, sin embargo, no compite con la coca ni los minerales ya que sus tierras no son aptas para la producción de coca por su excesiva altitud y humedad.

Cuadro 2
Situación Seguridad Alimentaria

Porcentaje de casos		Nivel de Consumo Alimentario (PCA)			
		Pobre	Límite	Aceptable	Total (Acceso)
Acceso	Malo	– Inseguridad Severa	– Inseguridad Severa	18,5% Inseguridad Moderada	18,5%
	Regular	– Inseguridad Severa	– Inseguridad Moderada	32,3% Seguros	32,3%
	Bueno	– Inseguridad Moderada	– Seguros	49,2% Seguros	49,2%
	Total (PCA)	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%

Fuente: elaboración propia en base encuesta familiar 2013.

Entre la agricultura familiar, la producción de mercancías y el agronegocio

En un trabajo sobre Yanacachi de hace dos años (2012) nos preguntábamos:

- ¿Cuáles han sido los cambios más significativos en la realidad social, económica y productiva de Yanacachi en las últimas décadas?
- ¿Qué implicaciones tienen esos cambios en la reconfiguración de la dinámica productiva?
- ¿Cuáles han sido sus efectos sobre la disponibilidad, acceso y uso de la tierra?

Para responder esas preguntas publicamos un estudio (Urioste 2013) en el que explicábamos que los campesinos de Yanacachi pueden alcanzar un modo de vida por encima de los umbrales de la pobreza rural y asegurarse una dieta alimenticia variada cuando destinan sus tierras y otros recursos (mano de obra, capital, tecnología, organización, acceso a mercados, institucionalidad y conocimientos) a la producción mercantil de hoja de coca combinada con la extracción de oro y otros minerales y –en menor medida– de flores, a pesar de que ello implica una dependencia del mercado urbano para la provisión de casi todos sus alimentos. Este estudio evidenciaba que en la última década en Yanacachi hay un lento pero sostenido crecimiento de los ingresos de las familias y que ese crecimiento –en general– no origina grandes inequidades sino que por el contrario se caracteriza por ser relativamente redistributivo entre las familias de la región. Las mayores diferenciaciones internas entre los cocaleros se producirían cuando algunas familias logran acceder a más tierras o catos de coca por compra o herencia, pero la inequidad se da principalmente en los procesos de acopio y venta vinculados a grupos familiares y de dirigentes sindicales y políticos que manejan ADEPCOCA¹¹ y, a través de esta empresa, controlan el comercio de la coca. Señalábamos también que los mineros –especialmente los cooperativistas auríferos– tienen ingresos mayores que los cocaleros, pero sus ganancias son más inestables e inciertas.

La particularidad de este *modelo* es que se basa en el cultivo de la hoja de coca que por un lado tiene un uso legal como *energizante* (acullico) y, por otro, un uso ilegal como materia prima para la cocaína, aspecto que juega un rol determinante para mantener cada vez más alto y estable su precio, que es la condición necesaria para los elevados niveles de rentabilidad y de retorno económico. Decíamos que desde hace más de dos décadas, pero especialmente durante el último quinquenio (2007-2012), los cocaleros de Yanacachi y más aún los de los Yungas *de adentro* están atraídos por un mercado de coca creciente, muy rentable, que ejerce presión para destinar más tierras y fuerza de trabajo a esa actividad.

Los últimos años, los productores de Yanacachi se benefician de precios –especialmente de la coca– cada vez más atractivos¹², situación que conduce a intensificar su estrategia económica de especialización, es decir a destinar más tierras y fuerza de trabajo familiar al monocultivo de coca y su total articulación (depen-

11 ADEPCOCA es la Asociación de Productores y Comercializadores de Coca. Es una empresa de carácter social que registra, autoriza y legaliza la compra y venta de coca así como regula su circulación en el país y en el norte argentino (cada mes, comercializadores al detalle venden 3.849 taques de coca equivalentes a 34.550 libras en Villazón, de los cuales el 90% pasa a la Argentina. Página Siete, 1 de abril de 2012). ADEPCOCA es una entidad privada que no depende del Estado y la coca que esta empresa certifica para su comercialización es legal.

12 El INE estableció que el precio de la hoja de coca se multiplicó por 15 entre los años 1990 y 2009. (Página Siete, 19 de marzo de 2012). A fines de 2013 un taque de coca de 50 libras costaba 2.000 bolivianos. (Comprobación del autor en el mercado de Villa Fátima). Su mercado es segmentado por regiones y por tipo de uso (legal o ilegal). El traficante de droga tiene un margen de ganancia muy grande y está en condiciones de pagar prácticamente cualquier precio por la hoja de coca. Eso deja al consumidor tradicional en desventaja. En cada región productora hay un mercado con un precio (Laserna 2006).

dencia) con el mercado. El productor de Yanacachi está acentuando su antigua y tradicional relación mercantil bajo condiciones externas muy favorables que, sin embargo, no puede controlar, como son su dependencia del mercado de alimentos de la ciudad de La Paz, y los precios del oro y de la coca (Urioste 2013).

Nuestro estudio del año 2012 señalaba que Yanacachi y los Yungas en general son un territorio dinámico y en crecimiento, pero sin desarrollo rural y menos sostenible. En este contexto, es evidente la dificultad de promover eficaces políticas públicas de diversificación productiva agropecuaria o de seguridad alimentaria con soberanía, cuando éstas se enfrentan abiertamente a las posibilidades que ofrece el atractivo y creciente mercado de la coca y del oro (FONADAL 2011). Los yungueños y yanacacheños no le demandan al Estado mejores condiciones para la producción local de alimentos porque el precio actual de la hoja de la coca y de los minerales (hasta el año 2013) –pero particularmente su inmediata monetización libre de todo control ni carga impositiva– supera con creces las expectativas de ganancia de cualquier otra actividad agropecuaria (Roberts 2010).

La seguridad alimentaria de la población de Yanacachi depende en gran medida de su capacidad de compra de alimentos de fuera de su sistema productivo (principalmente en el barrio de Villa Fátima en la ciudad de La Paz, además de los mercados de La Chojlla o de Chulumani). Esto no quiere decir que todos los yanacacheños vayan cada quince días a La Paz a comprar sus alimentos. Viajan periódicamente a la ciudad capital los que viven cerca de la carretera troncal y a distancias razonables que significan recorridos de unas tres horas.

Los que viven *más adentro* no pueden viajar tan seguido y se ven obligados a comprar alimentos muy caros en las capitales de provincia o al borde de la carretera troncal donde se instalan algunos puestos de venta. Sin embargo, dada la intrincada topografía de los Yungas y las dificultades de transporte –a diferencia del altiplano donde las comunicaciones y el transporte son mucho más expeditas–, los viajes y el intercambio entre las poblaciones de los Yungas son más esporádicos. Por eso a los Yungas se *entra* y de ahí, se *sale*. Sin embargo, la mayor disponibilidad de vehículos propios y los campeonatos de fútbol y las frecuentes reuniones sindicales están estimulando el flujo de personas –y de mercancías– dentro de los Yungas.

En la mina La Chojlla hay un mercado de alimentos estable, pero generalmente mal provisto, a pesar de que el campamento minero es una especie de centro urbano de muy alta densidad poblacional. Por su parte, las comunidades que no están sobre la carretera principal, quedan aisladas, están dispersas y tienen más dificultades para abastecerse de alimentos de afuera. Por eso la mayoría de los centros poblados de las comunidades cocaleras se han ido instalando en los bordes de la carretera principal que recorre todo Sud Yungas. De esa manera

también se benefician de luz eléctrica y otros servicios.

En Yanacachi, a pesar de tener la más baja productividad cocalera de todo los Yungas (tierras erosionadas y cansadas), el cultivo de la coca es la principal actividad agropecuaria del municipio en términos de población dedicada a la agricultura. Es la principal fuente de ingresos agropecuarios seguros y estables todo el año. El cultivo de la hoja de coca tres veces por año de plantas que duran hasta cuarenta años, acompañado de una tendencia sostenida al alza de su precio en la última década, genera una estabilidad y bonanza económica muy apreciada por todos en la región de los Yungas. Solo compite con la minería en momentos de auge de precios de los minerales (2005-2013). La floricultura es rentable en las pocas comunidades de *la entrada* donde un centenar de familias producen flores. Para los yungueños la coca es su banco, su caja chica y grande, es su capital, su patrimonio. Los cocales son su activo fijo. *De aquí sale la coca y se convierte en alimento que viene de La Paz* (Urioste 2013).

Finalmente, decíamos que el dinero generado por la venta de la coca (80% se vende y un 20% es consumido localmente) es destinado mayormente a la compra de alimentos. A pesar de ser uno de los municipios de ingresos medios del país, no es un territorio en el que se ha eliminado la pobreza, pero si la desnutrición infantil y es un lugar donde hay relativo crecimiento y cierta equidad social. Paradójicamente en Yanacachi se comienza a diagnosticar casos de obesidad infantil, especialmente entre los hijos de los mineros de La Chojlla. La caída de los precios de los minerales iniciada el año 2013 afectará negativamente la bonanza económica que se ha vivido en la última década en este municipio.

La comparación de la información analizada entre los años 2012 y 2014, nos permite deducir que los yungueños en general y yanacacheños en particular son altamente vulnerables a las fluctuaciones del mercado. Cualquier variación en el nivel de precios de los alimentos que los yanacacheños compran en el mercado y consumen habitualmente influye directamente en su nivel de vida y en su dieta alimenticia. Como ahora no producen casi nada de lo que consumen, los cocales yungueños son tan vulnerables en su alimentación como lo es cualquier ciudadano que vive en poblados urbanos o ciudades en cualquier lugar del país. Si por alguna razón los precios de estas mercancías (oro, estaño, coca, flores) bajaran notablemente –como ahora está ocurriendo con los minerales– se verían obligados a producir muchos de los alimentos que necesitan consumir.

Esta eventual conversión de cocales monoproductores a agricultores un poco más diversificados seguramente los empobrecería inicialmente (al principio bajaría su nivel de ingresos, consumo y gasto) y les obligaría a otras estrategias de sobrevivencia, como la migración, la recuperación de cultivos tradicionales o la incursión en el cultivo del café, que también es rentable, pero mucho menos que

la coca (obtener buena rentabilidad del cultivo del café en fincas familiares muy pequeñas es muy difícil, además un terreno que ha sido cocal durante muchos años no tiene condiciones para reconvertirse automáticamente en lugar de producción de café, salvo que se invierta mucho en su recuperación)¹³.

En los últimos años los coccaleros ya casi no producen alimentos ni para su consumo, pero si cultivan cada vez más una materia prima-mercancía muy apetecida en el mercado mundial de estupefacientes y su producto en estado natural (hoja de coca) o transformado en droga (cocaína) está íntegramente globalizado, es decir incorporado en las transacciones del mercado nacional y mundial. La coca es un *commodity* muy particular vinculado directamente al mercado internacional capitalista (Sanabria 1993).

Sanabria¹⁴ contribuye al debate sobre la naturaleza mercantil del cultivo y comercio de la hoja de coca. Él afirma que los productores de coca nunca fueron de subsistencia ni de auto consumo, ya que su objeto es generar excedentes que se capitalizan. Los coccaleros se han insertado muy exitosamente dentro del sistema capitalista mundo, debido al alto precio de la coca y su demanda estable y por eso están dispuestos a asumir riesgos cada vez mayores tanto de orden económico, político e incluso, legal. Sanabria continúa señalando que –por la rentabilidad de la coca– los coccaleros han superado casi todas las restricciones impuestas en el pasado por los gobiernos y la cooperación internacional, especialmente de USAID. Y lo han hecho decisiva, rápida, y exitosamente logrando mantener sus expectativas de ingresos para mejorar su bienestar familiar. Sin embargo, dice Sanabria, no cabe duda de que los coccaleros contribuyen a la acumulación de las élites vinculadas al tráfico de droga y es precisamente por eso que los traficantes prefieren dejar la producción de la hoja de coca en manos de miles de pequeños productores ya que su cultivo es intensivo en mano de obra especializada y la técnica de cultivo es la misma de hace mil años y los coccaleros la dominan. Por eso la coca es un *cash crop*¹⁵ (Sanabria 1993).

Citando a Cook y Binford, Sanabria recuerda que en el mundo contemporáneo existen pequeños productores familiares (campesinos) que se dedican a una producción de *mercancías simples* (petty commodities) que tienen cuatro característi-

13 En Yanacachi no hemos podido encontrar ningún ex cocal –abandonado hace muchos años por su pérdida de fertilidad– reconvertido a otras actividades productivas. Esto quiere decir que para diversificar la producción agropecuaria en los Yungas sería necesario ampliar la frontera agrícola, ya que en los ex coccales abandonados no se puede introducir nuevas variedades de productos agrícolas. Cualquier intención de ampliar la frontera agrícola a su vez encontrará que hay limitación de tierras disponibles. En la zona tradicional de los Yungas ya no hay donde ampliar la superficie de cultivos, por eso es tan fuerte la presión migratoria y la ampliación de frontera en la región de La Asunta –y más adentro–.

14 Si bien el trabajo de investigación de Sanabria está referido al Trópico de Cochabamba (TDC) en una época de auge del cultivo de la coca y elaboración de cocaína en esta región en los años 1985-1992 las categorías de análisis que el trae de las ciencias sociales y sus reflexiones sobre la *racionalidad económica* de los coccaleros siguen siendo válidas para entender mejor por qué en Yanacachi los coccaleros prefieren cultivar coca antes que cualquier otro producto.

15 Un *cash crop* es definido por las ciencias económicas como aquel producto agrícola que es destinado a la generación de ingresos a las familias de los productores mediante la venta en los mercados. Desde un inicio la finalidad de su producción no es el auto consumo, sino su venta para proporcionar dinero.

cas fundamentales, que bien pueden asociarse a los productores de hoja de coca:

1. producción estable y exclusiva de mercancías para el intercambio por dinero
2. empresas privadas de escala familiar donde los medios de producción están controlados por los productores y el trabajo no es asalariado
3. mutua interdependencia de las unidades de producción
4. la producción se realiza para la acumulación del capital o de las utilidades

Además, el estudio de Sanabria nos lleva a inferir que los campesinos –por ser tales– no tienen lógicas intrínsecas determinadas por su origen, identidad étnica, racionalidad cultural o histórica de apego a las costumbres. Sanabria critica así la construcción teórica de lo que se vino a llamar *campesinos de autosubsistencia* y –siguiendo el razonamiento de los autores citados en el párrafo anterior– coincide en calificar esta categoría como un mito. De ese modo, tanto los campesinos productores de soya, quinua, café y cacao, como los de coca, dadas ciertas condiciones de acceso a los mercados, todos ellos se especializarán, intensificarán su producción y tratarán de obtener el máximo de rentabilidad y acumulación de capital en el menor tiempo y con el menor esfuerzo posible.

Claro que si no hubiera producción y consumo de cocaína a nivel mundial, el precio de la hoja de coca sería mucho más bajo, aunque su venta como energizante aún sería rentable –mucho menos que en la actualidad– por su persistente demanda para el *acullico*¹⁶ no solamente en Bolivia sino también en el norte argentino. Pero eso cambiaría la naturaleza de esta mercancía y disminuiría significativamente la rentabilidad del comercio de la hoja de coca.

Huella ambiental, monocultivo y agro extractivismo

Para un conocedor de la región yungueña, el impacto ambiental del monocultivo de la hoja de coca se puede observar a simple vista. No se trata de que la coca sea más dañina que otros cultivos, al contrario, parece que afecta menos la fertilidad de los suelos (CEEDI - LIDEMA 1990). Sin embargo, como ocurre con todo monocultivo permanente (quinua, soya, café, cacao o coca), en los Yungas la reproducción de nutrientes es muy lenta y si no hay descanso de la tierra, rotación de cultivos, preservación de los bosques, y adecuado tratamiento de suelos, éstos acaban agotándose inexorablemente. Precisamente las peladas y secas laderas de Yanacachi son una muestra fehaciente de ello.

El avance de la mancha ecológica del monocultivo de la hoja de coca se produce en ciclos históricos cada vez más cortos. Primero fue en los tiempos de Tiwanacu y del Incario y su impacto es notorio en la ladera norte del municipio

¹⁶ El *acullico* es el mascado de la hoja de coca originalmente practicado por los pueblos indígenas y luego generalizado a vastos sectores de trabajadores manuales sometidos a muy fuertes exigencias físicas. También se mastica coca socialmente.

de Yanacachi desde La Florida hasta Puente Villa, –debajo de los 1.800 msnm– donde la mala hierba o chume oculta milenarios andenes de piedra que otrora fueron extensos cocales –seguramente bajo supervisión y control estatal– y que ahora están yermos (no producen casi nada).

La segunda huella ambiental es de la era colonial y republicana antigua y abarcaba hasta los municipios de Chulumani y de Irupana en los Yungas del Sur cuando se exportaba coca a las minas de Potosí y de Oruro para el acullico de los mineros indígenas semi esclavos. Mientras que la tercera y última huella ecológica corresponde a la *expansión de la frontera agrícola* en la región de La Asunta desde los años ochenta del siglo pasado que ocurre paralelamente al crecimiento de la demanda de coca para la producción de droga. En los tres períodos la producción de la hoja de coca obedece a una alta demanda de un mercado externo y siempre tuvo la naturaleza de mercancía. Dadas las especiales características de sus suelos, régimen de lluvias, de calor y exposición solar, producir coca (mercancía) en los Yungas siempre ha sido más rentable que producir alimentos (Spedding 1994).

Hace mucho tiempo que los yungueños y yanacacheños han resuelto el dilema de especialización o diversificación de cultivos. Han optado por una extrema especialización que los ha llevado al monocultivo de la coca como principal actividad en casi toda la región. Son expertos en el manejo de suelos (tacanas, wachos y andenes), almácigos y plantines, trasplantes, semi sombras, control de plagas y enfermedades, cosecha y secado de la hoja, conservación y embolsado en *taques*¹⁷. La comercialización de la hoja de coca es registrada por la asociación de productores de hoja de coca (ADEPCOCA) para su venta en los mercados a través de un sistema de control y registro que combina la organización sindical con la empresarial corporativa, y –a decir de los propios cocaleros– es muy exitosa.

Pero los cocaleros cada vez usan más agroquímicos para el control de la maleza y plagas, lo que está convirtiendo la coca yungueña en un producto nocivo para la salud del *acullicador* (Urioste 2013). El cultivo de la hoja de coca es una actividad familiar que no admite la presencia de *extraños* ni de unidades productivas de superficie superiores a las que puede manejar cada familia. En otras palabras, dada la organización de los miles de productores, la particularidad del producto y las características tan empinadas del terreno, no es siquiera pensable la posibilidad de constituir plantaciones de coca a gran escala que contrate masiva mano de obra asalariada.

En el trabajo del año 2012 explicamos por qué consideramos a la producción de la hoja de coca una actividad agrícola extractiva. Decíamos que la agricultura deviene en una actividad extractivista cuando ésta se especializa al extremo de convertirse en un monocultivo que perdura forzosamente durante largos perio-

¹⁷ El *taque* es una unidad de medida que corresponde a un bulto que pesa 50 libras.

dos de tiempo, en las mismas tierras, con tecnologías y sistemas productivos que introducen el uso descontrolado de agroquímicos y finalmente conducen –irremediablemente– a la pérdida de fertilidad de los suelos y a la consecuente disminución de productividad.

Nuestra observación en terreno permite afirmar que disponer de mayores superficies de tierra mediante la compra, arriendo, herencia o acuerdos familiares, no conduce a diversificar la producción de coca con otros productos agrícolas como café u otros alimentos. Al contrario, en los Yungas y en Yanacachi, cuanto más tierra dispone una familia, mayor es la superficie que destina a la producción de hoja de coca (Urioste 2013). Cuanto más tierra más monocultivo. Pero hay controles sociales eficaces en el plano sindical y corporativo que impiden la extrema concentración de la propiedad de la tierra y del negocio cocalero en pocas manos. La producción de coca es una actividad controlada de manera horizontal y corporativa por numerosos sindicatos y asociaciones de productores.

Así, de ese modo tan peculiar y como proveedores de fuerza de trabajo especializada y calificada, de tierra, de organización productiva y comercial, pero especialmente de la materia prima para la elaboración de la cocaína, los productores de coca están plenamente integrados no solo al mercado sino al sistema capitalista global y forman parte de un atípico agronegocio de *commodities* (Sanabria 1993).

Las presiones para expandir el número de afiliados al sindicato de cocaleros son permanentes, pero, a pesar de que el negocio de producir y vender coca en los Yungas es tan rentable, el número de cocaleros no aumenta significativamente porque existe un férreo control de parte de los ya instalados y reconocidos por ADEPCOCA que no aceptan nueva competencia. El número de productores de hoja de coca no se expande porque su membrecía está corporativamente controlada. La expansión del cultivo se da mediante la incorporación de nuevas regiones no tradicionalmente productoras de coca, como La Asunta.

Un principal freno a cierta diversificación productiva en los Yungas del Sur es el crónico mal estado de la carretera desde Unduavi hasta las comunidades de *adentro*. Hace dos años (2012) el Presidente inauguró la ampliación y asfaltado del tramo carretero Unduavi-Chulumani y el gobierno asignó un financiamiento de 70 millones de dólares para este emprendimiento. La Empresa Constructora del Ejército (ECE) que finalmente fue encargada de la obra, en dos años apenas ha ensanchado unos cinco kilómetros provocando enormes derrumbes y daños ambientales. La obra es titánica y requerirá de mucho mayor presupuesto público y de empresas más calificadas. Con una carretera asfaltada hacia Sud Yungas la incorporación de esta región al mercado de bienes y productos será aún mayor y las posibilidades de diversificación de su economía crecerán.

Sin embargo, es poco probable que las actualmente tímidas políticas de FONADAL logren diversificar la producción en los Yungas. Solamente si hubiese

agresivas políticas con fuertes subsidios para la producción de café y otros productos como amaranto y cítricos con mercados y precios asegurados por EMAPA, se podría recuperar cierta diversificación productiva en la región. Igual podría suceder con programas de reforestación para reponer los cada vez más escasos *ojos de agua*, mediante atractivos subsidios estatales.

El turismo de aventura por el *Camino del Taquesi* esconde cierto potencial económico para la región, más aún si los propios comunarios habilitan y administran los maravillosos sitios arqueológicos como el *Mirador y Tambo de Tawacosi*. Una explotación turística mayor requerirá ciertamente la directa intervención del Estado central a través del Ministerio de las Culturas y la inclusión de la ruta del *Taquesi*, y la decena de sitios arqueológicos que la acompañan, en el proyecto *Qhapac Ñan* impulsado por la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Existen pues algunas oportunidades para diversificar las fuentes de ingresos y de consumo de los yungueños, pero eso implica romper la actual barrera mental y abrirla hacia opciones más sostenibles ambientalmente mediante la producción ecológica de la coca, café, cítricos, maní, amaranto, maíces suaves y la apicultura, además del ecoturismo comunitario. El ex ministro de Desarrollo Productivo del primer gobierno del MAS decía en un artículo pocos meses antes de su fallecimiento: “¿Tendremos que esperar las consecuencias (del monocultivo de la hoja de coca) en una o dos décadas, cuando la fecunda tierra yungueña ya sea un completo erial erosionado, para que nuestros pueblos recién reaccionen y den marcha atrás?... Solo nos queda el suicidio colectivo o la rebelión de nuestras conciencias” (Hurtado 2012).

Si en el futuro el precio de la hoja de coca se desplomara (lo cual no es previsible) los yungueños necesitarían de mucho esfuerzo para reconvertir su actividad extractiva (coca, minería) hacia una agricultura familiar más diversificada, rentable y sostenible, orientada al mercado y complementaria con la coca. Necesitarían muchos años y mucho empeño y apoyo estatal (EMAPA, FONADAL, MDRT), para la rehabilitación de suelos y fuentes de agua. Con el tiempo podrían llegar a producir una gama más variada de alimentos como ocurría hasta principios de los años ochenta del siglo pasado. Sus tierras –aunque son muy escarpadas y no admiten ninguna mecanización y en muchos casos han sufrido grave deterioro como consecuencia de largos años de monocultivo– tienen un buen régimen de lluvias.

Debe quedar claro, sin embargo, que los Yungas –dadas las especiales condiciones topográficas de sus empinadas laderas, el intenso régimen de lluvias combinado con la elevada humedad durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, junto con la fuerte exposición solar el resto del año– no podrá ser una región que se autoabastezca de alimentos, ni contribuya sustantivamente a la seguridad alimentaria nacional.

Conclusiones

Los yungueños de Yanacachi prefieren comprar sus alimentos en lugar de producirlos porque en este contexto de altos precios de la coca, de los minerales y de las flores, no es rentable destinar el trabajo y la tierra a producir alimentos sino mercancías para ser vendidas íntegramente al mercado. Los minerales-mercancías, la coca-mercancía y las flores-mercancías, son transadas en el mercado nacional e internacional (globalizado) produciendo ingresos, rentas y beneficios estables a los productores y comerciantes. Con esas ventas generan ingresos que cubren sus requerimientos alimenticios, además de otras necesidades.

Este sería el típico caso en que la seguridad alimentaria familiar y local es obtenida sin autoabastecimiento. Igual que cualquier ciudadano o poblador urbano, los yungueños se aseguran los alimentos que necesitan consumir a partir de sus ingresos monetarios, pero dependen totalmente del mercado y de otras fuentes de aprovisionamiento para su consumo. Los cocaleros ya no usan su tierra para producir alimentos –antes lo hacían solo parcialmente– pero sí para producir casi exclusivamente coca, que es altamente valorada en el mercado y que les genera ingresos suficientes para comprar casi toda su canasta alimenticia de las ciudades o pueblos. Con esos alimentos comprados logran consumir suficientes alimentos, pero no necesariamente los más nutritivos.

Las tierras que los cocaleros y floricultores destinan a la producción de coca no ayudan a la seguridad alimentaria nacional y menos a la soberanía alimentaria del país, pero sí resuelven sus necesidades alimenticias y aspiraciones económicas, sociales y políticas en el corto plazo. Sin embargo, su futuro es incierto.

Pero no solo los cocaleros compran cada vez más alimentos que provienen de la agroindustria. La mayoría de los campesinos e indígenas de Bolivia está homogenizando su dieta en base a productos que ellos no producen, gran parte de los cuales provienen del departamento de Santa Cruz. La agroindustria vinculada al agronegocio de commodities destina un margen de sus actividades para abastecer el mercado interno y cubre la mayoría de la demanda de consumo de alimentos de la población boliviana –urbana y rural–. Al mismo tiempo las grandes empresas pueden destinar las mejores tierras agrícolas del oriente –expansión de la frontera agrícola– para producir materias primas agrícolas de exportación. En este sentido y analizando la dieta de consumo de alimentos de la población rural, nos guste o no a quienes apoyamos la agricultura familiar desde hace décadas, la seguridad alimentaria de los bolivianos estaría cada vez menos en manos de los campesinos y dependería progresivamente de la agroindustria conectada al capital transnacional.

Esta tendencia no ha cambiado en la última década (2004–2014); al contrario, a pesar de políticas públicas proactivas para favorecer la agricultura familiar diversificada y sostenible, muchos campesinos están progresivamente especializándose en cultivos de mayor rentabilidad a la par que sigue acentuándose el consumo rural de productos alimenticios de origen agroindustrial. Si esto es así, si una parte cada vez más importante de la dieta de la mayoría de los campesinos del país –ya sean monoprodutores o diversificados– es ahora satisfecha mediante la compra de alimentos procesados, la diferencia cualitativa del aporte alimenticio de la agricultura familiar a la *seguridad con soberanía alimentaria* estaría centrada básicamente en la calidad *orgánica* de su oferta alimenticia y su forma *natural* de producción. Los campesinos estarían cada vez más condicionados por un contexto global a producir comida *gourmet* para las poblaciones urbanas acomodadas o ricas y la agroindustria estaría capturando vastos mercados –internos y externos, urbanos y rurales– a los cuales proveer grandes cantidades de materias primas agrícolas y alimentos procesados.

Esta última reflexión tiene que ver con la acelerada mercantilización del área rural boliviana ocurrida en las últimas décadas. En nuestra opinión –en general, en el país– cada vez persisten menos las prácticas ancestrales de diversificación de productos de cultivos alimenticios para satisfacer las necesidades del consumo familiar y local, salvo en las comunidades más aisladas y pobres. Pareciera redundante insistir que la tendencia generalizada ahora en el área rural de Bolivia es producir cada vez más mercancías, pero visto desde una perspectiva histórica, no lo es. A nuestro juicio este es un nuevo rasgo que caracteriza la agricultura familiar campesina de Bolivia a inicios del siglo XXI.

Referencias

- CEEDI - LIDEMA. (1990). *Evaluación ecológica del cultivo de la coca en los Yungas de La Paz (mimeo)*. La Paz, Bolivia: Centro de Estudios Ecológicos y Desarrollo Integral.
- Di Cosimo, P. (2003). Las arterias de los Yungas bolivianos: un estudio arqueológico atropológico del valle del Taquesi. *Atti del XXV Congresso Internazionale d'Americanistica*. Perugia, Italia.
- FONADAL. (2011). *Del Desarrollo Alternativo al Desarrollo Integral 2005-2001*. La Paz, Bolivia: Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo.
- FONADAL. (2012). *Manual Técnico para la crianza de Cuyes en el Municipio de Yanacachi*. Yanacachi, Bolivia: Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo.
- Hurtado, J. (2012). Los yungas: una economía de suicidio colectivo. *Nueva Crónica y Buen Gobierno* N° 110, 17.
- Laserna, R. (2006). Coca y mercado en la economía campesina Yungas y Chapare en Bolivia. En F. Eguren, *Reforma Agraria y Desarrollo Rural en la Región Andina* (págs. 199-227). Lima, Perú: CEPES.

- Mamani López, C. (1996). *Opciones para la producción cafetalera en los Yungas de La Paz, Bolivia*. La Paz, Bolivia: Programa NINA.
- Murra, J. (2002). *El Mundo Andino*. Lima, Perú: Instituto de Estudios Peruanos - IEP.
- Roberts, J. (2010). *Bolivia's Coca headache: The agroyungas program, inflation, campesinos, coca and capitalism in Bolivia*. Obtenido de University of Massachusetts: <http://scholarworks.umass.edu/theses> 501
- Sanabria, H. (1993). *The Coca boom and rural social change in Bolivia*. Michigan, USA: University of Michigan Press.
- Spedding, A. (1994). *Wachu Wachu. Cultivo de coca e identidad en los Yungas de La Paz*. La Paz, Bolivia: HISBOL - CIPCA; COCAYAPU.
- Spedding, A. (2004). *Kawsachun Coca, Economía campesina cocalera en los Yungas y el Chapare*. La Paz, Bolivia: PIEB.
- UMSA - IETA. (2012). *Encuesta Socio-Demográfica Yungas – Estadística por Municipio*. La Paz, Bolivia.
- Urioste, M. (2013). La dependencia campesina del mercado urbano de alimentos: Yanacachi, monocultivo de coca y extracción de oro. En *Informe 2012 ¿Comer de nuestra tierra? Estudios de caso sobre tierra y producción de alimentos en Bolivia* (págs. 133-192). La Paz: Fundación TIERRA.
- Wiesmann, D., Basset, L., Benson, T., y Hoddinot, J. (2009). *Validation of the World Food Programme's Food Consumption Score and Alternative Indicators of Household Food Security*. Washington: IPFRI.

Dependencia y autoabastecimiento alimentario en la TCO Guaraní de Macharetí

Jose Luis Eyzaguirre Rodríguez¹

No obstante el avance sustancial en el reconocimiento de los indígenas y sus territorios en las últimas décadas, el espacio territorial ha sido insuficiente en cantidad y calidad para cambiar las dinámicas económicas de dependencia alimentaria y la venta de fuerza de trabajo en la obtención fuentes de ingreso de los guaraní de Macharetí.

En lo social se ha logrado exitosamente reconstituir el territorio guaraní de Macharetí, situación que no ha tenido su correlato en el componente físico-espacial. El proceso de saneamiento pudo verificar que el territorio guaraní no solo está conformado por indígenas, sino fundamentalmente por ganaderos y empresas petroleras, con sus propias concepciones, enfoques de desarrollo y gestión de los recursos naturales. Al final del proceso –pese a los recortes– las haciendas ganaderas no indígenas consolidaron su derecho propietario estableciendo altos niveles de concentración de tierras en propiedades individuales.

Aunque no se tienen datos de la situación alimentaria precedente al proceso de reconstitución territorial –que pudo ser más crítica que en el presente– en la actualidad no existen episodios de hambre, no obstante persisten importantes niveles de inseguridad alimentaria, 44% de la población guaraní de la TCO Macharetí tienen deficiencias en la diversidad y frecuencia en el consumo de alimentos para alcanzar los estándares mínimos nutricionales, siendo la carestía más notoria los lácteos, leguminosas y carnes.

Palabras clave: seguridad alimentaria, indígenas guaraní, territorio, Gini, TCO

Introducción

Los pueblos indígenas de tierras bajas se hacen perceptibles con la primera marcha por el “Territorio y la dignidad” en agosto de 1990; a partir de ese momento la sociedad boliviana empieza a conocer y diferenciar a este sector con sus es-

¹ Economista con especialidad en Ecología y Conservación de la Universidad Mayor de San Andrés, trabajó como investigador en economía campesina indígena en el CIPCA y en el Programa de Gestión Territorial Indígena del CIDOB, actualmente es investigador en TIERRA (j.eyzaguirre@ftierra.org).

pecificidades. Como producto de esta marcha se declaran los primeros territorios indígenas². Este evento, la problemática ambiental³ y otros factores en el contexto internacional, establecen un escenario favorable al reconocimiento social y la visibilidad nacional de los indígenas de tierras bajas de Bolivia.

La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas en 1993 es un acontecimiento que influye en la cooperación internacional –sobre todo la europea– que canaliza programas y proyectos destinados a fortalecer el movimiento indígena, razón por la cual esta coyuntura genera oportunidades para las organizaciones indígenas que aumentan su capacidad de incidencia y negociación de sus demandas (Balza 2001).

Este es un punto de inflexión que permitió avanzar en el reconocimiento de los pueblos indígenas de tierras bajas ya no simplemente como una singularidad cultural o folclórica del oriente boliviano, sino más bien impulsó una reestructuración de sus organizaciones para perfilar una mayor presencia política y sobre todo la reivindicación territorial. También se establecieron los argumentos que viabilizaron el reconocimiento de la condición multiétnica y pluricultural de Bolivia en la reforma de la Constitución Política del Estado el año 1994. El hecho más trascendente de este proceso –como política de tierras– fue la incorporación de la modalidad de propiedad agraria colectiva a favor de los pueblos indígenas denominada Tierra Comunitaria de Origen⁴ (TCO) establecida en la ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de 1996. Una forma complementaria de entender esta reivindicación es que la TCO es una aplicación tardía de la Reforma Agraria de 1953⁵, ya que jurídicamente posibilita el acceso a la propiedad de la tierra –a nivel comunal y familiar– a indígenas del oriente que en 40 años no pudieron titular las tierras que ocupaban (Molina 2012). Hasta el año 2013 se habrían titulado alrededor de 23 millones de hectáreas para las TCO, de las cuales aproximadamente 13 millones corresponderían a tierras bajas (Viceministerio de Tierras 2014).

Como ya se ha mencionado, los indígenas de tierras bajas de Bolivia se hacen visibles desde la década de 1990, no obstante, siempre estuvieron presentes en determinados espacios geográficos con sus formas productivas caracterizadas por

2 El gobierno de Paz Zamora (1989-1993) reconoció territorios indígenas en el Beni para los pueblos indígenas Chimán, Mojeño, Yuracaré y Movima (DS. 22611) y Sirionó (DS. 22609). Poco después, otros cinco territorios serían reconocidos a los indígenas en la misma área.

3 En 1990 en Bolivia se declara la "pausa ecológica histórica" luego de irregularidades en la administración forestal y la ineficiencia en la extracción maderera, pretendía corregir la inadecuada implementación de ley forestal de 1974 (Urioste y Pacheco 2001).

4 Según la ley 1715 las Tierras Comunitarias de Origen son los espacios geográficos que constituyen el hábitat de las comunidades indígenas y originarias, a los cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de organización económica, social y cultural, de modo que aseguran su sobrevivencia y desarrollo (Hernaiz y Pacheco 2001).

5 La reforma agraria estuvo enfocada en los campesinos de la zona andina. Las únicas referencias a los indígenas de las tierras bajas de Bolivia, descritos como "grupos selvícolas de los llanos tropicales y subtropicales que se encuentran en estado salvaje y tienen una organización primitiva", estaban destinadas a ponerlos bajo protección del Estado (Art. 129 de la LRA), a proveer su "incorporación... a la vida nacional", así como "convertirlos en agricultores independientes" (Arts. 130 y 131) (Aylwin 2002).

el uso colectivo de los recursos, aunque no siempre con la plena libertad de uso de los espacios en los que habitaban, en otros casos fueron asimilados simplemente como campesinos (Guzmán 2008).

En este sentido, el concepto de tierra como medio físico de producción evoluciona hacia el concepto de territorio: primero, en lo espacial –más allá de la visión tradicional del uso agropecuario– se incorpora el acceso y goce de recursos naturales de uso común y no intensivo como la recolección, caza y pesca y otros bienes que proporciona el bosque. Segundo, el concepto de territorio también trae consigo una dimensión intangible, en lo jurídico no solo se trata de una propiedad o posesión sino más bien como menciona (Mazurek 2006) un complejo proceso de construcción social, que involucra el orden político, económico, social y cultural cuyo fin último es la autodeterminación.

En el presente documento se pretende indagar cómo las transformaciones agrarias han repercutido en el vivir bien de los indígenas de las TCO del oriente, particularmente en la satisfacción de necesidades básicas alimentarias. Para ello se ha elegido la TCO Macharetí en el chaco chuquisaqueño, organización que ha sido una de las primeras en iniciar el proceso de saneamiento el año 1999 y su primera titulación data de hace 14 años, además de lograr notables avances en la reconstitución de su territorio. En consecuencia las interrogantes que han guiado la investigación son:

- ¿La articulación de las familias guaraníes en torno a la demanda territorial de la capitanía zonal de Macharetí, ha permitido mejorar sus condiciones de vida, su seguridad alimentaria?
- ¿Cuáles son los recursos y las capacidades de las familias guaraníes de Macharetí para obtener alimentos a través de la producción, compra, donación, recolección, caza y pesca?
- ¿Cuáles son los factores externos de dependencia y vulnerabilidad que afectan el suministro de los alimentos que consumen las familias guaraníes de Macharetí?

El ensayo se divide en cuatro secciones, en la primera se presenta el proceso metodológico, en la segunda los resultados de la investigación en dos partes, por una lado se analiza el acceso físico al territorio a partir de datos del saneamiento en el espacio demandado y por otro se presentan resultados de los indicadores de seguridad alimentaria obtenidos a partir de información primaria. En la tercera sección se discuten los resultados a la luz de las preguntas de investigación. Se cierra el documento con una breve sección de conclusiones.

Metodología

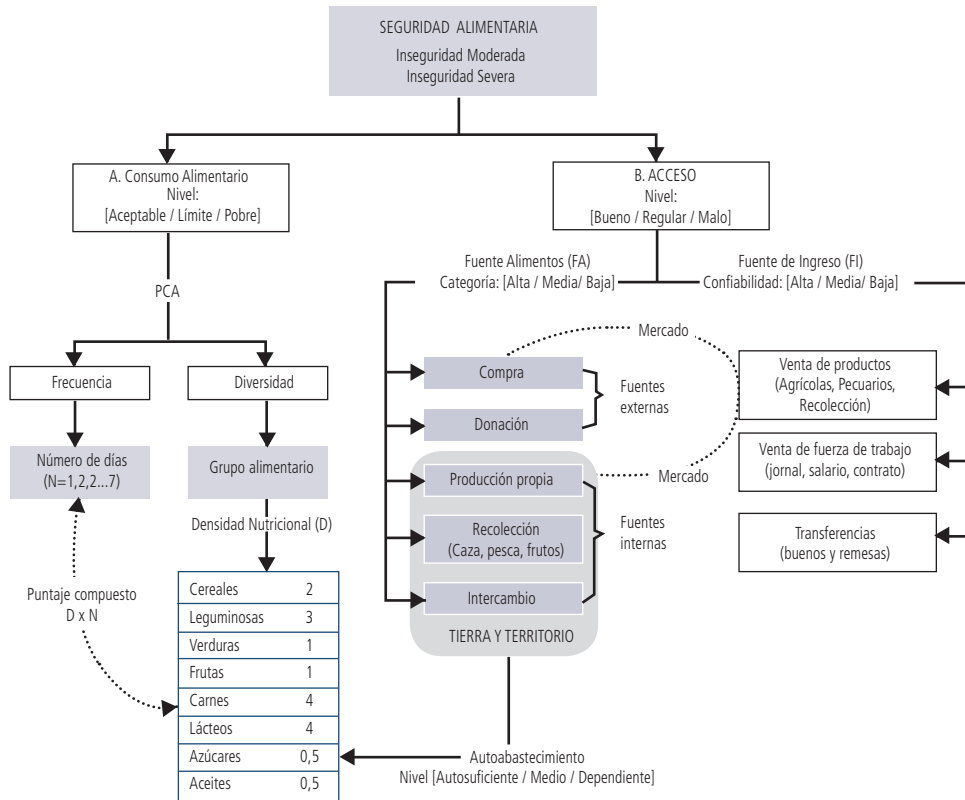
El concepto de seguridad alimentaria es muy dinámico, desde su aparición en 1974 ha ido evolucionando constantemente reflejo de la discusión sobre las teorías explicativas del hambre y en los enfoques políticos para encontrar soluciones a esta problemática. En principio es la definición antónima de la vulnerabilidad y trata de integrar múltiples factores relativos a la salud (nutrición), el control de los recursos y la relatividad en el tiempo (Pérez de Armiño 2014).

En una primera etapa la seguridad alimentaria estuvo enfocada en el contexto macro, la seguridad alimentaria nacional (SAN) entendida como la *disponibilidad* de suministros alimentarios suficientes para satisfacer las necesidades de consumo per cápita de un país. Desde la década de 1980 los debates se reorientaron hacia el nivel micro, la nueva formulación se concentró en la seguridad alimentaria familiar (SAF), es decir en el *acceso* a los alimentos –la disponibilidad y además la posibilidad de adquirirlos– por parte de las familias más pobres, a lo que contribuyó decisivamente la teoría de las titularidades de Amartya Sen⁶. Para los años 1990 el enfoque de la SAF va más allá de la consideración cuantitativa del acceso y consumo de alimentos, se trata de particularizar a los pobres en las mujeres, en los niños y en quienes viven en áreas marginales, además de las dimensiones cualitativas como que las personas perciban la alimentación como culturalmente adecuada y suficiente. La integración de nuevos elementos y la mayor sofisticación del concepto de seguridad alimentaria familiar lo hacen cada vez más ecléctico pero a la vez más complejo para medirlo. La pluralidad de elementos dificulta tener una definición única (Pérez de Armiño 2014).

En consideración a estas conceptualizaciones y partiendo de metodologías del Programa Mundial de Alimentos para la medición de la seguridad alimentaria (PMA 2009), se establecieron los niveles de (in) seguridad alimentaria a partir de la construcción de dos indicadores: a) consumo alimentario y b) acceso. En el Gráfico 1 se muestra el proceso metodológico para la construcción de estas dos macro variables.

6 Amartya Sen analiza las hambrunas de Bengala en 1943 y de Etiopía en 1974 comprobando que estas no se debieron a la falta de alimentos, ya que en ambos casos se exportaba alimentos desde las zonas afectadas hacia zonas limítrofes o a la capital. Por consiguiente, constató que las causas de las hambrunas radican en la incapacidad de las familias pobres para acceder a los alimentos, a lo que denominó las "titularidades" (Pérez de Armiño 2014).

Gráfico 1
Proceso metodológico para el establecimiento de la seguridad alimentaria



Fuente: elaboración propia.

Consumo alimentario [A]

Por una parte, el nivel de consumo alimentario se estableció a partir de la ingesta energética, midiendo diversidad y frecuencia de su consumo por grupo de alimentos. El indicador utilizado fue el Puntaje de Consumo Alimentario (PCA), el cual refleja la cantidad y/o calidad de la dieta de las personas, el valor energético y el contenido de macro y micronutrientes de los alimentos que consumen las familias (PMA 2009).

El PCA se basa en el cantidad de grupos de alimentos que consume una familia en un lapso de siete días, es decir se establece el número días que se consumió determinado alimento en ese periodo y se multiplica por un factor que refleja la “densidad de nutrientes” conforme al grupo alimentario al que pertenece.

La “densidad de nutrientes” es un término usado para describir subjetivamente la calidad de un grupo de alimentos en términos de densidad de calorías, el contenido macro y micronutrientes y la cantidad que normalmente se come. Esta ponderación otorga mayor importancia a los alimentos con energía relativamente alta, a la proteína de buena calidad, y a una amplia gama de micronutrientes que pueden ser absorbidos fácilmente como la carne y el pescado, a los cuales se les asigna un peso específico de 4, en contraste, se otorga menor importancia a los alimentos como el azúcar al que se le asigna un valor de 0.5 que intenta reflejar la ausencia de otros nutrientes además de carbohidratos y el hecho que usualmente se come porciones relativamente pequeñas. El *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) validó el uso de esta metodología en base a una investigación llevada a cabo en tres países: Burundi, Haití y Sri Lanka (Wiesmann y otros 2009).

En esta consideración el puntaje compuesto máximo (densidad x número de días) que una familia puede alcanzar es de 112, ello significaría que en ese hogar se consumió algún alimento de cada uno de los grupos alimentarios todos los días durante los últimos 7 días, lo que implicaría haber alcanzado las cantidades y variedad con los estándares mínimos de densidad nutricional. Para determinar el nivel de consumo alimentario de un hogar (PCA) se compara con puntos de corte preestablecidos que indican el estado del consumo alimentario del hogar, como se clasifica en el siguiente Cuadro:

Cuadro 1
Puntos de corte del PCA por niveles de ingesta energética

Nivel de consumo de alimentos	PCA	Ingesta energética [Kcal/cápita/día]	Características
Pobre	≤28	≤1600	Cantidad y calidad inadecuada
Al límite	Entre 28 y 42	Entre 1600 y 1900	Cantidad adecuada y calidad inadecuada
Aceptable	>42	>1900	Dieta, variedad con los estándares mínimos de cantidad y calidad

Fuente: PMA 2009.

Acceso alimentario [B]

El *acceso* es entendido como la capacidad de un hogar para adquirir cantidades suficientes de alimentos mediante una combinación de medios, sea producción (*disponibilidad*), compras, intercambio, asistencia alimentaria, etc. Puede que los alimentos estén disponibles, más no accesibles a ciertos hogares si éstos no pueden adquirir una cantidad o variedad suficiente de alimentos a través de estos mecanismos (PMA 2009).

Para el acceso alimentario se ha construido un indicador compuesto que resulta de la combinación de –otros– dos indicadores. Primero, la confiabilidad de las fuentes de ingresos monetarios (FI) que ordena las actividades económicas en tres categorías –de acuerdo a su confiabilidad–: alta, media y baja. Por ejemplo, el salario de empleado de algún miembro de la familia, por su regularidad puede permitir la obtención de alimentos de forma predecible a lo largo del año, mientras que el jornaleo en el contexto rural, por su informalidad y/o eventualidad representa una baja confiabilidad al momento de la obtención del dinero para cubrir estas necesidades básicas.

Segundo, las fuentes de suministro de alimentos (FA): la producción propia, recolección (caza, pesca, frutos), compra, intercambio y donación, se califican en tres categorías: alta, media y baja. Esta calificación obedece al contexto productivo en el que se ubican las familias. En el caso de las unidades familiares indígenas: por ejemplo el azúcar es un alimento que no se puede producir, si se lo consigue mediante la compra es una buena FA. Por el contrario, alimentos locales como el maíz, frejol, pollo, que son susceptibles de producción por el hogar, tienen una clasificación “baja” si fueron comprados pudiendo ser producidos y “alta” si es que se obtuvieron por esta fuente. Una clasificación de media corresponde a los alimentos obtenidos vía intercambio (trueque), entendiendo que en la transacción ha mediado la producción propia. La donación es una fuente de suministro calificada como baja para cualquier alimento.

Esta clasificación también permite establecer la proporción del consumo de alimentos que provienen de fuentes internas y fuentes externas. En las realidades rurales –indígenas y campesinas– fuentes internas son las que provienen por el uso de la tierra y el territorio: producción agrícola, crianza de animales, caza de animales silvestres, la pesca y recolección de frutos y otros bienes libres del monte. Mientras mayor proporción de los alimentos provengan de estas fuentes habrá mayor tasa de autoabastecimiento o autosuficiencia.

En contraste, se entiende que las fuentes externas aquellas que se obtienen a través de la compra o la donación mientras más grande esta proporción en el consumo de las mayor dependencia alimentaria (Gráfico 1).

Levantamiento de información

Para el análisis de la seguridad alimentaria de acuerdo con el proceso metodológico planteado, se ha realizado el muestreo de tres comunidades representativas de la TCO Machareti: Isipotindi, Tentami y Carandaytico, en las cuales se ha levantado una encuesta tipo a 39 familias. Las preguntas se enfocaron en la frecuencia en el consumo y fuentes de suministro de los 21 alimentos más importantes y

recurrentes en la dieta de las familias guaraní de Macharetí, en la época de la encuesta (julio).

La priorización y selección de estos alimentos se realizó consultando a los técnicos y dirigentes locales además de información secundaria de diagnósticos la zona. Complementariamente se ha preguntado precios en caso de compra, mercados de abastecimiento. Asimismo se han establecido las fuentes de ingreso monetario, el destino de los gastos y su importancia relativa.

Resultados

Autosuficiencia alimentaria y productiva

La autosuficiencia alimentaria se entiende como el grado en que un hogar puede satisfacer sus necesidades alimenticias con su propia producción. A partir de esta definición se ha buscado medir la contribución de la producción familiar al abastecimiento del consumo alimentario familiar en los hogares indígenas de Macharetí. El análisis solo de la autosuficiencia alimentaria puede resultar extemporáneo con la evolución del concepto de seguridad alimentaria y puede encasillar a las familias rurales o indígenas en un rol falso o inadecuado en tiempos actuales.

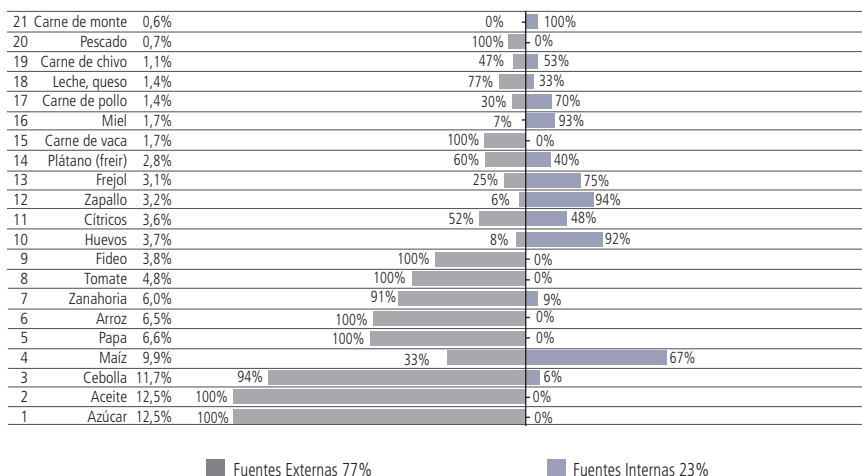
No obstante, una primera abstracción a esta variable es imprescindible particularmente para los guaraníes de la TCO Macharetí que han tenido una dependencia laboral de los “patrones” viviendo en condiciones subordinadas –como mozos y peones– sin posibilidades de controlar su autoabastecimiento alimentario por la falta de tierras propias. Por ende, los procesos de reivindicación territorial y reconstitución de comunidades y poblaciones deberían mostrar una reversión de esta situación o por lo menos disminuirla a partir del logro de mayores libertades productivas y disponibilidad de espacios territoriales.

Si bien los guaraníes como otros pueblos indígenas tienen una relación importante con el monte (*kaa*) para actividades de recolección de alimentos como la caza, pesca, meleo, etc., fundamentalmente son reconocidos por ser una cultura del maíz. “Alrededor del maíz gira su vida social y del maíz deriva incluso su prestigio y poder político, sin maíz el guaraní está como desnaturalizado” (Melia 1988). El cultivo del maíz constituye la base fundamental de la alimentación, determina el ciclo agrícola, las relaciones sociales y el calendario de fiestas. En este sentido, la reconstitución del territorio debería permitir potenciar la producción agrícola tradicional guaraní, además de alimentos provenientes de la pecuaria y la recolección del monte.

Nivel de autosuficiencia

El Gráfico 2 muestra de manera panorámica la proporción de los alimentos consumidos en 7 días por las familias guaraní, por una parte, se puede apreciar de abajo hacia arriba la frecuencia de consumo (los más consumidos abajo) y por otra parte, las fuentes de suministro. A la derecha del eje vertical se ubican los alimentos que se obtuvieron por fuentes internas es decir a partir del uso del territorio (producción propia, caza e intercambio), mientras que a la izquierda se muestra la proporción de alimentos que provienen de fuentes externas al sistema productivo indígena: (compra y donación).

Gráfico 2
Nivel de abastecimiento alimentario por fuentes de suministro y frecuencia de consumo de alimentos



Fuente: elaboración propia en base a la encuesta familiar 2013.

Como se visualiza del conjunto de alimentos consumidos por la familia guaraní el 77% provienen de fuentes externas (izquierda del gráfico), fundamentalmente a través de la compra (76%) y una pequeña parte por donación (1%). En contraste las fuentes internas que muestran la capacidad productiva para el autoabastecimiento es apenas del 23%, es decir, la producción propia de cultivos y crianza de animales (22%), la caza de animales silvestres y el intercambio (1%).

Los alimentos más consumidos por su frecuencia son el azúcar y el aceite, están presentes en la dieta los 7 días de la semana, el suministro es únicamente vía compra. Esta proporción va disminuyendo en alimentos como la cebolla que

se consume 6 días a la semana, gran parte debe ser comprada, aunque en este caso una pequeña parte proviene de la producción propia.

En cuanto al maíz, alimento clave en la dieta guaraní, se consume en promedio 5 días a la semana, si bien es producido frecuentemente por el guaraní, en el caso de Macharetí solo un 65% proviene de esta fuente, mientras que el 35% debe ser comprado. Otro alimento clave en el consumo que proviene de la propia producción es el huevo, el 90% es suministrado por la propia crianza de aves de corral y solo el 10% es comprado.

En cuanto a alimentos provenientes de la recolección –carne de monte, pescado, miel, etc.– la proporción en el consumo semanal es mínima, solo el 2,5% del total consumido, esto equivale a decir que muy pocas familias han reportado su consumo en la semana, por lo menos en la época de la encuesta.

Alimentos nuevos y estimulantes

Para complementar el ejercicio sobre los hábitos alimentarios se han incluido en el análisis 6 productos que amplían la perspectiva general del consumo de las familias guaraníes. Por un lado, los estimulantes como la hoja de coca, cuyo consumo es indispensable en las faenas de trabajo para los varones adultos, el 75% de los encuestados reportan su consumo con frecuencia diaria. Por otro, la yerba mate que es consumida por las mujeres –aunque no exclusivamente–, el 100% de las familias reporta su consumo en promedio durante 6 días a la semana. Si bien estos productos no son esenciales por su “valor nutricional” son importantes social y culturalmente, además representan un importante gasto dentro la canasta familiar, con esta consideración el universo de productos comprados se incrementa y baja el nivel de autosuficiencia.

En este mismo sentido se han incluido otros productos procesados que con mayor frecuencia suelen estar en los hábitos de consumo, sobre todo de niños y población joven, como gaseosas, bebidas lácteas (pilfrut, yogurt en bolsitas), galletas, y el pollo frito comprado. Si bien se puede inferir que la tendencia en el consumo se va incrementado, en general solo el 40% de las familias consume en la semana alguno de estos productos, con mayor costumbre las galletas durante 4 días a la semana, pilfrut –bebidas en bolsitas– 3 días por semana, y el pollo frito al menos 2 días por semana. Como en el caso anterior, la compra de estos productos disminuye la tasa de autoabastecimiento ya que estos productos son de origen externo y necesariamente deben ser comprados.

En general, considerando en el consumo tanto los alimentos tradicionales, como estimulantes y “nuevos”, la tasa de autoabastecimiento suministrada por las fuentes internas (uso del territorio) es apenas del 18%, mientras que el porcentaje

de alimentos que son suministrados mediante fuentes externas –fundamentalmente compra– es de 82 %. Es decir que por cada uno de los alimentos que son obtenidos por el uso de territorio (fuentes internas) cuatro son adquiridos por compra. Si conglomeramos las frecuencias de consumos por grupo alimentario, observamos que los alimentos básicos (cereales y tubérculos) y verduras son los que más están presentes en la dieta 21%, y 20% respectivamente, le siguen en importancia los estimulantes (yerba mate y coca) el 17%. Los grupos alimentarios con menor proporción de consumo son las leguminosas solo el 2% y los lácteos que apenas alcanzan el 1%.

Estratos de autosuficiencia

Categorizando a las familias guaraníes de Macharetí entrevistadas en tres estratos de acuerdo a su tasa de autoabastecimiento: dependientes, medios y autosuficientes, se establece que un 82% de las familias son “dependientes” en su consumo alimentario, debido a que más del 70% de los productos que consumen los deben obtener de fuentes externas (compra, donación). Un 15% de las familias tiene una tasa de autoabastecimiento media, alrededor del 50% de sus alimentos los obtienen de su propia y producción y el otro 50% deben ser comprados. Finalmente solo el 2,56% puede considerarse autosuficiente ya que alrededor del 70% de los alimentos que consume son abastecidos por su propia producción.

Destino de los gastos

De acuerdo a la información recogida de las unidades familiares guaraníes sobre gastos, la mayor parte se asignan al hogar el 94% y solo 6% a las actividades productivas como insumos para la agricultura y ganadería: semillas, vacunas, etc. (Cuadro 2). Esta proporción de gastos puede indicar el estado de los sistemas de producción familiar.

Dentro los gastos para cubrir necesidades básicas del hogar, la principal proporción se destina al rubro de alimentación, en promedio un 41% del total, le sigue en importancia el rubro de educación con el 19%, en este se incluyen además de materiales escolares los costos de mantención de alumnos que salen a otros centros que brindan educación secundaria. Otros rubros que cobran importancia son los erogados en servicios, fundamentalmente el pago de energía eléctrica y telefonía móvil (Cuadro 2).

Cuadro 2
Distribución de los principales gastos de las familias en la TCO Machareti

Tipo	Origen	Isipotindi	Tentami	Caranday-ticito	Machareti General
Gastos del hogar (94%)	Alimentos	38%	39%	48%	41%
	Educación	21%	19%	17%	19%
	Vestimenta	12%	12%	15%	13%
	Salud	11%	15%	10%	12%
	Servicios	4%	6%	2%	4%
	Transportes	6%	2%	3%	4%
Gastos productivos (6%)	Insumos agricultura	5%	6%	0%	4%
	Insumos ganadería	2%	0%	5%	2%
Total		100%	100%	100%	100%

Fuente: elaboración propia en base a la encuesta familiar 2013.

El gasto mensual promedio en alimentos es de Bs.746.26, los gastos en mayor proporción se destinan a la compra de cereales y tubérculos (alimentos básicos) que corresponden a un 25% del monto total. Le siguen en importancia las carnes con 18%, no obstante es una importante proporción del gasto no implica necesariamente mayor proporción en la frecuencia de consumo que solo alcanza al 8%. Se puede apreciar que los estimulantes, fundamentalmente la hoja de coca, yerba mate, tienen un gasto mensual importante 14%, y tienen su correlato en el consumo que alcanza al 17%. Los gastos en lácteos solo representan el 3% y apenas alcanzan el 1% en la frecuencia de consumo (Cuadro 3).

Cuadro 3
Gastos mensuales promedio en alimentos

Grupo de Alimentos	Gasto Bs/mes	Importancia relativa del gasto	Frecuencia de consumo
Alimentos Básicos	186,39	25%	21%
Carnes	135,09	18%	8%
Estimulantes	105,19	14%	17%
Verduras	75,20	10%	20%
Azúcares	72,00	10%	11%
Otros	57,87	8%	6%
Aceite/grasas	54,80	7%	10%
Frutas	26,83	4%	5%
Lácteos	26,06	3%	1%
Leguminosas	6,83	1%	2%
Total General	746,26	100%	100%

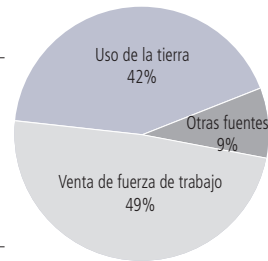
Fuente: elaboración propia en base a la encuesta familiar 2013.

Origen de los ingresos

Una variable importante que determina el acceso es la generación de ingresos monetarios, si bien en las familias guaraníes de la TCO Macharetí se identifican diversas actividades económicas –agrupadas en tres grandes fuentes– se distingue que la venta de fuerza de trabajo es la principal fuente, 49% del total, mientras que los ingresos por la venta de productos que devienen del uso de la tierra y territorio representan el 42%; finalmente, un 9% proviene de otras fuentes como bonos, remesas, y comercio minorista (tiendas locales). En el Cuadro 4 se aprecia con mayor detalle todas las fuentes generadoras de ingreso y su aporte relativo en las tres comunidades estudiadas.

Cuadro 4
Fuentes generadoras de ingresos monetarios para familias guaraníes

Origen	Fuentes	Isipotindi	Tentami	Caranday-títico	Macharetí General
Venta de fuerza de trabajo (49%)	Jornaleo	45%	29%	62%	44%
	Salario mensual	7%	6%	0%	5%
Uso de la tierra y del territorio (42%)	Venta de productos ganaderos	11%	26%	19%	18%
	Venta de productos agrícolas	10%	27%	10%	16%
	Venta de miel y derivados	8%	3%	0%	4%
	Venta de artesanías	5%	5%	1%	4%
Otras fuentes (9%)	Comercio minorista	9%	4%	0%	5%
	Bonos y remesas	5%	1%	8%	4%
Total		100%	100%	100%	100%



Fuente: elaboración propia en base a la encuesta familiar 2013.

En la categoría “venta de fuerza de trabajo”, predomina el jornaleo eventual, actividad que se desarrolla en los centros poblados y haciendas de la región representando un 44% de los ingresos; una pequeña proporción (5%) proviene de trabajo por contrato (sueldos de educadores, dirigentes, empresas petroleras). La generación de ingresos a partir del uso de la tierra y territorio es apenas un 18% y proviene de la venta de productos pecuarios (chanchos, gallinas, huevos) y una similar proporción (16%) de la venta de productos agrícolas, principalmente maíz, frejol y zapallo.

Nivel de Consumo Alimentario

El nivel consumo alimentario en la TCO Macharetí medido a través del índice PCA, establece que el 69% de las familias tiene un nivel aceptable, tiene una dieta variada tanto en cantidad como en calidad –densidad de nutrientes–; el 21% tiene un consumo al límite, probablemente en cantidad pero no en calidad nutricional;

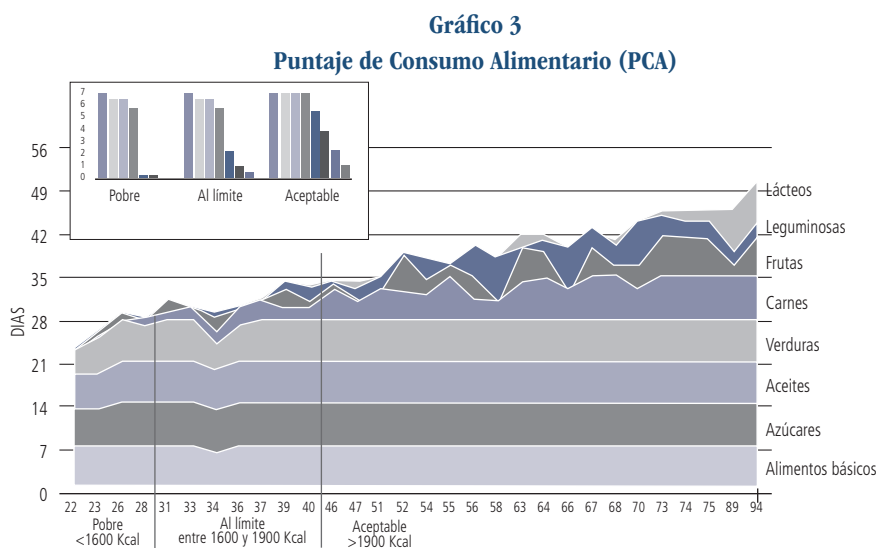
y un 10% tiene un consumo pobre que no alcanza ni en cantidad ni en calidad al mínimo necesario la ingesta de alimentos.

En el Gráfico 5 se muestra un panorama de la frecuencia y diversidad alimentaria consumida de acuerdo a los 8 grupos de alimentos estableciendo los puntos de corte correspondientes en los umbrales establecidos por el PMA. Se puede evidenciar que las familias que tienen un consumo pobre han cubierto con su dieta solo 4 de 8 grupos alimentarios: alimentos básicos (cereales y tubérculos), aceites, azúcares y en menor frecuencia verduras. En estas familias tienen una ingesta energética menor a 1600 Kcal/cápita/día.

Las familias que se encuentran en el corte “al límite” cubren adicionalmente –en menor frecuencia– los grupos de carnes, frutas y leguminosas que tiene un mayor aporte nutricional. De acuerdo a la ingesta energética los miembros de estas familias tendrían un perfil nutricional entre las 1.600 y 1.900 Kcal/cápita/día.

De acuerdo con estudios del PMA y la FAO⁷, las personas que se encuentran por debajo de las 1.960 Kcal/cápita/día demuestran niveles de subnutrición, pudiendo inferir que al menos 30% de la población estudiada tiene ésta situación.

Las familias que tienen un nivel de consumo alimentario aceptable consumen los 8 grupos alimentarios, pero se evidencia la baja frecuencia en los grupos de carnes y leguminosas. Asimismo, si bien aparece el grupo de lácteos, es en poca proporción y solo para algunas familias, la ingesta de calorías de estas familias es mayor a 1.900 Kcal/cápita/día.



Fuente: elaboración propia en base encuesta familiar 2013.

7 Según expertos nutricionistas de la FAO la energía correspondiente al promedio del metabolismo basal (Basal Metabolic Rate BMR) oscila entre 1.300 y 1.700 kilocalorías por persona adulta por día. Considerando la estructura de edades de los países en desarrollo el rango se ubica entre 1.300 y 1.500 kilocalorías por persona día. En este sentido, de acuerdo con estimaciones estadísticas el rango entre 1.720 y 1.960 kilocalorías por persona por día puede ser considerado como el umbral de la desnutrición (Trueba 2006).

Situación de la seguridad alimentaria

Como se ha establecido en la metodología, la combinación de las variables confiabilidad de las Fuentes de Ingreso (FI) y cualidad de las Fuentes de suministro de Alimentos (FA) determinan el acceso, realizando esta combinación se muestra que solo una tercera parte de las familias indígenas de Macharetí (33%) tienen un *buen acceso* a los alimentos, es decir que tienen la disponibilidad y los medios necesarios para adquirirlos. El 38% de las familias tiene un *acceso regular* y un 28% tiene un *mal acceso*, infiriendo que para estas familias existen deficiencias en las fuentes internas de suministro como la disponibilidad de la producción propia y/o las fuentes de ingreso para la compra de alimentos (Cuadro 5).

La combinación del nivel de acceso y nivel de consumo alimentario establece nueve combinaciones que se pueden resumir en 3 conglomerados que reflejan la situación de la (in)seguridad alimentaria. Como se muestra en el Cuadro 5 la combinación de niveles aceptables de consumo alimentario con buenos y regulares niveles de acceso determinan que un 56% de los habitantes de la TCO Macharetí están *seguros* alimentariamente.

Cuadro 5
Seguridad alimentaria en la TCO Macharetí

Porcentaje de casos		Nivel de Consumo Alimentario (PCA)				Total (Acceso)	
		Pobre	Límite	Aceptable	Total (Acceso)		
Acceso	Malo	2,6% Inseguridad severa	10,3% Inseguridad severa	15,4% Inseguridad moderada	28,2%	Seguros 56% Inseguridad Moderada 26% Inseguridad Severa 18%	
	Regular	5,1% Inseguridad severa	7,7% Inseguridad moderada	25,6% Seguros	38,5%		
	Bueno	2,6% Inseguridad moderada	2,6% Seguros	28,2% Seguros	33,3%		
	Total (PCA)	10,3%	20,5%	69,2%	100,0%		

Fuente: elaboración propia en base encuesta familiar 2013.

En contraste, pobres y niveles al límite de PCA combinadas con malos o regulares categorías de acceso establecen que el 44% de las familias muestran distintos grados de inseguridad alimentaria, es decir que tiene deficiencias en el acceso o consumo de alimentos. Específicamente se establece que el 18% de las familias tiene una *inseguridad alimentaria severa*, un pobre nivel PCA y un mal acceso. El 26% tiene una *inseguridad moderada*.

Estando los medios de vida familias guaraníes ligadas al aprovechamiento de los recursos naturales de su territorio, se puede deducir que los niveles de producción o la situación de los sistemas productivos habrían alcanzado el límite de su productividad lo que no permite generar la alimentación necesaria y sostenible para el total de la población estudiada.

Discusión

Configuración territorial de la Capitanía Macharetí

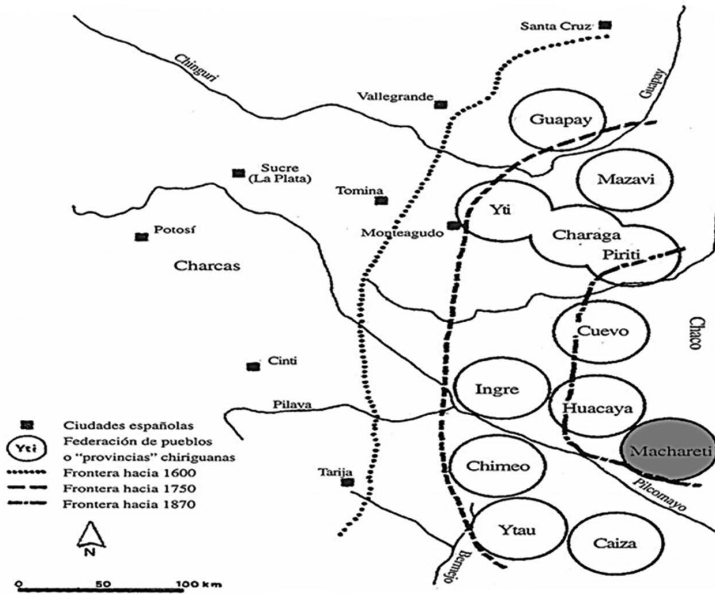
Antes de una discusión sobre los resultados de la situación de la seguridad alimentaria, es pertinente establecer los resultados de la configuración territorial de la TCO Macharetí desde la perspectiva espacial como medio para lograr la satisfacción de necesidades alimentaria.

Algunos autores afirman que para que exista un territorio precedentemente debe existir un espacio físico donde surjan relaciones entre los grupos humanos que lo ocupan. Para Raffestin (2011), es esencial comprender que el espacio es anterior al territorio puesto que el espacio existe *per se*, mientras que el territorio se genera a partir de aquél y es el resultado de la acción de un actor al apropiarse, concreta o abstractamente, de éste. El actor “territorializa” el espacio.

En el caso de los guaraníes de Macharetí, la conformación y configuración territorial ha sido particular, puesto que históricamente ocuparon un espacio ancestral del que fueron expulsados por grupos dominantes en distintos períodos. Como se ha mencionado, la zona fue tradicionalmente guaraní hasta la época republicana (ver Gráfico 4) y la pérdida de su territorio fue gradual. Muchos autores señalan la batalla de Kuruyuki⁸ en 1892 como el punto final de la independencia política de los guaraníes y la consolidación del proceso de expoliación de su territorio por parte de las haciendas, “la conquista *karai* (blanca-mestiza) de la Cordillera Chiriguana, se inicia en 1840 después de la guerra de la independencia, con la ocupación de tierras para la crianza de ganado vacuno en territorio indígena. Se observan desde entonces serios conflictos entre guaraní-chiriguanos y ganaderos *karai*. La ocupación de tierras de cultivo de maíz de las comunidades por parte de los colonos y sus ganados, provoca la reacción de los indígenas, quienes asaltan las haciendas quemando potreros, destruyendo cabañas y establos, y robando animales. Como respuesta, los *karai* protagonizan sanguinarias masacres –como la de *Karitati* en 1840–, donde mueren hombres, mujeres y niños de las comunidades” (Semanao Aquí 2014).

⁸ Fue la última batalla librada por los chiriguanos contra los blancos en 1892 (Saignes 2007).

Gráfico 4
Fronteras pioneras y “provincias” Chiriguano, Siglos XVII-XIX



Fuente: Saignes 2007.

El espacio fue paulatinamente ocupado por el ganado desplazando a la población indígena o propiciando su absorción en las haciendas como mano de obra y en otros casos provocando la migración guaraní hacia la zafra cañera al norte argentino. En ese sentido, hasta antes de 1990 para los guaraníes de la “Capitanía Zonal Machareti” no existía un espacio físico definido y menos un territorio.

La recuperación de su territorio ha requerido iniciar un proceso de reconstrucción tanto en lo espacial como en lo social, entonces se puede entender que recién a partir de 1996 existe un proceso de re-territorialización. La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y el Consejo de Capitanes Guaraní de Chuquisaca (CCCH) han tenido un rol importante tanto en la rearticulación de las comunidades y sus tierras ancestrales como en la determinación del espacio de las demandas territoriales guaraníes de Chuquisaca. Este ha sido el punto de partida para la organización de la Capitanía Zonal de Machareti que entre 1994 y 1995 inicia un proceso de identificación de los diferentes asentamientos guaraníes presentes en el área. Hasta entonces se desconocía con exactitud la cantidad de población. Si bien la presencia de los guaraníes en la zona era evidente, estaban ausentes como entidad cohesionada. Precisamente en este periodo comienza su reconstitución con identidad indígena guaraní.

El espacio del territorio guaraní de Macharetí se establece en la demanda presentada al Estado y luego admitida en el marco de la aprobación de la ley 1715 el año 1996. No obstante, esta aceptación no significó la delimitación de una superficie definitiva⁹ y menos aún su titulación. Sin embargo, esta dimensión espacial fue una referencia geográfica que permitió identificar las poblaciones, grupos y familias que contenía y con qué se identificaban (idioma y cultura guaraní).

Este fue un proceso complejo de rescate de formas organizativas, reasentamiento de comunidades, “reconstitución territorial” que a su vez forma parte de un contexto mayor que es la “reconstitución territorial de la nación Guaraní”. La reconstitución “espacial” para el guaraní significa por lo menos tres componentes: la comunidad y las casas (*têta*); el chaco y sus alrededores (*koo*), y el monte donde se realizan actividades de caza, pesa y recolección (*kaa*) (Penner 1998).

La situación de los guaraníes de la zona era muy difícil antes de la demanda territorial. Algunas familias estaban dispersas en comunidades con cierto grado de autonomía, otras familias estaban empatronadas en las haciendas limitadas en sus libertades y espacios, por lo tanto el grupo social estaba desarticulado entre sí. Desde la presentación de la demanda de la tierra-territorio antes de 1996 y fundamentalmente a través del saneamiento de tierras¹⁰ las comunidades empiezan a identificar su espacio físico pero también a construir relaciones entre los grupos humanos, a proyectar el uso del espacio con vistas a asegurar la satisfacción de sus necesidades y disminuir la perversa dependencia de las haciendas y en general la desigual relación laboral con las mismas.

El proceso de configuración territorial de la TCO Macharetí se establece a partir de tres tipos de asentamientos: comunidades históricas, comunidades reconstituidas y comunidades reasentadas (Diez Astete 2011). Las primeras son las que lograron mantener cierta “independencia” a lo largo del tiempo, aunque reducidas en sus espacios productivos. Estas son las comunidades Yuki-Kaipependi, Carandayticito, Tigüipa Pueblo y Camatindi que fueron el eje de articulación de la demanda de TCO. En sentido estricto, solo la comunidad Yuki-Kaipependi mantuvo su autonomía por estar alejada de los centros poblados, las otras comunidades históricas estuvieron en medio de poblaciones mixtas como el caso de Tigüipa Pueblo o Carandayticito que es un apéndice de la población de Carandaytí, que si bien no estuvieron dentro de las haciendas siempre tuvieron relación de dependencia laboral con éstas.

Las comunidades reconstituidas son el resultado de la agrupación de familias guaraníes que estaban en condiciones de servidumbre en las haciendas, son los

9 La ley 1715 dispone que las superficies consignadas en las 16 solicitudes de tierras comunitarias de origen, interpuestas con anterioridad a la ley, podrían modificarse de acuerdo a los resultados del saneamiento y del estudio de identificación de necesidades espaciales. Asimismo, señala un plazo para la titulación de diez meses a partir de la publicación de la ley (Hernaiz y Pacheco 2001).

10 El saneamiento es el procedimiento técnico-jurídico transitorio destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria y se ejecuta de oficio o a pedido de parte. Entre sus finalidades está la titulación de las tierras que se encuentren cumpliendo la función económico-social o función social.

casos de Ñankaroinza, San José, Timboicito y Estación Macharetí. Los espacios donde fueron a asentarse eran reducidos y con pocas posibilidades para la expansión productiva.

Las comunidades reasentadas son resultado de la compra de tierras por parte de algunas ONG para establecer familias guaraníes provenientes de diferentes zonas donde ya no tenían espacios territoriales, o precisamente recién salían del empatronamiento de las haciendas. Es el caso de las comunidades Tentami e Isipotindi.

Esta configuración territorial en Macharetí en contraste con otras capitanías ha sido mucho más compleja primero por la diversidad de actores –que si bien son de origen guaraní– han estado desarticulados entre sí. La demanda territorial y el saneamiento han sido una oportunidad para que la organización se cohesione en torno a la búsqueda de la tierra metro a metro. Este proceso técnico jurídico permitió una concepción del territorio que incluyó no solo estrategias de organización, sino también de dominación y de exclusión. La apropiación del territorio por parte del pueblo guaraní debió enfrentar las relaciones con los terceros, superar la sumisión política de la servidumbre en el sentido de no ver a sus patrones como empleadores, pero también un consecuente deterioro de las relaciones laborales.

Entonces el saneamiento –como parte del proceso de titulación– tuvo una importante contribución a la construcción social del territorio, en la perspectiva que el territorio físico como el factor que permita dignificar y satisfacer las necesidades básicas –incluidos los alimentos–, además de establecer las posibilidades de desarrollo de sus pobladores fue muy pobre. Según Albó (2012), el saneamiento ha permitido que las comunidades –con sus autoridades encabezándolas– definan juntas sus estrategias en un proceso muy activo de participación. Este sería el hecho más destacable de la titulación ya que la obtención de espacios territoriales fue marginal como se discute en el siguiente punto. De este modo se inserta la dimensión social del territorio y los guaraníes establecen nuevas relaciones entre sí y con la sociedad, buscando ordenar, administrar y organizar su territorio.

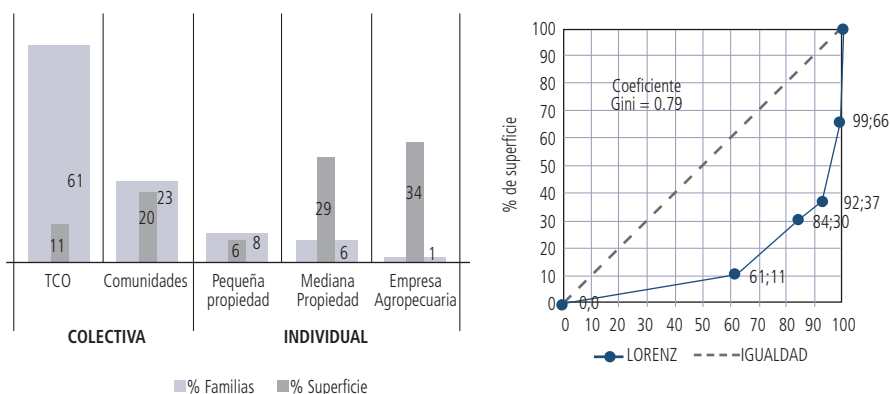
Estructura agraria y concentración de la tierra en el territorio demandado

Como se ha establecido el proceso de saneamiento ha permitido una fuerte apropiación del territorio en lo social, su ocupación y uso productivo espacial ha resultado muy pobre debido al escaso espacio titulado. El año 2002 se logró la titulación de 26.253 ha luego de siete años de iniciado el proceso, sobre una superficie demandada de aproximadamente 286,181 ha solo se logró determinar el 9% en favor de la TCO. Esto demuestra que el proceso de saneamiento no ha sido la mejor vía para re constituir el territorio físico para los guaraníes y más bien ha

servido para perfeccionar el derecho propietario de los terceros ratificando los índices de concentración de la tierra anteriores a este proceso.

Los resultados demuestran esta afirmación, el 70% de la superficie de tierras saneadas se concentró en el 16% de familias no guaraníes, y solo 30% fue titulada de manera colectiva para los indígenas. Como se muestra en el Gráfico 5 la situación en lo espacial para la TCO Macharetí fue poco beneficiosa luego de este proceso. Solo logró consolidar el 11% de las tierras en el área demanda para el 61% de la población beneficiaria (541 familias), mientras que la empresa ganadera agropecuaria bajo la titulación individual logró el 34% de la superficie para el 1% de familias (12 propiedades). De la misma manera, la mediana propiedad logró consolidar el 29% de las tierras para solo 6% de familias (56 propiedades). En términos generales se muestra una aguda inequidad en la distribución de la tierra. El nivel de concentración medido a través del coeficiente Gini¹¹ es de 0,79 mostrando la profunda desigualdad en la distribución de la tierra.

Gráfico 5
Propiedades y coeficiente de concentración de la tierra en el área SAN TCO Macharetí



Fuente: elaboración propia en base a CIDOB 2008, Fundación TIERRA 2011, e INE 2003.

Como era de esperar, el resultado del saneamiento ha generado descontento en la Capitanía de Macharetí puesto que la superficie titulada era insuficiente para permitir desarrollarse, “satisfacer las necesidades y las posibilidades de sus

¹¹ El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad, normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual (Medina 2001). En este caso el nivel de distribución o concentración de la tierra dentro de un espacio determinado sujeto a SAN TCO. Entonces el coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen tierra diagonal del gráfico) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene toda la superficie de tierra y los demás ninguna). A su vez la curva de Lorenz representa gráficamente la distribución relativa de la tierra, mostrando que mientras más alejada la curva de la diagonal de igualdad perfecta mayor la inequidad en la distribución de la tierra.

pobladores”. Solo ratificaba los espacios que con anterioridad ya poseían algunas comunidades y los nuevos “en zonas marginales de serranía, además establecidos en 24 bloques discontinuos (Salgado 2011).

Para equilibrar esta situación, el gobierno decidió dotar un área fiscal adicional de 91.529 ha ubicada en el mismo municipio, en el cantón Carandaytí en la frontera con Paraguay. Esta área fue denominada “Yembigüasu” por los propios guaraníes, la titulación se realizó el 27 de octubre de 2006. Sumando las dos titulaciones, hasta la fecha la Capitanía habría titulado 117.783 ha que significan el 48% de superficie de la demanda inicial.

No obstante, la visión de la Capitanía es continuar con el proceso de titulación a pesar de que luego de ocho años no se ha titulado ni un metro más a favor de la TCO y las perspectivas de lograr un espacio de tierra significativamente mayor es un proceso lento y en los últimos años paralizado. Como se menciona en muchos textos que analizan la problemática agraria en el chaco, a través del saneamiento se pudo verificar que el territorios guaraní no solo está conformado por indígenas, sino fundamentalmente por ganaderos y empresas petroleras con sus propias concepciones, iniciativas, propuestas, enfoques de desarrollo y gestión de los recursos naturales. Al final del proceso –pese a los recortes– las haciendas ganaderas no indígenas consolidaron su derecho propietario.

Dignidad y soberanía alimentaria

Revisado el anterior panorama y por los resultados presentados sobre la situación de seguridad alimentaria precedentemente, la tierra-territorio obtenido luego del proceso de saneamiento ha sido insuficiente para incrementar los niveles de producción agrícola, y consecuentemente el autoabastecimiento alimentario de los indígenas guaraníes. Las comunidades más dedicadas a la producción propia para el abastecimiento de alimentos no son precisamente las que han resultado del saneamiento, sino más bien las que se han establecido a partir de la compra directa de tierras. Es también una preocupación notable que las mismas están llegando a límites de sostenimiento de las familias, en el caso de Isipotindi debería albergar solo a 45 familias pero en la actualidad se encuentran 70, casi el doble de lo inicialmente previsto.

El espacio titulado –incluyendo el de compensación– aún no determinan un cambio sustancial en los niveles de vida que permitan disminuir la dependencia de fuentes externas en la alimentación. Además, existe un estancamiento de la agricultura tradicional del maíz, poroto y zapallos. En los últimos años los indígenas han tratado de mecanizar ciertos procesos productivos, como la preparación del terreno, para incrementar la superficie cultivada y la productividad de manera integral. La compra de un tractor por parte de la Capitanía –producto de la com-

pensación por las operaciones hidrocarburíferas– solo se emplea en las comunidades que están cerca de la carretera.

En la actualidad se siembra en toda la TCO un promedio de 450 ha de cultivos anuales a secano, cuyos bajos rendimientos no permiten cubrir los requerimientos alimentarios de las 540 familias a lo largo del año. Los factores fundamentales son precisamente la escasez de tierras adecuadas para la agricultura y los eventos climáticos caracterizados por sequías y heladas. El promedio de cultivos anuales es de 0,80 ha por familia y se siembran fundamentalmente el maíz asociado al poroto (kumanda) y las cucurbitáceas (zapallo, joco).

Es paradójico que la TCO estando inserta en una zona ganadera y habiendo los guaraníes adquirido las habilidades para la crianza de ganado mayor, por su constante relación con las haciendas, no pueda lograr su autoabastecimiento alimentario y su producción pecuaria sea marginal. Como se ha mostrado, la mayor deficiencia de alimentación son los lácteos y las carnes que además son los alimentos más caros dentro la canasta básica, mostrando que su acceso es casi prohibitivo para las familias guaraníes. La proteína animal proviene fundamentalmente de las aves de corral, patos, gallinas y huevos que son las fuentes que más aportan a la disponibilidad de suministros alimentarios.

Si bien los datos sobre la situación de la seguridad alimentaria en general en la región no presentan situaciones de hambre, es preocupante que aún el 18% de la población tenga niveles de inseguridad alimentaria severa, y el 26% inseguridad moderada, pudiendo evidenciar que en conjunto estos dos niveles demuestran que el 44% de las familias tiene problemas para encontrar los niveles de nutrición adecuada. Solo el 56% de las familias se encuentran por encima del umbral de los niveles de inseguridad alimentaria, muy por debajo de los demás estudios de caso de esta investigación.

Persistencia de la dependencia de fuentes externas para el acceso alimentario

Como se ha establecido, después de la pérdida de sus espacios históricos de vida los indígenas se dispersaron, muchos migraron a la zafra de caña en la Argentina, otros se quedaron como mano de obra en las haciendas y, por ello, dentro sus estrategias de sobrevivencia, la única opción ha sido vender su fuerza de trabajo como peones para complementar sus ingresos y conseguir los medios de vida necesarios para su subsistencia. Esta situación ya fue evidenciada en los diagnósticos sobre este pueblo en la zona de Macharetí. El estudio de identificación de necesidades espaciales para la demanda de TCO el año 2000 registraba que el 66,5% de los ingresos de las familias guaraníes provenían de la venta de fuerza de trabajo (VAIPO 2000). El diagnóstico para el Plan de Gestión Territorial Indígena el año 2008 (CIDOB-GTI 2008) muestra que el 60% de los ingresos provenían de esta

fuelle, en 2011 la actualización y ajuste del Plan de Gestión Territorial Indígena (2011-2015) demuestra que el 54% de sus ingresos familiares provienen de esta actividad, la presente investigación (2013) determinó que el 49% de los ingresos monetarios provienen del trabajo como peones.

Si bien se puede observar una ligera disminución en esta dependencia, también se debe tener en cuenta que la incorporación de Isipotindi a la TCO –vía compra de tierras– el año 2001 con un territorio más útil a la agricultura, ha influido en bajar esta tasa. Lo importante del dato es que las fuentes de ingresos por la vía de la venta de fuerza de trabajo siguen siendo determinantes en la economía guaraní.

Los resultados del saneamiento y el proceso de titulación evidencian la concentración de la tierra en las haciendas, consecuentemente la necesidad de mano de obra que debe ser proporcionada por los guaraníes se mantiene. Esta situación estimula a las familias a continuar vendiendo su fuerza de trabajo ya que resulta más conveniente obtener ingresos por esta vía que sembrar sus propias tierras marginales con los riesgos que representa la agricultura a secano en un ecosistema seco y adverso.

Estas condiciones muestran que las familias guaraníes sufren una vulnerabilidad alimenticia por doble partida, por un lado la articulación desventajosa al mercado frente a la volatilidad de los precios de los alimentos, en el que gastan aproximadamente en promedio el 40% de sus ingresos, y por otro las relaciones informales de trabajo que generalmente no son justas.

Perspectivas de la gestión territorial indígena (GTI) de Macharetí

Como se ha mencionado, los resultados de la obtención del espacio territorial han sido muy pobres en el plano productivo, sin embargo, la cohesión social de la población en construcción socio territorial –por la apropiación y el grado organizativo alcanzado en torno al saneamiento– ha sido el logro más importante en el proceso de reconstitución territorial.

A pesar de todo, la Capitanía Zonal de Macharetí ha resultado en una organización fortalecida y con capacidades de gestión importantes, esto ha permitido adicionalmente mejorar su capacidad de negociación con la APG frente a las empresas petroleras. Sin duda este un hecho que ha permitido obtener recursos económicos de compensación por el paso del Gasoducto Yacuibá-Río Grande. Si bien la demanda territorial no buscaba los objetivos de compensación, la sola existencia de la demanda la ha convertido en actor importante en los procesos de negociación.

Existe una conciencia clara en las comunidades y su organización sobre la importancia de la gestión territorial, no obstante, no existe explícitamente el objetivo de asegurar su propia alimentación en sus líneas de acción. Este aspecto debe

llamar la atención pues se podría focalizar esta temática políticamente y ayudaría a enfocar de mejor manera las acciones tendientes a revertir la situación de vulnerabilidad y dependencia alimentaria.

Esto no significa que no existan aspiraciones en este sentido, hay proyecciones económicas y productivas que indirectamente apuntan a ello. De hecho, el centro ganadero Yembigüasu desarrollado por la Capitanía Machareti es un buen ejemplo que apunta hacia estos objetivos. El centro se encuentra en su fase de implementación y demuestra viabilidad técnica en la producción, además de ejercer una importante función en el control territorial. Le corresponde a partir de ahora entrar en la fase que demuestre su capacidad de generar beneficios directos y equitativos, ya sea distribuyendo utilidades o transfiriendo material genético para las iniciativas comunales y familiares de cría de ganado mejorado. De lograrse avances en esta experiencia podrían no solo ser útiles en la legitimación del derecho propietario, sino una conquista importante en términos de seguridad y soberanía alimentaria para sus comunidades.

Conclusiones

La reconstitución socio territorial guaraní de la Capitanía Zonal de Machareti fue el logro más importante para sus pobladores que han sido cohesionados en torno a una demanda territorial. Familias, poblaciones y comunidades guaraníes desarticuladas entre sí fueron poco a poco consolidando su organización social. No obstante de haber superado los laberintos del saneamiento y conflictos organizativos, el resultado del saneamiento de tierras en términos de hectáreas no fue óptimo. Al contrario, fue claramente insuficiente para reducir los niveles de dependencia alimentaria y medios para conseguirlas.

La concentración de la tierra en el espacio demandado luego del proceso de saneamiento ha servido para perfeccionar el derecho propietario de terceros (hacendados ganaderos), estableciendo además una alta concentración de la tierra, además de dejar solo las tierras marginales para la TCO. Al contrario, las tierras que presentan mejores condiciones productivas para la agricultura en la TCO Machareti no han resultado del proceso de saneamiento sino de la compra directa en el mercado con ayuda de algunas ONG.

Después del proceso de saneamiento y titulación, la mayoría de las comunidades han quedado con pequeños espacios de tierras, secas y áridas y sin acceso al riego. Asimismo, otras no poseen tierras productivas, prueba de ello son las comunidades Tayirenda y Tigüipa Estación que alquilan la tierra para sembrar maíz.

No se puede afirmar que la titulación o la obtención de espacios territoriales deberían automáticamente conducir en un corto período de tiempo a superar los niveles de inseguridad alimentaria, sin embargo se espera que contribuyan

a aminorar esta situación y fundamentalmente eliminar la perversa dependencia laboral. Los resultados obtenidos en la presente investigación nos llevan a la conclusión de que, luego de 12 años de la primera titulación y 8 de la segunda, un 44% de las familias de Macharetí no alcanzan los niveles, la diversidad y la cantidad óptima de alimentos. La mayoría sufre de inseguridad alimentaria que se refleja en la falta de disponibilidad de alimentos y nutricionalmente la ausencia de consumo de grupos alimentarios importantes como las frutas, leguminosas, carnes y lácteos. Es contradictorio que siendo esta una zona por excelencia ganadera, no se acceda al consumo de lácteos, asimismo, llama la atención que siendo el poroto (frejol) uno de los principales alimentos del sistema productivo guaraní, no abastezca la dieta necesaria de leguminosas.

Es indudable que los alimentos suministrados por el uso de la tierra y territorio –producción propia, caza– son deficitarios para lograr la autosuficiencia alimentaria y consecuentemente ayuden a disminuir la dependencia de fuentes externas. La explicación para esta situación obedece a distintos factores entre los cuales se pueden distinguir: i) los rendimientos agrícolas y pecuarios obtenidos son bajos y resultan insuficientes para abastecer la canasta alimentaria a lo largo del año; ii) no existen sistemas de almacenamiento que permitan prolongar la disponibilidad de los productos y algunos deben consumirse o venderse inmediatamente después de las cosechas; iii) la necesidad de liquidez para comprar otros alimentos u otras necesidades básicas hace que se venda parte de la producción que no necesariamente es excedentaria; iv) el decrecimiento de la capacidad productiva de la tierra por los continuos años de uso disminuye a su vez los rendimientos por la falta de rotación; v) los altos riesgos climáticos, sequías y heladas no garantizan una producción estable; vi) la falta de dinero no permite iniciar la siembra.

La problemática general sin duda es el estancamiento de la producción no se puede incrementar la producción ampliando la frontera agrícola por la escasez de tierras aptas para este fin.

Otros problemas relacionados a la actividad ganadera que afectan a los guaraníes de esta región son la producción extensiva de los ganaderos medianos y grandes, el constante avasallamiento de ganado de las estancias vecinas perjudican el normal desarrollo de las actividades agrícolas familiares en las áreas comunales. En sentido contrario, cuando los guaraníes crían ganado en sus tierras –que tienen relativa aptitud– los frecuentes problemas son el acceso al uso de agua, ya que si están en las propiedades de terceros –como generalmente ocurre– este recurso es de difícil acceso para ellos.

En términos generales, la mayoría de los indígenas entrevistados para este estudio de caso obtienen la mayor parte de los alimentos que consumen de fuentes externas a su territorio: un 77% de la canasta mínima de alimentos deben ser comprados de fuera. La producción propia o el autoabastecimiento de derivados

de la agricultura y la crianza de animales (aves de corral y ganado menor) representa el 22% del total de alimentos, solo el 1% proviene de la caza de animales silvestres, recolección y de relaciones de intercambio recíprocas.

El 57% de los ingresos económicos de los guaraníes de Macharetí proviene de fuentes externas al uso la de su tierra y territorio, lo que evidencia una dependencia estructural de la venta de su fuerza de trabajo para obtener los ingresos monetarios suficientes que permitan comprar sus alimentos básicos. Por eso, la venta de su fuerza de trabajo es la principal estrategia de vida para estas familias.

El panorama planteado no pretende evidenciar que los guaraníes no necesitan del territorio para sobrevivir. Todo lo contrario, esto demuestra que el territorio que lograron consolidar en su favor es aún insuficiente para mejorar sus condiciones económicas y alimenticias. En este sentido, la lucha por mayores espacios territoriales continuará como una permanente reivindicación. Sin embargo, la ampliación de la frontera agrícola –por sí misma– no necesariamente solucionará los problemas de inseguridad alimentaria. Es claro que tendrá que acompañarse de vigorosas acciones de políticas nacionales regionales y locales dirigidas a cambiar las condiciones productivas –sobre todo el acceso al riego–, que permitan incrementar la diversificación agrícola y pecuaria potenciando el saber local y la agricultura familiar, combinándolos con tecnologías nuevas acordes a las características ecológicas de la zona y prácticas socioculturales del pueblo guaraní.

A futuro será necesaria la diversificación pecuaria y la mejora de la infraestructura existente a través de la capacitación y apoyo efectivo en aspectos relacionados al manejo, sanidad, alimentación y el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales. En las comunidades se debe evitar la incorporación de productores que si bien no son grandes ganaderos, solo buscan el acceso al territorio indígena para introducir su ganado a ramonear.

Finalmente, el proyecto ganadero de Yembigüasu es una experiencia exitosa en el control territorial y el manejo ganadero en tierras marginales, no obstante aún no se visibiliza su impacto en la seguridad alimentaria familiar guaraní de Macharetí. Sin embargo, la experiencia demuestra que para lograr cambios significativos en la producción es sustancial la continuidad territorial y la inversión productiva, por ello es sustancial que la transferencia de los beneficios hacia las comunidades y familias sea también un proceso de construcción social en función de las lecciones aprendidas en el manejo comunitario, tal es el caso de la experiencia de las “comunidades de trabajo” de Tentami o el desarrollo de la apicultura comunitaria en Isipotindi.

Referencias

- Albó, X. (2012). *El Chaco Guaraní camino a la autonomía originaria. Cuadernos de Investigación N° 79*. La Paz: CIPCA.
- Aylwin, J. (2002). *El acceso de los indígenas a la tierra en los ordenamientos jurídicos de América Latina* (Vol. I). Santiago: CEPAL.

- Balza, R. (2001). *Tierra, Territorio y Territorialidad Indígena. Un estudio antropológico sobre la evolución en las formas de ocupación del espacio del pueblo indígena chiquitano de la ex-reducción jesuita de San José. Pueblos Indígenas de Tierras Bajas N° 17*. Santa Cruz: APCOB.
- CIDOB. (2008). *10 años de SAN TCO: La Lucha por los derechos territoriales indígenas en tierras bajas de Bolivia*. Santa Cruz: La Rosa.
- CIDOB-GTI. (2008). *Plan de Gestión Territorial Indígena de la Capitanía Zonal Machareti*. Santa Cruz: CIDOB.
- Diez Astete, A. (2011). *Compendio de étnias indígenas y ecoregiones*. La Paz: Plural.
- Fundación TIERRA. (2011). *Informe 2010: Territorios Indígena Originario Campesinos en Bolivia. Entre la Loma Santa y la Pachamama*. La Paz: Fundación TIERRA.
- Guzmán, I. (2008). *Saneamiento de la tierra en seis regiones de Bolivia 1996-2007*. La Paz: CIPCA.
- Hernaiz, I., y Pacheco, D. (2001). *La Ley INRA en el espejo de la historia. Dos siglos de reforma agrarias en Bolivia*. La Paz: Fundación TIERRA.
- INE. (2003). *Bolivia: Características sociodemográficas de la población indígena*. La Paz: INE.
- Mazurek, H. (2006). *Espacio y territorio. Instrumentos metodológicos de investigación social*. La Paz: U-PIEB.
- Medina, F. (2001). *Consideraciones sobre el índice de Gini para medir concentración del ingreso*. Santiago: CEPAL.
- Melia, B. (1988). *Los Guaraní Chiriguano. Cuadernos de Investigación N° 30*. La Paz: CIPCA.
- Molina, W. (2012). El lugar del Territorio en los modos de vivir de las comunidades de San Ignacio de Mojos. *Tinkazos N° 32*, 109-124.
- Penner, I. (1998). *Entre maíz y papeles*. La Paz: CIPCA.
- Pérez de Armiño, K. (1 de marzo de 2014). *Diccionario de Acción Comunitaria y Cooperación al Desarrollo*. Obtenido de <http://dicc.hegoa.efaber.net>
- PMA. (2009). *Manual para la evaluación de la Seguridad Alimentaria en emergencias* (Segunda ed.). Roma, Italia: PMA, Servicios de Análisis de la Seguridad Alimentaria.
- Raffestin, C. (2011). *Por una geografía del poder*. Michoacán: Colegio de Michoacán.
- Saignes, T. (2007). *Historia del pueblo Chiriguano*. La Paz: Plural.
- Salgado, J. (2011). Procesos y perspectivas de los territorios indígenas en Tierras Bajas. En *Informe 2010: Territorios indígena originario campesinos en Bolivia. Entre la Loma Santa y la Pachamama* (págs. 141-229). La Paz: Fundación TIERRA.
- Semanario Aquí. (5 de Marzo de 2014). Obtenido de <http://semanarioaqui.com/index.php/nuestra-tierra-2/535-la-masacre-de-kuruyuki-en-tierra-guarani>
- Trueba, I. (2006). *El fin del hambre en 2025*. Madrid: Mundi Prensa.
- Urioste, M., y Pacheco, D. (2001). *Las tierras bajas de Bolivia a fines del siglo XX*. La Paz: PIEB.
- VAIPO. (2000). *Estudio de Identificación Necesidades Espaciales de la TCO Machareti-Ñancaroinza-Carandaytí*. La Paz.
- Viceministerio de Tierras. (30 de Enero de 2014). Rendición pública de cuentas 2014. La Paz, Bolivia.
- Wiesmann, D., Basset, L., Benson, T., y Hoddinot, J. (2009). *Validation of the World Food Programme's Food Consumption Score and Alternative Indicators of Household Food Security*. Washington: IPFRI.

La persistencia de la agricultura campesina y sus implicaciones alimentarias en Villa Serrano

Rossmary Jaldín Q.¹

En el marco de un proceso de cambios que afecta y transforma en mayor o menor medida a las comunidades campesinas, proceso que no solo influye en instituciones, estrategias o cultivos, sino también en patrones de consumo alimentario y formas de satisfacerlos; el presente trabajo muestra que, en ciertos lugares de Bolivia la agricultura campesina persiste e impacta positivamente en la alimentación de las comunidades. Si bien los cambios no obedecen enteramente a decisiones de los campesinos sino algunas veces a tendencias del mercado o en otros casos a problemas estructurales, esto no significa desconocer que perviven –adaptadas, transformadas o combinadas– algunas características históricas de las comunidades vallunas.

Este es el caso de Villa Serrano en los valles chuquisaqueños donde agricultores con escasas tierras, con poca capacidad de generación de excedentes agrícolas y altos niveles de migración, mantienen a la agricultura como la principal fuente para proveerse de alimentos. Los pobladores combinan su dieta con productos provenientes del mercado, el trueque y su propia producción, lo cual, reduce el riesgo de amenazas externas como el alza en los precios de los alimentos y el aumento en los gastos alimentarios. Bajo estas condiciones, la relación entre la tenencia de la tierra, el sistema productivo y sus implicaciones en la seguridad alimentaria local muestra que la propiedad mixta –individual y colectiva– de la tierra, la diversidad productiva y la diversificación económica representan un alto potencial que permite asegurar el consumo alimentario de las personas y, a su vez, resguardar la seguridad alimentaria de los hogares incluso aquellos más vulnerables de las comunidades.

Palabras clave: agricultura campesina diversificada, pequeña propiedad, consumo alimentario, acceso alimentario, seguridad alimentaria

¹ Investigadora con maestría en ciencias económicas en la Universidad de Gotemburgo (GU), Suecia. Fue miembro de la Unidad de Economía Medio Ambiental de la GU; parte del Programa de Investigación Ambiental y posteriormente responsable de Unidad de Investigación del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB). Trabajó en TIERRA (rossmary.jaldin@fao.org).

Introducción

En los últimos años Bolivia ha experimentado una serie de transformaciones rurales de la mano de una significativa expansión económica. Estos cambios no están al margen de las dinámicas socioeconómicas regionales y globales, en las que las relaciones de mercado se profundizan con tendencias concretas hacia una ampliación de la frontera agrícola basada en una agricultura intensiva e industrial y orientada hacia la maximización de ganancias bajo una lógica de agronegocios.

Para muchos autores, el agronegocio apuesta a una agricultura sin agricultores y para eso despoja a campesinos e indígenas de sus tierras. Esto a su vez, conlleva implicaciones sociales y ambientales severas y brotes de violencia rural por el acceso a la tierra en diversos lugares alrededor del mundo: Bolivia, India, África, Corea del Sur, Brasil, Argentina, México, Colombia, Guatemala, entre otros (Kay 2001, Yoder 1994 citado en Mora-Delgado 2008, Houtart 2014). Entre los efectos más visibles de esta forma de producción están una marcada diferenciación y exclusión social además de la homogenización del paisaje ya que esta agricultura implica principalmente la producción de monocultivos de exportación que emplean grandes extensiones de tierra –acaparamiento y extranjerización de tierras– (Urioste 2011), mayor utilización de recursos, tales como pesticidas y fertilizantes, un alto nivel de mecanización y la explotación de recursos naturales a medida que expanden la frontera agrícola en cada país (Carrasco, Sánchez y Tamagno 2012, Colque 2014, entre otros).

El ritmo y la escala de las transformaciones rurales también definen la continuidad o no de las formas de producción campesina y las modificaciones en sus patrones de consumo. Algunos autores alertan y cuestionan la continuidad de la agricultura campesina al encontrarse amenazada por las tendencias globales descritas o incluso su desaparición como resultado de la modernización agrícola (Westphal 2002, Kearney 1996, Yoder 1994, Mora-Delgado 2008). Otros afirman que indígenas y campesinos a lo largo de la historia se caracterizaron por resistir procesos de desplazamiento, presiones de expulsión y desaparición de sus formas de producción, a través de acciones colectivas o comunitarias de defensa de sus territorios (Colque 2014, 84), mientras otros señalan que sobrellevan, persisten y luchan por una reforma agraria integral y por soberanía alimentaria en territorios donde coexistan diferentes realidades rurales y no sea una forma de agricultura dominante la que se imponga frente a las otras (Shanin 1976, de Sousa Santos 2012, Wahren y Giarraca 2011, Vía Campesina 1995).

A pesar de las afirmaciones sobre la desaparición del campesinado como resultado de la industrialización, los campesinos estuvieron lejos de desaparecer

en el siglo XX (Mora-Delgado 2008). Al contrario, su continuidad ha sido ampliamente estudiada y sus sistemas de producción se presentan como opciones potencialmente más equitativas y ambientalmente sostenibles en comparación con la modernización agrícola convencional (Altieri 1995, Mora-Delgado 2008).

Desde el pensamiento nacional boliviano, se debaten formas alternativas al desarrollo que aún no han sido territorializadas o plasmadas en los territorios (Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y otros 2013). Por otro lado, hay quienes cuestionan si el modo campesino mercantil o el modo indígena es más viable para lugares de ecología frágil y plantean la necesidad de conexión respecto a la naturaleza sin obviar que el mercado es una realidad con la cual hay que contar y que no necesariamente es negativa si se la aborda por las grietas que la propia comunidad le abre a esa lógica mercantil (Rivera 2013).

En estas circunstancias, en Bolivia hay situaciones en las que la agricultura todavía está en manos de productores que cultivan pequeñas extensiones de tierra con prácticas tradicionales, con inserción al mercado, con utilización de recursos limitados, con un bajo o casi nulo nivel de mecanización y orientada a la producción de alimentos principalmente para el hogar y los mercados locales. Es una agricultura con bajos rendimientos y, en la cual, la situación agraria se ve afectada por una alta parcelación de la tierra que conlleva a la migración hacia otras zonas rurales y centros urbanos dentro y fuera del país. Estas son algunas de las características del municipio de Villa Serrano en el departamento de Chuquisaca; donde se desarrolla el presente estudio.

En este marco, el desafío es explorar las relaciones entre el sistema de producción campesina y la tenencia de la tierra para comprender cómo contribuyen a la seguridad alimentaria en comunidades de Villa Serrano. Se plantean tres preguntas: ¿cuál es el estado del consumo y acceso alimentario en la zona de estudio?, ¿hasta qué punto la pequeña propiedad mixta de la tierra y la agricultura campesina diversificada son un determinante de importancia de los patrones de consumo alimentario? O dicho de otra manera, ¿la interacción entre la problemática de la tierra y la forma de producción en el contexto estudiado qué implicaciones tienen en la seguridad alimentaria de la población?

El análisis se sustenta en la revisión de información secundaria y recolección de información primaria. La recolección de información en campo se realizó en dos momentos. El año 2012 se realizaron entrevistas a profundidad a nivel familiar y entrevistas semiestructuradas dirigidas a autoridades municipales, comunales, ex dirigentes y actores representativos del municipio. Los resultados (Jaldín 2013), fueron publicados en el informe de investigación de la Fundación TIERRA (2013). En la segunda etapa (2013) se profundizó el análisis del consumo alimentario para comprender los nexos entre tierra, producción y alimentación.

Para ello, se utilizó los indicadores de Puntaje de Consumo Alimentario (PCA) y la Evaluación de la Seguridad Alimentaria en Emergencias (ESAE) diseñados por el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Esto permitió, por un lado, explorar el consumo de alimentos –frecuencia, diversidad y valor nutricional de la dieta–, y por otro, el acceso alimentario considerando las fuentes de alimentos e ingresos; el uso de la tierra –autoabastecimiento– y los gastos alimentarios. En la recopilación se contó con la participación especialmente de mujeres a través de 55 encuestas en cinco comunidades (Huacahuasi, Lampacillos, Mendoza, Nuevo Mundo y Zamora) de los distritos de Mendoza, Nuevo Mundo y Pescado.

De esta manera, el documento inicia sintetizando los principales hallazgos encontrados respecto a las particularidades y cambios sociodemográficos que ha tenido la población para comprender qué es lo que persiste en la zona de estudio y en qué contexto ocurre esto. En la segunda sección se muestran las actividades económicas predominantes tomando en cuenta las fuentes de ingresos y los gastos alimentarios de las familias. En la tercera se aborda la tenencia de la propiedad de la tierra y sus efectos en la configuración social y productiva, para concluir con los resultados sobre la situación de la seguridad alimentaria en los hogares.

El segundo acápite, abre el debate y la reflexión en torno a los hallazgos encontrados para dar respuesta al cuestionamiento central: en qué medida la pequeña agricultura campesina y la propiedad mixta de la tierra contribuyen a la seguridad alimentaria de la población. Esta parte finaliza con las principales conclusiones del estudio.

Resultados encontrados

Particularidades y cambios sociodemográficos en la población

Históricamente Villa Serrano fue un punto estratégico y centro de abastecimiento de alimentos. Durante la época colonial transitaban este territorio conquistadores y misioneros constituyéndose así en un centro de suministro para la población que viajaba hacia las minas de Potosí. Durante la Guerra de la Independencia (1809-1825) fue campamento de las tropas realistas, durante la Guerra del Chaco (1932-1935) el ejército se desviaba a Villa Serrano para abastecerse de alimentos. El uso de la tierra para la provisión de alimentos fue una constante en la región al menos desde mediados del siglo XVI².

El territorio tiene una superficie de 1.727 Km² y está conformado por 46 comunidades en la Provincia Belisario Boeto, la cual comprende Villa Serrano como

² El contexto social e histórico de Villa Serrano se desarrolla con mayor detalle en la primera parte de este estudio, ver Jaldín (2013).

único municipio. Entonces en términos territoriales es a la vez provincia y municipio, esto podría considerarse una ventaja en términos administrativos y de gestión estatal, sin embargo, en los últimos 30 años ha habido cambios paulatinos, y una serie de limitaciones que todavía se mantienen, como se analiza a continuación.

Pobreza y vulnerabilidad social

Si se toma en cuenta la incidencia de pobreza extrema³, en Villa Serrano el año 2001 la cifra de habitantes que vivían en esta condición ascendía a 77,1%, casi el doble del promedio nacional (40,4%) (INE 2005). Actualmente, todavía no se conoce este dato a nivel municipal, sin embargo, se tiene cuenta de que los niveles de ingresos familiares –explicados principalmente por la pluriactividad económica– y esencialmente los ingresos municipales han ascendido notablemente, lo que hace previsible que la incidencia de pobreza extrema se haya reducido.

Además, la pobreza no es lo mismo que la vulnerabilidad social. Mientras la primera se refiere a la escasez de ingresos monetarios para cubrir las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias de los hogares, la segunda expresa la fragilidad ante cambios en el entorno y el impacto que provocan eventos socioeconómicos externos sobre las personas, tales como el desamparo institucional desde el Estado que no contribuye a fortalecer ni cuidar sistemáticamente a sus ciudadanos, la debilidad interna para afrontar cambios necesarios del individuo u hogar; o la inseguridad permanente que dificulta mejoras en los niveles de bienestar (Busso 2001). Estas limitaciones todavía están presentes en Villa Serrano, donde el índice de vulnerabilidad social es de 0.51 que lo sitúa en el séptimo más vulnerable de los 28 municipios del departamento de Chuquisaca y en el puesto 163 a nivel nacional (DGP 2009).

Otras tres particularidades son distintivas en Villa Serrano: los altos flujos migratorios a lo largo de su historia; la predominancia del idioma español tanto en el área urbana como rural, posiblemente como consecuencia de lo primero; y la escasez de tierras aptas para la agricultura debido a las condiciones geográficas del lugar, conformado en gran parte por serranías y colinas que dan origen a su nombre.

Alta fragilidad ecológica

La región está caracterizada por una alta fragilidad ecológica explicada por varios factores: 1) una topografía muy accidentada, constituida alrededor del 75% por colinas y serranías, con suelos pobres y degradados (90% de clase V-VIII según fotointerpretación); 2) una fuerte demanda de áreas de cultivo que está promo-

³ Incidencia de pobreza extrema se define como el porcentaje de personas cuyo consumo (valor de compras, autoconsumo y otras formas de abastecimiento) es menor al valor mínimo de una canasta básica de alimentos (INE 2005).

viendo el uso del suelo en pendientes muy escarpadas con grave peligro de erosión acelerada; 3) déficit hídrico en la parte occidental y la condición climática con periodos largos de sequía seguidos de periodos lluviosos concentrados en pocos meses; 4) el incremento de la actividad agrícola, explotación forestal y/o sobrepastoreo en áreas accidentadas, principalmente en los alrededores de mayor densidad poblacional (GMVS 2006). Como consecuencia, la mecanización de la agricultura es casi nula, hay un escaso o dificultoso acceso vial y una alta dispersión de parcelas con limitado potencial agrícola.

Flujos migratorios: envejecimiento y feminización de las comunidades

Los procesos migratorios del campo a las ciudades y hacia otras regiones rurales se constituyen el centro del debate al momento de comprender las estrategias campesinas; elemento que ha retomado mayor vigencia aún en los estudios sobre las estrategias campesinas contemporáneas (Berger 1979, Bernstein 2010, Baiphe-thi y Jacobs 2010) para quienes la pluriactividad practicada dentro y fuera de las parcelas representa el centro de su cotidianidad y de las decisiones económicas de sustento de sus familias.

Si comparamos los procesos migratorios del siglo XX al actual, éstos han sido una característica predominante del lugar pero con diferencias considerables en las motivaciones para migrar. En el quinquenio 1971-1976 se estableció que de cada 100 habitantes emigraron alrededor de 10 personas de manera definitiva y 14 personas temporalmente (11 varones y 3 mujeres). El destino de la migración dependía de motivos laborales y de salud. A nivel de comunidad, la segunda causa más importante era la falta de atención médica, mientras que la migración a otras provincias y departamentos respondía a motivos laborales (CORDECH 1989).

Actualmente, en los procesos migratorios, la salud no representa un motivo importante para que los migrantes decidan partir debido a la presencia de servicios de salud en el municipio. En cambio, la población joven migra principalmente para continuar sus estudios y la migración interprovincial, a otros departamentos o fuera del país responde en su mayoría a motivos laborales y, a diferencia del pasado, se destaca la falta de tierras aptas para el cultivo entre las causas principales para migrar.

Si se observan los cambios demográficos en la población en las últimas dos décadas se encuentra que en el año 1992, el municipio contaba con 12.617 habitantes, cifra que representaba el 0,19% de la población nacional y la tasa de crecimiento intercensal (1992-2001) era de -0,3% anual, cifra significativamente menor que el promedio nacional (2,7%) (INE 2005). Esta tendencia negativa no ha variado en las últimas dos décadas, al contrario se ha profundizado. Según los

datos del último censo (2012), la población actual en Villa Serrano ha descendido a 11.159 habitantes (5.549 mujeres y 5.700 varones) y la tasa de crecimiento intercensal de la población fue más de dos veces superior, negativamente con -1% anual (2001-2012), lo que implica que más personas están dejando las comunidades por los motivos expuestos: mientras la salud era el factor principal para dejar la comunidades en el pasado, hoy es la falta de acceso a tierras aptas para cultivos.

Los resultados de las encuestas aplicadas en las comunidades muestran que en promedio dos miembros de cada hogar han migrado. Hay casos como el de la comunidad Mendoza en los que hasta ocho personas han salido. La mayoría de los casos, es decir, el 42% de los migrantes salió de la comunidad Nuevo Mundo, 29% de Zamora, 20% de Lampacillos y los casos restantes de Mendoza y Huacahuasi. Al menos una persona ha dejado su lugar de origen en todas las comunidades analizadas.

Esto también se observa mediante la tasa de migración neta⁴ que era de -18,1 por mil habitantes en 2001 (INE 2005). Lo cual significa que la población de Villa Serrano se redujo en 18 personas por cada mil habitantes. Si se analiza la población rural, esta muestra la misma tendencia decreciente pasando del 76,6% en 2001 a 70,4% en 2012, equivalente a 7.861 habitantes rurales.

La estructura de la población da cuenta del envejecimiento y feminización en la zona de estudio. La alta proporción de población femenina en el área rural pone en evidencia que de las 5.549 mujeres que habitan en el municipio, el 67,7% (3.760 mujeres) viven en las comunidades. A esto se agrega una disminuida población joven, resultado de los crecientes flujos migratorios especialmente de los varones adultos y jóvenes en edad de realizar estudios universitarios (INE 2012). Lo que muestra que son principalmente los varones los que salen de las comunidades y las mujeres las que permanecen en ellas.

Las estrategias campesinas de diversificación de actividades económicas dan cuenta que al menos hay tres formas de migración en las comunidades estudiadas: una población que ha migrado de manera permanente o definitiva, en particular, a otros países; otra que migra temporalmente, por periodos de seis u ocho meses y va llevando a los miembros de su familia paulatinamente a ciudades o centros urbanos mayores; y una tercera que se caracteriza por una forma de migración flotante, es decir, que migra por periodos de tiempo más o menos cortos, por lo general, coincidentes con una mayor demanda de mano de obra en otras regiones del país pero que luego de esos periodos retorna a sus comunidades de origen donde mantiene sus prácticas agrícolas y se convierte en

⁴ La tasa neta de migración muestra el saldo entre inmigraciones y emigraciones de una determinada área, expresado como aumento o disminución por cada 1.000 habitantes en un área geográfica y período determinados (INE 2005).

un puente de intercambio y transferencia de conocimientos, saberes y recursos económicos y productivos⁵.

Baja coordinación estatal

De acuerdo a un estudio sobre las organizaciones de base y desarrollo local en el municipio, las correlaciones de fuerza en torno al poder local no han cambiado desde la Revolución de 1952 y las élites tradicionales conformadas por hacendados mantenían su hegemonía hasta finales del siglo XX (Sandoval 2010). En el presente, las élites tradicionales que conservaban el poder político y económico fueron desplazadas por movimientos sociales o grupos afines al partido de gobierno (MAS), a su vez, las organizaciones de base han fortalecido su organización, principalmente, la Centralía Provincial Belisario Boeto y la organización de Chuquisaca Centro. Sin embargo, a partir del trabajo de campo se evidenció que la articulación con el gobierno municipal es todavía incipiente y faltan respuestas efectivas a las demandas de la población. Una de las razones se debe a la poca coordinación interinstitucional y la baja articulación en la gestión de proyectos y respuesta a las demandas de las organizaciones sociales (Limón 2012).

Diversificación de actividades en el centro de la economía campesina

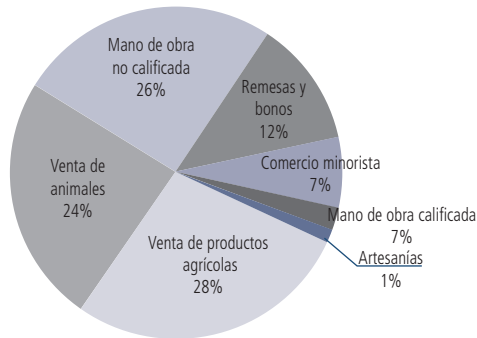
De la mano de la agricultura campesina, la diversificación de actividades económicas se evidencia como una de las principales estrategias de las familias encuestadas de Villa Serrano, dando cuenta de al menos seis actividades económicas predominantes en las zonas de estudio (Gráfico 1).

Más de la mitad de los encuestados señalan a la agricultura y ganadería entre las principales actividades económicas (51,5%) –agricultura y venta de productos agrícolas (27,6%) y ganadería y venta de animales (23,9%)– lo cual muestra que el uso de la tierra en las comunidades estudiadas sigue siendo central en la dinámica económica local.

Fruto de los flujos migratorios, la venta de fuerza de trabajo representa la segunda actividad más importante con un 26,1% y las remesas y bonos un 11,9%. Por otro lado, las actividades con menor frecuencia son el comercio minorista, la mano de obra calificada y las artesanías, en ese orden de importancia.

⁵ Ver más detalle sobre estos flujos migratorios en el análisis sobre medios de vida del estudio de caso de Villa Serrano incluido en Fundación TIERRA (2013).

Gráfico 1
Principales actividades económicas (en porcentaje)



Fuente: elaboración propia en base a encuesta familiar 2013.

La población encuestada afirma que –además de la agricultura– combina una serie de actividades económicas en respuesta a las necesidades de las familias. Esto difiere en función a la dispersión entre las comunidades o a su cercanía al centro urbano. Así, la agricultura se destaca como la principal actividad en Mendoza (33,3%) y Lampacillos (40%). En Zamora son el ganado y la venta de animales con un 31,7%. Estas comunidades son distantes del centro urbano de Villa Serrano y poseen una estructura vial accidentada y de difícil acceso en época de lluvias. En cambio, en las comunidades con mayor accesibilidad y cercanía a Villa Serrano, la principal actividad es el comercio minorista, Huacahuasi (33,3%) y la venta de fuerza de trabajo –mano de obra no calificada– en Nuevo Mundo (28,6%). Lo que sugiere que a medida que las comunidades distan más del centro urbano su relación con el mercado es más endeble mientras si están más próximas a este existe una mayor dependencia del mercado ya sea laboral a través de la venta de su mano de obra o comercial para la venta de productos. En el sentido de estrategia de vida, como lo plantea Zoomers (2002), existe una diversificación de actividades para manejar el riesgo no solo a nivel de las comunidades sino del hogar y sus miembros ejercen distinto tipo de actividad dependiendo de las condiciones del contexto. Así por ejemplo, encontramos familias que si bien realizan agricultura, a la par comercializan sus productos en el centro urbano y migran temporalmente para vender su mano de obra en época seca; siendo la diversificación económica una práctica usual entre los hogares.

En todos los casos las remesas y bonos juegan un rol importante en la fuente de ingresos de los hogares encuestados oscilando entre el 8% hasta el 33,3% de los ingresos, explicado por los altos flujos migratorios descritos en la sección anterior (Cuadro 1).

Cuadro 1
Actividades económicas generadoras de ingresos por comunidad (en porcentaje)

Fuentes de ingresos	Huacahuasi	Lampacillos	Mendoza	Nuevo Mundo	Zamora	Total
Agricultura y venta de productos agrícolas	16,7	40,0	33,3	21,4	29,3	27,6
Mano de obra no calificada	16,7	36,0	0,0	28,6	22,0	26,1
Ganado y venta de animales	16,7	12,0	33,3	23,2	31,7	23,9
Remesas y bonos	16,7	8,0	33,3	8,9	14,6	11,9
Comercio minorista	33,3	4,0	0,0	12,5	0,0	7,5
Mano de obra calificada	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	2,2
Artesanías	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: elaboración propia en base a encuesta familiar 2013.

En todas las comunidades se observa una alta diversificación de actividades como alternativa para generar ingresos monetarios dentro o fuera de sus predios. Esta flexibilidad de la economía campesina ha sido expresada por diversos autores, ya sea como un medio de reducción de riesgos (Zoomers 2002) o para compensar la reducción de los ingresos agrícolas fruto de la fragmentación y erosión de la tierra (Olarte 1994).

Diversidad de fuentes para la provisión de alimentos

Al igual que la flexibilidad en la diversificación económica, existe una diversidad de fuentes para proveerse de alimentos a través de la producción propia, compra, trueque o intercambio de productos sin intermediación monetaria, donación, recolección, entre otros.

De los alimentos consumidos por la población encuestada, el 48% proviene de la producción propia y el 38% de la compra en ferias comunales o mercados locales. Un 4% proviene del trueque o intercambio de alimentos producidos localmente y 1% de la recolección de los mismos. Si se considera el total de alimentos provenientes de la producción local para el autoconsumo esta cifra asciende al 53%, lo que indica que el uso de la tierra es un factor determinante para el aprovisionamiento de alimentos de los hogares en la medida en que más de la mitad de su alimentación proviene –vía producción, trueque o recolección– de sus propias parcelas. Al contrario, esta situación se revierte a medida que las comunidades se sitúan próximas al centro urbano y se incrementa el acceso a alimentos vía compra.

La encuesta identificó que el trueque es más común en las comunidades más alejadas del centro urbano (Mendoza, Lampacillos, Zamora) y permite a la población acceder a productos de otros pisos ecológicos del municipio. Así, el maní y el ají característicos de la zona baja comúnmente se intercambian por otros productos tradicionales como la papa, el maíz o el trigo de las zonas media y alta del municipio donde los primeros casi no se producen.

Los términos de intercambio encontrados muestran que el ají y el maní son los productos con mayor valor de intercambio con una relación de 3 libras de maní por 1 arroba de papa o trigo; o 4 libras de ají por 1 arroba de trigo. También se da el trueque entre productos tradicionales, que poseen equivalencias similares, como el caso de 1 arroba de maíz por 1 arroba de papa.

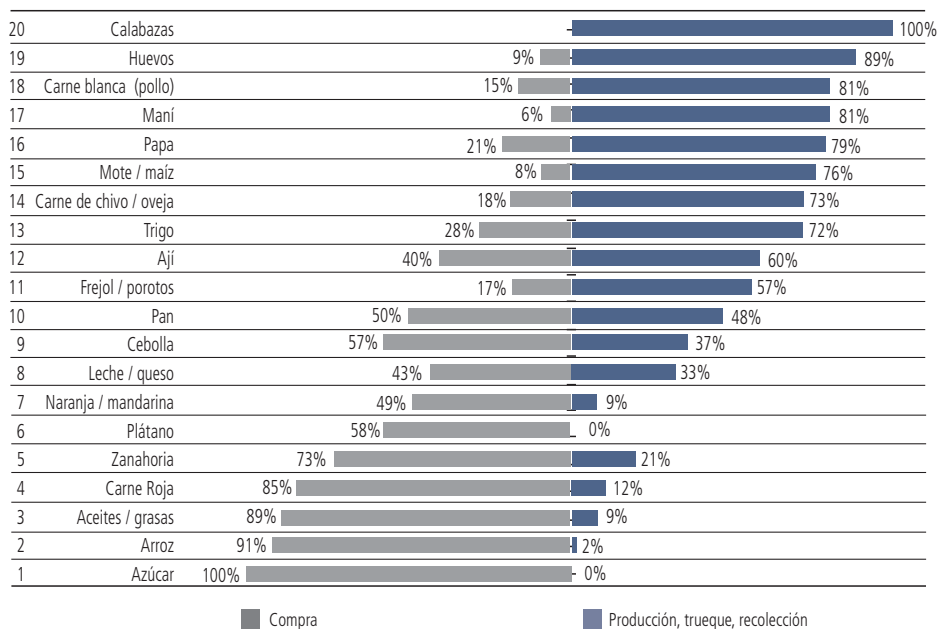
Si se observa el suministro de alimentos por producto, hay una combinación entre los alimentos producidos para el autoconsumo y los adquiridos vía mercado, que ordenados en una tabla comparativa dan como resultado dos triángulos contrapuestos en una relación inversamente proporcional (Gráfico 2). Esto significa que las familias consumen lógicamente y mayoritariamente los productos que producen y compran los que no producen de acuerdo con sus necesidades alimentarias. Esta es una diferencia distintiva entre el presente estudio de caso y la situación en los estudios de Cuatro Cañadas, TCO Macharetí y Yanacachi –zona sojera, territorio indígena guaraní y zona cocalera, respectivamente– en los que la mayoría de los alimentos consumidos provienen del mercado vía compra, sean o no producibles localmente.

Los principales cultivos y productos de las zonas analizadas en Villa Serrano durante la época de estudio, lo constituyen calabazas, hortalizas, papa, maíz, trigo, huevos, carne de chivo, frejol, maní. Se destaca entre las comidas tradicionales, fuertemente vigentes en el municipio, el *lawabucho* o *lawa* (sopa) de ají, en quechua cuyo proceso de elaboración responde a lógicas de la “comida lenta”, preparada con esmero y tiempo antes de ser servida.

Los principales alimentos comprados son: azúcar, arroz, aceite, carne roja, cítricos y plátanos, provenientes del mercado urbano o de otras comunidades fuera de la zona de estudio. Hay productos como la leche y queso que actualmente se compran más de lo que se producen pero esto depende de la temporada y responde completamente a una lógica estacionaria. Durante el estudio los informantes dieron cuenta que era época seca, por lo que el suministro de lácteos era considerablemente menor y podría representar cierto grado de vulnerabilidad alimentaria transitoria. Otro elemento que determina la variación en las fuentes de alimentos es la baja capacidad de almacenamiento, que en algunos casos provoca que los agricultores vendan sus productos y posteriormente tengan que comprarlos, tal es el caso de la cebolla o zanahoria.

Gráfico 2

Suministro de alimentos por producto y frecuencia de consumo (en porcentaje)



Fuente: elaboración propia en base a encuesta familiar 2013.

La diversidad de los productos no se encuentra en una misma parcela familiar, al contrario, como se ha mostrado proviene de diferentes fuentes de suministro e incluso de distintos pisos ecológicos del municipio. Por las condiciones del lugar, en la zona alta y media occidental predominan los cultivos tradicionales de papa, trigo, maíz y cebada combinada con el ganado vacuno, caprino y ovino.

En la zona media oriental, las condiciones climáticas dan lugar a la producción diversificada de frutos (papaya, durazno y principalmente cítricos) combinada con el ganado vacuno, porcino y ovino y se mantienen cultivos tradicionales como el maíz, papa, papalisa y trigo. Mientras que en la zona baja del municipio la actividad agrícola se combina con ganado vacuno, ovino, porcino y equino; y al ser la región más cercana al centro urbano de Villa Serrano la producción combina cultivos tradicionales con cultivos de garbanzo, poroto, maní y ají; siendo estos dos últimos los de mayor valor comercial con un potencial de exportación a mercados ecológicos en Europa y Estados Unidos.

En palabras de Gonzales de Olarte, “la asociación de cultivos, la diversidad de productos, el cultivo de diferentes parcelas y la complementariedad productiva, hacen parte de esta estrategia que busca producir una canasta de productos

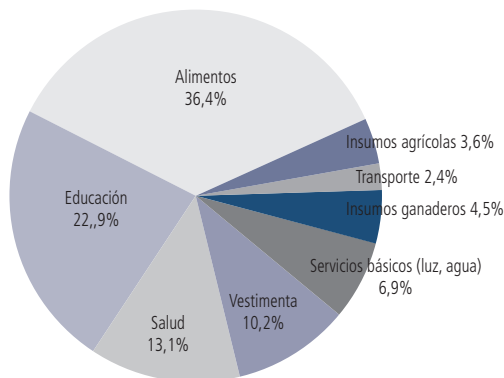
capaces de satisfacer, primero, ciertas necesidades básicas de alimentación y, segundo, vender ciertas cantidades de productos en los mercados” (Gonzales de Olarte 1994, 114).

Destino de los gastos del hogar

La mayor dependencia de mercados para conseguir productos externos al sistema productivo genera un mayor gasto económico en alimentación y considerando la volatilidad de precios el grado de vulnerabilidad de los campesinos de Villa Serrano en términos de acceso también aumenta. Los estudios sobre el aumento de los precios alimentarios y sus efectos en las economías campesinas señalan que el impacto en los gastos alimentarios es mayor en las familias con bajos recursos. Esto es comprensible ya que en estas familias la proporción de sus ingresos y gastos es estrecha y un leve incremento en los precios hace que en esta proporción el efecto se magnifique. Según Baiphethi y Jacobs (2010), los gastos alimentarios pueden representar hasta un 60-80% en las familias con menores ingresos, en la medida en que sea mayor su dependencia del mercado.

En el caso de las comunidades estudiadas en Villa Serrano, el principal gasto de hogar es la alimentación con un promedio bajo de 36,4% del total. Le siguen los rubros de educación en 22,9%, salud 13,1% y vestimenta 10,2%. Otros rubros que cobran importancia son los distribuidos en servicios básicos principalmente el pago de agua y energía eléctrica 6,9% y en menor medida los gastos agrícolas que suman 3,6% y los insumos ganaderos 4,5% (Gráfico 3).

Gráfico 3
Destino del gasto de los hogares (en porcentaje)



Fuente: elaboración propia en base a encuesta familiar 2013.

Cuadro 2
Principales gastos de los hogares por comunidad (en porcentaje)

Gastos	Huacahuasi	Lampacillos	Mendoza	Nuevo Mundo	Zamora	Total
Alimentos	35,0	35,4	30,0	36,2	38,1	36,7
Educación	15,0	21,8	30,0	23,7	22,5	22,9
Salud	30,0	8,2	20,0	14,6	11,2	13,1
Vestimenta	20,0	3,6	20,0	10,0	12,5	10,2
Insumos ganaderos	0,0	9,1	0,0	6,2	0,0	4,5
Semillas	0,0	3,6	0,0	1,7	0,0	1,4
Agroquímicos	0,0	3,6	0,0	0,4	3,7	2,0
Otros gastos agrícolas	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,2
Transporte	0,0	0,0	0,0	2,5	4,4	2,4
Servicios básicos	0,0	13,6	0,0	4,6	7,5	6,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: elaboración propia en base a encuesta familiar 2013.

Las comunidades con mayores gastos en alimentación son coincidentemente las más cercanas al centro urbano de Villa Serrano, como el caso de Nuevo Mundo (36,2%). Mientras que comunidades más alejadas, como Mendoza, muestra el nivel más bajo de gasto alimentario (30%) entre las comunidades estudiadas. Si bien en ambos casos los niveles de gastos alimentarios son bajos, las diferencias entre las comunidades demuestran que las familias más conectadas al centro urbano como Nuevo Mundo o Huacahuasi incrementan sus gastos alimentarios debido a la mayor accesibilidad a los mercados y a la complementación de su dieta con productos provenientes del mercado local vía compra, lo que no ocurre con las comunidades dispersas que están alejadas y obligadas a autoabastecerse.

De esta manera, en las zonas más alejadas como Mendoza, la provisión de alimentos se da en mayor medida de la producción propia y las prácticas vigentes de trueque, además de proporciones menores de compra, lo que permite reducir el nivel de gastos alimentarios monetarios y dar un efecto amortiguador frente a shocks externos como el aumento en los precios de los alimentos. En contraste, no depender tanto del mercado, a costa de ajustar o reducir su dieta, ocasiona depender más de las variaciones del clima.

Propiedad mixta de la tierra: individual, en co-propiedad y colectiva

La situación de tenencia de la tierra representa uno de los principales problemas en la zona debido a la fuerte demanda de tierras principalmente para los here-

deros, asociada a la escasez de tierras aptas para el cultivo por la accidentada topografía y el proceso acelerado de erosión de los suelos, entre otros factores ya mencionados.

A la fecha, se ha concluido el proceso de saneamiento del derecho propietario de la tierra en la zona y se han otorgado gran parte de los títulos de propiedad a las comunidades que conforman el municipio. De acuerdo a los datos del INRA (2011), el tipo de propiedad en la zona se clasifica en pequeña propiedad (58.416 ha), comunidad (105.676 ha) y Área Protegida del Ñaño (33.747 ha), con un restante de 3.176 ha sin clasificar (INE 2005). Sin embargo, el sistema de tenencia mixto de la tierra vigente en Villa Serrano combina la titulación individual, la co-propiedad y la propiedad colectiva. La co-propiedad se refiere a la forma de titulación a nombre de varias personas, generalmente hermanos herederos de las tierras familiares (co-propietarios), la cual se engloba dentro la clasificación de pequeña propiedad en las cifras oficiales.

El manejo de estas tierras, según las normas y procedimientos propios de las comunidades, distingue el uso de las propiedades individuales destinadas principalmente a la producción familiar, de las tierras colectivas que esencialmente se emplean para el pastoreo colectivo, y excepcionalmente, para ser distribuidas a los jóvenes sin tierra.

Según el PDM de Villa Serrano, en promedio las familias poseen entre 2 a 5 ha cultivables y 10 ha en descanso destinadas al pastoreo de uso común. La situación en las comunidades encuestadas se acerca a esta estimación dando en promedio que los hogares poseen alrededor de 7 ha, cifra que se reduce considerablemente a menos de la mitad cuando se hace referencia a la superficie cultivable (2,2 ha).

Cuadro 3
Promedio de la superficie total y superficie cultivable (en hectáreas)

Comunidad	Promedio familiar	
	Superficie total (ha)	Superficie cultivable (ha)
Huacahuasi	4,0	3,0
Lampacillos	14,7	2,1
Mendoza	5,5	2,5
Nuevo Mundo	4,2	1,5
Zamora	6,8	3,3
Total	7,0	2,5

Fuente: elaboración propia en base a encuesta familiar 2013.

La ausencia estatal y la demora en la titulación de tierras por parte del Estado desde la aprobación de la ley INRA en 1996 han dado lugar a diferentes mecanismos de legitimación del derecho propietario de la tierra. En este caso son las comunidades, con base en sus normas y procedimientos propios, las que han legitimado el derecho sobre la tierra. En la medida en que el pequeño productor forma parte de una comunidad y cumple con sus obligaciones comunales, la comunidad le reconoce su propiedad agraria ante vecinos y terceros; brindando una seguridad no legal sino “legítima” sobre la tierra.

Bajo esta forma de propiedad mixta, actualmente persisten lógicas tradicionales de uso y manejo de la tierra basadas en sistemas de rotación de cultivos, descanso de parcelas y asignación de tierras tanto colectivas –principalmente destinadas para el pastoreo– como parcelas familiares de uso individual. En éstas últimas, la comunidad no interviene y es cada productor individual el que define lo que se va a producir, aunque se tiene un conocimiento tradicional sobre el orden de rotación del cultivo que se mantiene casi de manera automática. En esas parcelas individuales no se requiere consentimiento de la comunidad para cultivar, lo cual no ocurre con las tierras colectivas en las que el aval de la comunidad es un requisito inviolable.

Como resultado del manejo de la tierra no existe una concentración de este recurso en pocas manos ni una marcada diferenciación social, al contrario, se evidencia una distribución relativamente equitativa de la tierra en términos de superficie. Una estimación del coeficiente de Gini⁶ de la tierra realizado para fines de este estudio afirma este resultado con un valor de 0.49. Sin embargo, tomando en cuenta las características biofísicas de los diferentes pisos ecológicos se observa una estratificación social vinculada con la tenencia de la tierra siendo los agricultores de valle y cabecera de valle los que poseen mejores condiciones socioeconómicas en comparación con los agricultores de la zona alta del municipio. Aunque no se ha indagado sobre el valor de la tierra en términos económicos –ya que no existe un mercado dinámico de tierras en la zona y casi no hay tierras disponibles para la venta– las personas consultadas dan cuenta que las tierras de la cabecera de valle y valle son las más codiciadas esencialmente por el acceso al agua. Por otro lado, la titulación bajo la forma de co-propiedad también presenta un interesante manejo y uso de tierra que esconde fundamentalmente la situación de los migrantes. Ésta es la forma de propiedad con mayores conflictos por la tierra originados principalmente por el ejercicio del derecho propietario por herencia. Muchos herederos exigen sus derechos de propiedad sobre la tierra pero gran parte del año no viven en sus comunidades. Así, durante el proceso de saneamiento el número de afiliados en algunas comunidades llegó a duplicarse,

6 El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad, normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual, en este caso la distribución desigual de la tierra.

pasando de 40 a 80 afiliados, y una vez otorgado el título nuevamente fueron deshabitadas rápidamente. En algunos casos, figuran 5 a 7 co-propietarios cuando en realidad es solo una persona la que habita la comunidad y cumple con la función social de las parcelas. Como resultado, el proceso de saneamiento no ha resuelto los conflictos por la tierra, al contrario han emergido conflictos internos familiares. La situación de los herederos en búsqueda de su derecho propietario genera un proceso de parcelación minifundiaría creciente. Debido a las reducidas superficies cultivables que posee cada familia, muy pocos agricultores compran tierras y prácticamente no hay tierras disponibles para la venta. Estos dos elementos –la sucesión hereditaria y la intensificación de la parcelación de tierras– sumados a la disponibilidad de agua en determinadas épocas, están entre los principales problemas en torno a la tierra que enfrenta la población que opta por migrar temporalmente o definitivamente de sus lugares de origen. Considerando el tamaño promedio de la familia y la herencia como principal forma de acceso a la tierra, las propiedades que en el momento son menores a 10 ha, podrían reducirse incluso por debajo de las 5 ha, por lo que es posible prever que en el transcurso de una generación la escasez de tierras y la emigración se agrave.

Alimentación de la población

El municipio de Villa Serrano originalmente era denominado El Pescado o *Challhua Mayu*. Contrariamente a su nombre, la actividad pesquera actualmente no es representativa en la zona y el pescado no forma parte importante de la dieta de los pobladores. Por un lado, esto se debe principalmente a los efectos climáticos que han repercutido en una considerable baja en el caudal de los ríos, lo cual, se evidenció en campo a partir de la insistencia de los pobladores en afirmar que *el valor de la tierra está en el agua* (Jaldín 2013). Sin embargo, ésta no es la única razón, estudios realizados hace 30 años alertaban que la “pesca con dinamita” era un problema que requería su adecuado control (CORDECH 1989, 7).

En adelante, se verá la situación de la seguridad alimentaria de los hogares expresada en la cantidad y calidad de la dieta, combinando el análisis del consumo y acceso a los alimentos definidos por el PMA.

Consumo alimentario: diversidad y frecuencia del consumo de alimentos

En las comunidades estudiadas el 89% de las familias tiene un nivel de consumo alimentario aceptable (PCA > 42), el 9% de las familias tiene un consumo al límite (PCA entre 28 a 42) y, solo un 2% de los hogares encuestados tienen un consumo pobre (PCA < 42), de acuerdo a la categorización del PMA (ver Gráfico 4).

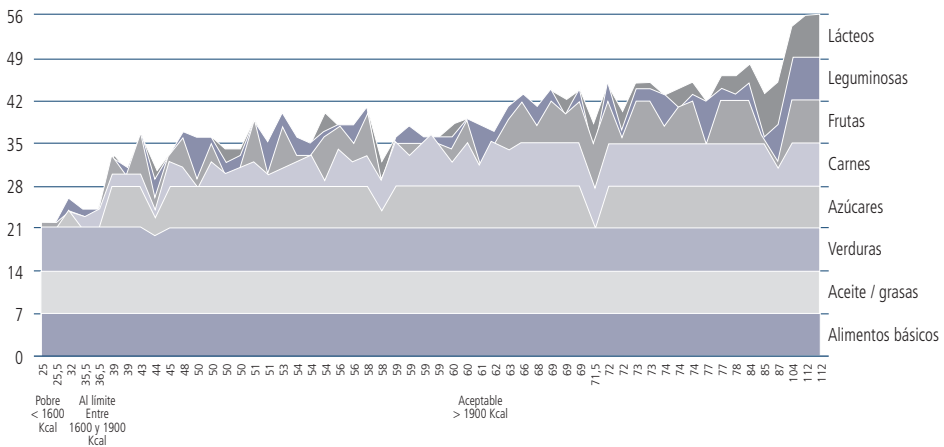
Esto significa que, en general, la mayoría de los hogares cuentan con una adecuada disponibilidad de alimentos (cantidad y calidad), proveniente de la producción para el autoconsumo y la compra en los mercados locales. En términos alimentarios, la población ha logrado construir una especie de amortiguador frente a las condiciones económicas adversas existentes en el lugar.

Estos resultados se componen de dos elementos: la diversidad y la frecuencia de consumo, dando como referencia el valor nutricional de la dieta. La mayoría de las familias han cubierto su dieta con los ocho grupos alimentarios esenciales, con una mayor proporción de alimentos básicos (cereales y tubérculos), aceites/grasas, verduras, azúcares, carnes y frutas; y en menor frecuencia leguminosas y lácteos, en ese orden de importancia. Estas familias estarían cubriendo las 2.100 kilocalorías por persona al día (kcal/per cápita/día), recomendadas por el PMA y la FAO, para una alimentación adecuada tanto en cantidad como en calidad de alimentos.

Aún en los casos más vulnerables, las familias encuestadas disponen de una dieta variada. Los hogares que se encuentran en la situación media cubren siete de los ocho grupos alimentarios, con una menor frecuencia en el consumo de lácteos. La ingesta energética de estas familias oscila entre 1600-1900 Kcal/per cápita/día de acuerdo con parámetros del PMA y la FAO.

Finalmente, las familias que se encuentran en la situación de consumo pobre cubren cuatro de los ocho grupos alimentarios: alimentos básicos, aceite/grasas, verduras y azúcar, sin alcanzar el valor calórico recomendado, situación que afecta al 1% de la población muestral (ver Gráfico 4).

Gráfico 4
Puntaje de Consumo Alimentario (PCA)



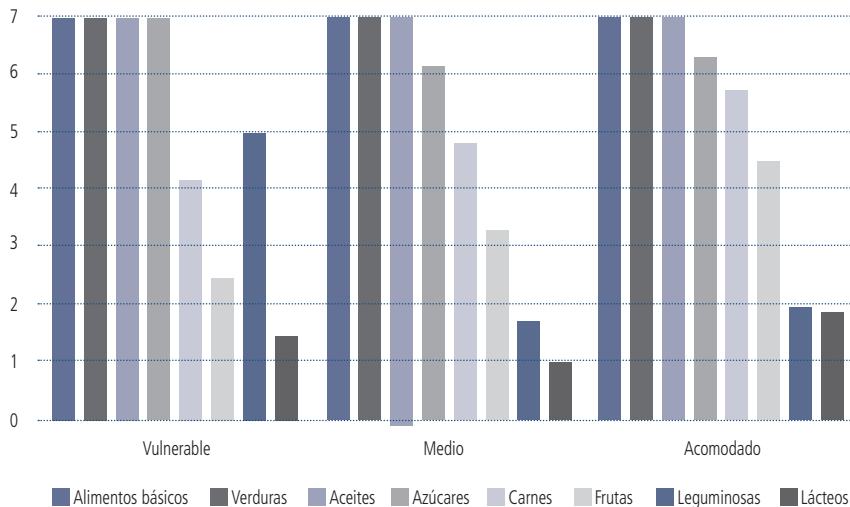
Fuente: elaboración propia en base a encuesta familiar 2013.

Estos resultados muestran que en casi todos los casos las familias cubren un consumo alimentario adecuado, con una dieta diversificada que combina de 7 a 8 de los grupos alimentarios necesarios. Solo uno de los 55 casos encuestados, recae en un nivel de consumo pobre de acuerdo al PCA. Con lo cual, bajo esta forma de producción destinada al autoconsumo y al mercado local, se evidencian efectos positivos tanto en la diversidad de la dieta como en la frecuencia del consumo, expresados en los niveles de consumo alimentario y aporte del valor energético que estos alimentos otorgan a las familias encuestadas.

Profundizando este análisis por estratos de riqueza, no se evidencia una marcada diferenciación social en las familias encuestadas situándose el 70,9% de los casos en un nivel medio de riqueza, 18% en un nivel acomodado y 10,9% en un nivel vulnerable.

El consumo de alimentos por estrato de riqueza muestra que tanto las familias acomodadas como las más vulnerables consumen una dieta variada de acuerdo a los grupos alimentarios establecidos por el PCA; mostrando diferencias en la frecuencia de consumo principalmente de leguminosas, frutas, carnes y lácteos. Y en todos los casos se llegan a cubrir los alimentos básicos, aceite/grasas, verduras (Gráfico 5).

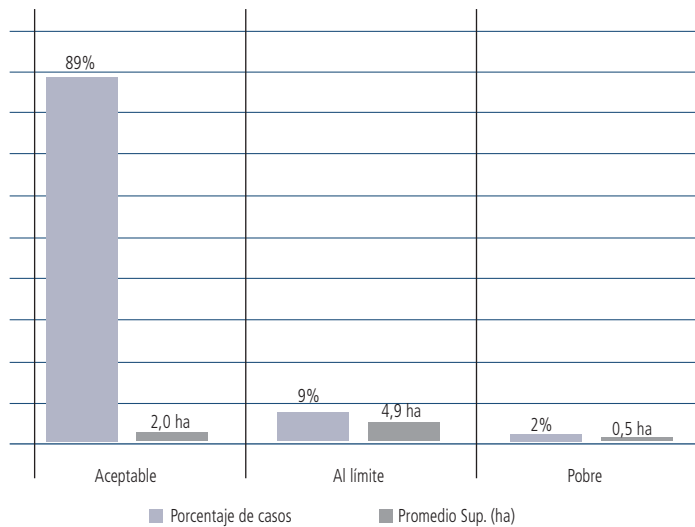
Gráfico 5
Consumo de alimentos por estrato de riqueza



Fuente: elaboración propia en base a encuesta familiar 2013.

Finalmente, al considerar la situación del consumo alimentario tomando en cuenta la superficie de tierras cultivables que poseen las familias, no se distingue una relación directa entre el tamaño de las parcelas por hogar y un mayor o menor puntaje en el consumo de alimentos. Así, el 2% de los hogares con un nivel pobre de consumo alimentario poseen en promedio media hectárea cultivable. Sin embargo, los hogares que se sitúan en un nivel de consumo alimentario adecuado o aceptable (89%) poseen 2 ha en promedio y aquellos hogares que se encuentran con un nivel medio de consumo alimentario (9%) o al límite según lo establecido por el PCA, poseen una mayor cantidad de tierras cultivables que asciende en promedio a 4,9 ha por hogar (Gráfico 6). Esto implica que tener más tierra no necesariamente significa consumir más y mejores alimentos pero poseer menos tierra si conlleva a una situación de mayor vulnerabilidad.

Gráfico 6
Puntaje del consumo alimentario según superficie cultivable



Fuente: elaboración propia en base a encuesta familiar 2013.

Estado del acceso alimentario

Existe una serie de indicadores para medir el acceso a los alimentos, entendido como la capacidad de la población para adquirir alimentos disponibles, ya sea mediante sus propias reservas, su producción, la transacción en el mercado u otras transferencias (PMA 2009).

En este caso, el indicador empleado ha sido la combinación de fuentes de alimentos (producción, compra, trueque, etc.) con las fuentes de ingresos monetarios (actividades económicas dentro y fuera del predio). Para ello, se han considerado tres elementos de análisis. El primero, mide el nivel de acceso cruzando las fuentes de alimentos e ingresos sugeridas por la metodología del PMA; el segundo contempla el autoabastecimiento alimentario considerando como variable central el uso de la tierra para la provisión de alimentos; y el tercero conjuga los niveles de gastos en alimentos y el número de actividades económicas generadoras de ingresos tomando en cuenta la diversificación económica como estrategia central de las familias de Villa Serrano.

En el primer caso, los resultados respecto al acceso alimentario para las comunidades estudiadas muestran que el 75% de los hogares tienen un nivel medio de acceso alimentario, un 24% de la muestra se sitúa en un nivel de acceso pobre y solo el 2% de los hogares posee un acceso establecido por el PMA como bueno. En el segundo caso, el acceso alimentario mejora considerablemente porque los hogares con un buen acceso alimentario suben a un 71%, mientras que aquellos que poseen un acceso medio se reducen a un 16% y los del nivel pobre bajan de un 24% al 13%.

Finalmente, en lo referido al tercer caso, los resultados muestran que el 44% de los hogares poseen más de tres actividades económicas que les permite diversificar sus ingresos, cifra que asciende al 91% de los casos en aquellos hogares que poseen más de dos actividades económicas. Por el lado de los gastos, más del 90% de los casos poseen un bajo nivel de gastos alimentarios situados por debajo del 60% del total de gastos del hogar. La combinación de ambas variables muestra como resultado que el 86% de las familias entrevistadas poseen un buen acceso alimentario mientras que el 14% restante tiene un nivel de acceso medio.

Estos resultados apuntan a que la agricultura familiar campesina en Villa Serrano es una variable importante en el acceso de alimentos y junto con la diversificación de las actividades económicas poseen impactos positivos respecto al acceso y consumo alimentario –explicado por la diversidad y frecuencia de alimentos–. Asimismo, existe disponibilidad de alimentos y en ningún caso se ha evidenciado la falta de alimentos para cubrir al menos el consumo familiar.

A partir del análisis sobre el acceso y el consumo alimentario, en cantidad y calidad de alimentos, queda por analizar cómo se traducen estas variables en cuanto al impacto en la seguridad alimentaria de los hogares encuestados.

Estado de la seguridad alimentaria

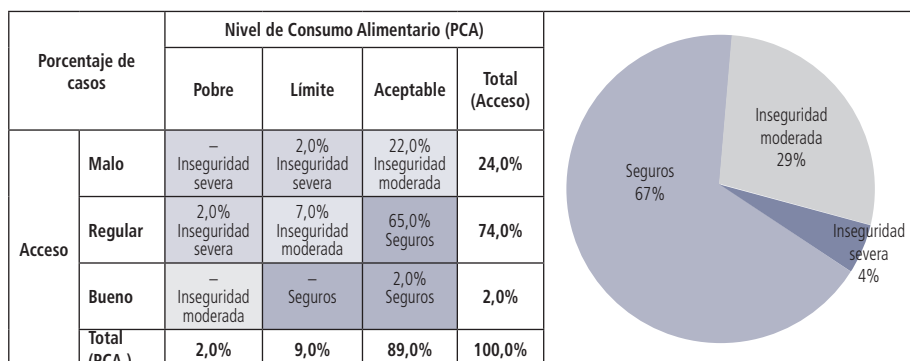
Para finalizar el análisis y comprender cuáles son las implicaciones en la seguridad alimentaria de las familias involucradas en el estudio, se combinaron las dos variables examinadas anteriormente; el consumo alimentario –diversidad y

frecuencia de alimentos– explicado por el indicador PCA, y el acceso a los alimentos expresado a partir de: a) fuentes de suministro de alimentos y b) fuentes de ingresos. Los resultados de esta combinación permiten establecer los niveles de (in)seguridad alimentaria de los hogares definida en tres categorías: inseguridad severa, moderada y hogares con seguridad alimentaria o seguros, de acuerdo a la definición del PMA.

Los resultados evidencian que el 67% de los hogares alcanzan la seguridad alimentaria explicada por un nivel de acceso alimentario regular y bueno, y un consumo de alimentos aceptable respecto a la frecuencia y diversidad de los mismos; un 29% de los hogares posee una moderada inseguridad alimentaria con un adecuado nivel de consumo pero bajo nivel de acceso alimentario y el restante 4% de la población encuestada presenta inseguridad alimentaria severa, con condiciones más desfavorables en ambas variables (Gráfico 7).

Si se toma en cuenta la autosuficiencia productiva, la situación de la seguridad alimentaria mejora considerablemente ubicando a un 84% de los hogares como “seguros” y el restante 16% asciende a un nivel de inseguridad alimentaria moderada. Con la inclusión de esta variable en el análisis no se encuentran hogares con inseguridad alimentaria severa. Finalmente, a partir del análisis de las actividades económicas y los gastos alimentarios tampoco se encuentran hogares con inseguridad alimentaria severa; en contraste, un 16% de los hogares presentan inseguridad alimentaria moderada y el restante 84% de los hogares alcanzan niveles seguros de alimentación.

Gráfico 7
Situación de la (in)seguridad alimentaria



Fuente: elaboración propia en base a encuesta familiar 2013.

En conclusión, estos resultados permiten afirmar que en una agricultura campesina se puede tener adecuados niveles de seguridad alimentaria y que frente a shocks de mercados podrían tener una capacidad de resiliencia más que en otras zonas que tienen seguridad alimentaria pero cuyos ingresos no provienen de la producción propia. A su vez, en una agricultura diversificada, el uso de la tierra para la provisión de alimentos junto a la ampliación de las actividades económicas como estrategias campesinas en las comunidades estudiadas de Villa Serrano permiten aminorar la vulnerabilidad de las familias expuestas a la situación de alta parcelación de la tierra, mostrando impactos positivos en términos alimentarios. Estos impactos se explican tanto por el consumo alimentario –frecuencia, diversificación y valor nutricional–, por el acceso de los hogares a los alimentos, y finalmente por los niveles de seguridad alimentaria adecuada y moderada de las familias involucradas en el estudio.

Discusión de los resultados encontrados

¿Qué es lo que persiste?

Los resultados sobre los cambios sociodemográficos y la estructura de la población dan cuenta que el alto flujo migratorio en el municipio se mantiene hasta la actualidad, repercutiendo en una alta proporción de población femenina en el área rural y, a su vez, una baja población joven debido a la tasa de migración neta negativa en los últimos 20 años. Estudios más recientes también muestran que esta realidad se ha mantenido sin transformaciones profundas en Villa Serrano respecto a la organización social y el desarrollo local que no ha sufrido cambios significativos en el municipio en el último quinquenio⁷ pero si existen mejoras considerables sobretodo en indicadores de salud.

En el caso de Villa Serrano, el fenómeno migratorio no es nuevo y como se ha demostrado ha sido parte de las estrategias de vida de los pobladores hace larga data hasta la actualidad combinando estrategias migratorias definitivas, temporales o flotantes que en la mayoría de los casos mantienen sus lazos con sus comunidades de origen; ya sea través del intercambio de productos, conocimientos o saberes, la transferencias de técnicas agrícolas o el envío de remesas desde otras ciudades del país u otros países.

Retomando el planteamiento introductorio, una mirada histórica más amplia sobre aquellos rasgos que persisten y las transformaciones en la economía campesina fue desarrollada por Berger (1979), quien compara al campesinado con el proletariado desde los primeros años de la revolución industrial hasta las

⁷ Para una mirada retrospectiva de la organización social y desarrollo local del municipio de Villa Serrano hace un quinquenio ver Sandoval (2010).

implicaciones más recientes de la expansión del sistema productivo contemporáneo⁸. Entre aquellos elementos que persisten hasta la actualidad se destaca que a diferencia de cualquier otra clase trabajadora, el campesino se ha sustentado a sí mismo al menos en términos alimentarios, ya sea insertado en el sistema económico de mercado o con un mínimo de protección del sistema político y social en ausencia del Estado, valiéndose de las relaciones comunales y familiares. En el segundo caso, esto ha permitido que se mantengan sus propias leyes y normas consuetudinarias, por usos y costumbres, sus propios conocimientos, su propia sabiduría transmitida oralmente y sus propias creencias y medicina.

Una muestra de esta continuidad se ha reflejado en las prácticas agrícolas tradicionales existentes en las comunidades estudiadas en Villa Serrano, basadas en la rotación de cultivos y descanso de las parcelas por largos periodos de tiempo, que junto a la intensificación de los flujos migratorios en ningún caso están alejados del todo de las transformaciones técnicas, sociales y económicas de la cultura dominante.

Heterogeneidad de actividades económicas

Si se analiza la forma en que han evolucionado las sociedades campesinas en la mayoría de los países del mundo, se observa que se está produciendo un aumento relativo de la importancia de las actividades mercantiles con respecto a la producción para el autoconsumo. De acuerdo a Bernstein (2010), la creciente mercantilización de las economías campesinas es consecuencia de la profundización del capitalismo en el área rural. Esto produce no solo una mayor demanda de dinero para hacer frente a nuevas necesidades y obligaciones que no estaban presentes en las sociedades campesinas de principios de siglo sino también una reorientación del perfil productivo de sus parcelas, donde se observa una participación creciente de productos destinados al mercado nacional e internacional.

Los resultados sobre la diversificación de actividades económicas en las comunidades estudiadas de Villa Serrano muestran que las familias campesinas han desarrollado un complejo tejido social entre sus miembros para llevar adelante el proceso productivo y ampliar las fuentes de generación de ingresos. Lo que Shanin (1976) describe en referencia a la unidad campesina, en la cual, la división interna del trabajo se vincula estrechamente a la estructura y composición de la familia y se relaciona con la edad y sexo de sus miembros. En ese sentido, el uso de fuerza de trabajo familiar, representa económicamente un bajo o casi nulo costo de oportunidad y es la naturaleza misma de las actividades campesinas lo que permite el uso de fuerza de trabajo marginal y a veces mano de obra no cali-

⁸ Un interesante ejemplo del crecimiento económico y sus connotaciones en la agricultura campesina se observa en Corea del Sur, donde la imagen de vitrina económica exitosa se contraponen con uno de los niveles de suicidios de campesinos más altos en el Asia, con tres suicidios de agricultores por día (Young 2012).

ficada (Shanin 1976). Por ello, en ese complejo tejido social, no solo los varones y jóvenes migrantes juegan un rol central en la generación de ingresos y el avance del proceso productivo sino –aunque poco visibilizados– los niños, las mujeres y los ancianos que se quedan en el campo, son un factor clave que favorece su persistencia no alejada de un contexto agrícola global en rápida expansión.

Esto implica que las actividades productivas y no productivas forman parte de una misma unidad difícil de separar, lo que Shanin describe como la naturaleza económica dual de las unidades campesinas; en la que el predio debe ser entendido como unidad de producción y residencia de sus miembros simultáneamente. En esta dualidad, es necesario destacar el hecho de que sus actividades productivas dependen principalmente del trabajo familiar no asalariado que les permite bajar sus costos de producción, y por lo tanto, situarse en una mejor posición para competir con productores en el mercado, a pesar de la productividad más alta alcanzada por estos últimos (Shanin 1976).

“Cuando (Shanin (1976) describe al campesinado ruso de principios de siglo, destaca que las unidades campesinas operan como unidades altamente cohesivas, que se apoyan sobre una estructura netamente patriarcal. En las sociedades campesinas contemporáneas, sin embargo, las relaciones intrafamiliares no son necesariamente cohesivas y frecuentemente sus miembros no están reunidos alrededor de una misma meta. En consecuencia, es frecuente el desarrollo de estrategias diferenciales, situación particularmente evidente en aquellas unidades con elevado nivel de mercantilización. En vez de grupos homogéneos dirigidos patriarcalmente, las unidades familiares campesinas aparecen hoy como entidades heterogéneas donde los miembros de la familia pueden compartir o no la misma estrategia. Sería un error, sin embargo, entender las relaciones intrafamiliares como un “campo de batalla” donde solo prevalece el egoísmo y la búsqueda de poder. Otras fuerzas, relacionadas con el parentesco, la amistad y la solidaridad, también actúan contrabalanceando a las primeras, y apostando por la reproducción social de la familia” (Cáceres 1995).

En el marco de un proceso de cambios que afecta y transforma en mayor o menor medida a las comunidades campesinas, proceso que no solo influye en instituciones, estrategias o cultivos, sino también en patrones de consumo alimentario y formas de satisfacerlos; si bien los cambios no obedecen enteramente a decisiones de los campesinos sino algunas veces a tendencias del mercado o en otros casos a problemas estructurales, esto no significa desconocer que perviven –adaptadas, transformadas o combinadas– algunas características históricas de las comunidades.

Estas relaciones sustentadas en la heterogeneidad de actividades económicas sumadas a los altos flujos migratorios, no necesariamente definitivos, se pueden expresar como muestras de una dinámica económica rural - urbana cada vez más conectada, más próxima y más interdependiente. Estos nuevos componentes, propios de las estrategias campesinas de fines del siglo XX, demandan con urgencia el re-conocimiento de los actuales escenarios agrarios que se alejan bastante de la idea del campesino autosuficiente de principios de siglo.

En este sentido, una muestra de la expansión de los cultivos de maní y ají orientados a mercados de exportación orgánica en Europa y Estados Unidos, poco visibles en las comunidades estudiadas pero que van adquiriendo más fuerza a nivel municipal en Villa Serrano, pueden dar luces de las posibles transformaciones en un futuro cercano. Lo cual, nos lleva a preguntarnos si la respuesta para la agricultura campesina en los valles y tierras altas del país, en contraposición a la expansión de cultivos *commodities* como la soya en tierras bajas, está siendo orientada a la expansión de cultivos alimentarios con certificación orgánica, como el caso de la quinua en el altiplano sur, el maní o el ají en los valles chuquisaqueños, que tienen como principal mercado su exportación; y aún más allá, si está siendo considerada como política de Estado con las implicaciones que esto conlleva.

Otro elemento central sobre el cual se asientan las estrategias de producción campesinas es el factor de riesgo. A diferencia de otros casos en los que la diversificación económica responde a una situación de selección de oportunidades en las que unas pueden generar mejores ingresos que otras (como por ejemplo, optar por la venta de fuerza de trabajo para el sector petrolero o minero en comparación a la venta de fuerza de trabajo a los dueños de las haciendas); en el caso de Villa Serrano, la evidencia sugiere que se trataría más bien de una aversión al riesgo, es decir, una diversificación económica explicada por la actividad que menos riesgo le genere en las condiciones dadas. Esto tomando en cuenta que los resultados en las comunidades estudiadas muestran que el 51,5% de los ingresos provienen del uso de la tierra agrícola y pecuario con los riesgos que ésta actividad implica y que en todos los casos las transferencias de remesas y bonos constituyen un complemento importante de los ingresos de los hogares. De acuerdo a la descripción de Berger (1979) “ninguna clase ha sido o es más consciente que el campesinado en lo que respecta a su economía. Ésta determina o influencia de forma consciente cada una de las decisiones que un campesino toma cotidianamente”.

Finalmente, a partir de los resultados encontrados cabe recordar que las estrategias campesinas basadas en la diversificación económica y productiva de acceso a cultivos de temporada de diferentes pisos ecológicos son un mecanismo fundamental que posibilita asignar mejor sus recursos y amortiguar

los efectos negativos causados por situaciones adversas tanto de origen natural como socioeconómico. Lo cual, a su vez, se traduce en los resultados sobre el bajo nivel de gastos destinados a alimentación.

Por otro, la evidencia también muestra que en las zonas más alejadas a los centros urbanos parecería ser mayor la persistencia de la agricultura campesina diversificada orientando su producción al autoconsumo, al trueque y a la venta; y obteniendo la provisión de alimentos vía producción propia, compra y trueque o intercambio de productos de diferentes zonas del lugar, lo que permitiría reducir el nivel de gastos alimentarios y dar un efecto amortiguador frente a shocks externos como el aumento en los precios de los alimentos.

¿Qué implicaciones tiene la propiedad agraria y la agricultura diversificada en la seguridad alimentaria de las comunidades estudiadas?

En un contexto en el que el crecimiento de la población y las crisis energética, climática, alimentaria del último quinquenio se cuestionan los modelos sistémicos de producción y de consumo y sus consecuencias a futuro, los resultados del estudio permiten constatar que la pequeña propiedad mixta –individual y colectiva– de la tierra junto con una agricultura campesina diversificada resulta determinante en los patrones de consumo alimentario en las comunidades estudiadas. Un segundo aspecto importante vinculado a la superficie de tierras cultivables que poseen las familias encuestadas, muestra que tener más tierra no necesariamente significa consumir más y mejores alimentos pero poseer menos tierra si conlleva a una situación de mayor vulnerabilidad.

Históricamente, las principales formas de acceso a la tierra en Villa Serrano fueron la dotación, la compra, y fundamentalmente la sucesión hereditaria. La Reforma Agraria de 1953 en la zona no creó la propiedad privada de la tierra sino que consolidó la parcela familiar y colectiva ampliamente aceptada y socialmente reconocida por la población. Algunos hacendados al saber que la reforma agraria llegaba vendieron las tierras a los comunarios, que luego fueron reconocidas por el Estado y entregadas a título de dotación. Pero en la práctica, los comunarios pagaron por acceder a sus antiguas tierras y no fueron dotadas gratuitamente durante la Reforma de 1953. En ese sentido, no fue una reforma “impuesta” desde el gobierno central sino un reconocimiento de lo que ya estaba ocurriendo en las comunidades (Cajías 2014).

En la actualidad, como se ha evidenciado la distribución de la tierra es relativamente equitativa en Villa Serrano sin una marcada diferenciación social en la población, ni concentración de este recurso en propiedades individuales, sin embargo, los conflictos por la tierra persisten a pesar de haber concluido el proceso de saneamiento, especialmente, en los casos de los migrantes que reclaman su derecho de acceso a la tierra, a través de la sucesión hereditaria.

Los flujos migratorios descritos, de la mano de las pequeñas extensiones de tierras aptas para el cultivo en la región provocan una continua parcelación de la tierra con el propósito de distribuir tierras para las generaciones jóvenes. A pesar de ellos, la diversificación previamente explicada en términos económicos y productivos, y ahora también en el manejo de la tierra –individual y colectiva– destinada a la producción de alimentos para el consumo propio y el mercado, ha permitido que los problemas estructurales mencionados no repercutan tan negativamente en los niveles de consumo alimentario ya sea en la frecuencia como en la variedad de la dieta y su aporte nutricional en las familias encuestadas.

De acuerdo al VAM (2012), Villa Serrano se encuentra entre los municipios de vulnerabilidad media a la inseguridad alimentaria, a la par de otros municipios industrializados como Cuatro Cañadas, capital sojera de Bolivia. Y los resultados del estudio, confirman esta situación mostrando efectos positivos en los niveles de consumo alimentario (PCA) y del aporte energético que los alimentos producidos y consumidos otorgan a las familias encuestadas tanto para aquellos hogares con un estrato de riqueza acomodado como para la mayoría de las familias más vulnerables.

Lo que llama la atención es que no hay una relación directa entre el tamaño de las parcelas familiares y una mejora en el puntaje de consumo alimentario pero en caso de una alta parcelación que no garantice el mínimo de superficie cultivable para las familias esta situación se revierte. Esto sucede tal vez porque una mayor disponibilidad y acceso a tierras no significa, necesariamente, un incremento en la porción de parcelas destinadas a la producción de alimentos para el autoconsumo de los hogares. Es decir, las parcelas adicionales podrían destinarse a nuevos cultivos para el mercado, mejorando sus fuentes de ingresos y por ende el nivel de consumo pero la evidencia muestra que con la producción para el autoconsumo y el acceso vía mercado de productos como azúcar, arroz, aceite, carne roja y vegetales o frutas que no se encuentran en la zona, se logra asegurar el nivel de consumo alimentario en cuanto calidad y cantidad de alimentos por lo que no hay situaciones de inseguridad alimentaria severa.

Como se ha mostrado, los resultados permiten afirmar que la agricultura familiar campesina comunitaria, basada en la diversificación productiva, la heterogeneidad de las actividades económicas y la propiedad mixta de la tierra poseen impactos positivos en el acceso a los alimentos, el consumo alimentario y finalmente en la seguridad alimentaria de los hogares encuestados. Lo cual sugiere que la diversidad productiva y económica es un concepto central para las familias campesinas y representa un alto potencial en el resguardo de la seguridad alimentaria local. Hay tres elementos que vale la pena resaltar en la interacción entre la tenencia de la tierra y la forma de producción y sus implicaciones alimentarias: primero, la comunidad juega un rol preponderante en la distribución de

las tierras a través de las normas comunales basadas en sus usos y costumbres; segundo, bajo este sistema los pequeños productores mantienen el control sobre los cultivos y los factores de producción; y tercero, de lo anterior se puede deducir que los niveles de seguridad alimentaria alcanzados en las comunidades, a su vez, incorporan el concepto de soberanía alimentaria reduciendo la dependencia de insumos y shocks externos como la volatilidad de precios de los alimentos, aunque aumentando su vulnerabilidad a condiciones climáticas adversas.

Conclusiones

La evidencia sugiere que la producción diversificada basada en la agricultura campesina se ha mantenido en Villa Serrano, al menos desde mediados del siglo XVI, aunque con estructuras y formas cambiantes de expansión de las relaciones de mercado en zonas próximas a los centros urbanos.

El estudio ha permitido detectar que el sistema de tenencia de la tierra, caracterizado por la pequeña propiedad mixta –individual y colectiva– y las formas de producción tradicionales han dado continuidad a una economía campesina diversificada en un entorno biofísico frágil, descubriendo algunas potencialidades que relativizan esa fragilidad, principalmente en términos alimentarios.

Consecuentemente, en las comunidades estudiadas no existe concentración de tierras en manos de pocos propietarios individuales, ni una marcada diferenciación social, al contrario se evidencia una distribución relativamente equitativa de la tierra en términos de superficie. Sin embargo, tomando en cuenta las características biofísicas de los diferentes pisos ecológicos se observa una estratificación social vinculada con la tenencia de la tierra siendo los agricultores de valle y cabecera de valle los que poseen mejores condiciones socioeconómicas en comparación con los agricultores de la zona alta del municipio, en particular, definido por el acceso al agua.

En la mayoría de los casos de las comunidades estudiadas en Villa Serrano, la principal fuente de ingresos monetarios se explica por el uso de la tierra, ya sea a través de la agricultura y la venta de productos agrícolas o del ganado y la venta de animales. Y en todos los casos, las remesas transferidas por las personas migrantes juegan un rol fundamental como fuente de ingresos de los hogares encuestados. a

La diversificación de actividades económicas y productivas se evidencia como una estrategia central de las familias estudiadas en Villa Serrano. Esta diversificación muestra que las familias campesinas han desarrollado un complejo tejido social que les permite llevar adelante el proceso productivo y ampliar las fuentes de generación de ingresos, por lo que los miembros de la familia –mujeres, jóvenes y ancianos– juegan un papel central para la continuidad del proceso

productivo, a tiempo de que en la zona de estudio, el campo tiene a envejecerse y feminizarse.

Para finalizar, se evidencia que la agricultura familiar diversificada permite mejorar la seguridad alimentaria de los hogares al incrementar la disponibilidad de alimentos locales, a tiempo de reducir los niveles de gastos alimentarios y la dependencia de la compra de alimentos, lo cual mejora su capacidad de resiliencia en un contexto de alta volatilidad de precios de productos agrícolas y dependen de condiciones climáticas favorables. En términos de acceso y consumo de los alimentos, hasta los hogares más vulnerables consumen una dieta variada y nutricionalmente adecuada de acuerdo a los grupos y valores alimentarios establecidos por el Programa Mundial de Alimentos.

En conclusión, estos resultados permiten afirmar que la agricultura familiar campesina, el uso de la tierra para la provisión de alimentos junto a la ampliación de las actividades económicas –agrícolas y no agrícolas– como estrategias campesinas en las comunidades estudiadas en Villa Serrano muestran impactos positivos en términos alimentarios. Estos impactos se explican tanto por el consumo alimentario –frecuencia, diversificación y valor nutricional–, como por el acceso de los hogares a los alimentos –vía ingresos, gastos y autosuficiencia productiva–, y consecuentemente, por los niveles de seguridad alimentaria adecuada y moderada de las familias incluso de las familias más vulnerables involucradas en el estudio.

Sobre la base de este análisis y sus implicaciones en términos alimentarios, al valor de la agricultura campesina en el caso estudiado se distingue por la diversidad tanto productiva, económica y social y el potencial por lo general poco reconocido que ésta heterogeneidad representa.

Referencias

- Altieri, M. A. (1995). *Agroecology: The Science of Sustainable Agriculture*. Westview Press.
- Baiphethi, M. N., y Jacobs, P. (2010). The contribution of subsistence farming to food security in South Africa. *Agrekon: Agricultural Economics research, Policy and Practice in Southern Africa*, 459-482.
- Berger, J. (1979). *Puerca tierra*. Alfaguara.
- Bernstein, H. (2010). *Class dynamics of agrarian change. Agrarian Change and peasant studies series*. Canadá: Fernwood.
- Busso, G. (2001). *Vulnerabilidad social: nociones e implicaciones de políticas para Latinoamérica a inicios del siglo XXI*. Santiago de Chile: CEPAL.
- Cáceres, D. (1995). *Estrategias campesinas en sociedades rurales contemporáneas*. Buenos Aires: UBA.
- Cajías, M. (2014). *Historia en contrapunto: El accionar del movimiento obrero e indígena campesino en la Bolivia* Contemporánea.
- Carrasco, A., Sánchez, N., y Tamagno, L. (2012). *Modelo agrícola e impacto socioambiental en Argentina: monocultivo y agronegocios*. La Plata: AUGM-Asociación de Universidades Grupo Montevideo y UNLP-Universidad Nacional de La Plata.

- Colque, G. (2014). *Expansión de la frontera agrícola. Luchas por el control y apropiación de la tierra en el oriente boliviano*. La Paz: TIERRA.
- CORDECH, C. R. (1989). *Plan de Desarrollo Sub Regional Chuquisaca Centro*. Sucre: CORDECH.
- de Sousa Santos, B. (2012). De las dualidades a las ecologías. La Paz: REMTE.
- DGP, D. G. (2009). *Estado de la situación sociodemográfica de los municipios de Bolivia (2005-2009)*. La Paz: PRESENCIA.
- Fundación TIERRA. (2013). *¿Comer de nuestra tierra? Estudios de caso sobre tierra y producción de alimentos en Bolivia*. La Paz: Fundación TIERRA.
- GMVS, G. M. (2006). *Plan de Desarrollo Municipal de Villa Serrano 2006-2010*. Sucre: Gobierno Municipal de Villa Serrano.
- Houtart, F. (2014). Brasil: 6to congreso del movimiento de los sin tierra en Brasilia: Una lucha contra la hegemonía creciente del agronegocio. *América Latina en Movimiento*.
- INE. (1992). *Censo nacional de población y vivienda 1992*. La Paz, Bolivia: Instituto Nacional de Estadística.
- INE. (2005). *Departamento de Chuquisaca: Estadísticas e indicadores sociodemográficos, productivos y financieros por municipio*. La Paz, Bolivia: Instituto Nacional de Estadística.
- INE. (2012). Recuperado el 6 de marzo de 2014, de Resultados Censo Nacional de Población y Vivienda 2012: <http://datos.censosbolivia.bo/binbol/RpWebEngine.exe/Portal?&BASE=CPV2012COM>
- Jaldín, R. (2013). La persistencia del minifundio: estrategias de vida y prácticas agrícolas tradicionales en Villa Serrano. En *¿Comer de nuestra tierra? Estudios de caso sobre tierra y producción de alimentos en Bolivia* (págs. 193-228). La Paz, Bolivia: Fundación TIERRA.
- Kay, C. (2001). Estructura agraria y violencia rural en América Latina. *Revista Mexicana de Sociología*, 159-195.
- Kearney, M. (1996). *Reconceptualizing the Peasantry: Anthropology in Global Perspective*. Estados Unidos: Westview Press.
- Limón, L. (2012). Ex dirigente ejecutiva de la Centralía Sindical Única de Trabajadores Campesinos Originarios de Belisario Boeto. (Entrevista realizada por R. Jaldín). Sucre, 18 de junio de 2012.
- Mora-Delgado, J. (2008). Persistencia, conocimiento local y estrategias de vida en sociedades campesinas. *Revista de Estudios Sociales, Universidad de Los Andes*, 122-133.
- Olarte, G. d. (1994). En las fronteras del mercado. Economía política del campesinado del Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- PMA. (2009). *Manual para la evaluación de la Seguridad Alimentaria en Emergencias*. Roma: PMA.
- Rivera, S. (2013). Conversaciones del mundo. (Entrevista realizada por B. d. Santos). 16 de octubre de 2013.
- Sandoval, G. (2010). *Organizaciones de base y desarrollo local en Bolivia. Estudio en los municipios de Tiabuanacu, Mizque, Villa Serrano y Charagua*. La Paz: Danida.
- Shanin, T. (1976). *Naturaleza y lógica de la economía campesina*. Barcelona: Anagrama.
- Urioste, M. (2011). *Concentración y extranjerización de la tierra en Bolivia*. La Paz: Fundación TIERRA.
- Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, Foro Mundial de Alternativas, CLACSO, Centro JAINA y otros (2013). Seminario Internacional: ¿Porqué y cómo apoyar a las agriculturas campesinas en Latinoamérica actual? La Paz.

- Wahren, J., y Giarraca, N. (2011). Territorios en disputa: iniciativas productivas y acción política en Mosconi, Argentina. En O. S. Latina, *Reforma Agraria y lucha por la tierra en América Latina* (págs. 286-296). Buenos Aires: CLACSO.
- Westphal, S. (2002). When Change is the only Constant. *Ph.D. Dissertation. Dinamarca: Universidad de Roskilde.*
- Yoder, M. (1994). *Critical Chorology and Peasant Production: Small Farm Forestry in Hojancha, Guanacaste, Costa Rica.* Estados Unidos: Louisiana State University.
- Young, C. J. (2012). The current situation on the South Korean Agriculture. En F. Houtart, y W. Tiejun, *Peasant's agriculture in Asia.* Ruth Casa Editorial.
- Zoomers, A. (2002). *Vinculando estrategias campesinas al desarrollo.* La Paz: Plural.

Mercado o seguridad alimentaria, dilema de los pequeños productores agrícolas de Rurrenabaque

Mamerto Pérez L.¹

No obstante que la dotación de tierras fiscales a los colonizadores (hoy productores interculturales) en las tierras bajas del país se la hizo con expectativas explícitas de incrementar algunos rubros alimenticios para el mercado nacional, el Estado boliviano nunca se preocupó por evaluar su cumplimiento, siendo que esas expectativas tenían que ver en última instancia con la seguridad alimentaria nacional. Estos productores trazaron su propio derrotero con mayor o menor abandono de ese mismo Estado, hasta erigir su actual estructura productiva.

En un escenario de permanente amenaza de crisis alimentaria internacional y nacional, se hace más pertinente indagar algunos aspectos esenciales de ese olvidado encargo estatal a los productores interculturales. Pero obviamente el acercamiento debe realizarse con una perspectiva histórica, considerando las transformaciones rurales y la evolución de la noción de seguridad alimentaria. Este documento se adentra en ese propósito, ejemplarizado en la zona de colonización del municipio Rurrenabaque (departamento Beni).

Palabras clave: seguridad alimentaria, pequeña producción agraria, sustitución de importaciones, comunidades interculturales, transformaciones rurales y productivas, desarrollo territorial, mercado

Introducción

Contrariamente a las percepciones más comunes, la Reforma Agraria de 1953 no concibió expectativas y menos asignó roles de producción agrícola mercantil a la pequeña propiedad agraria, pues los fundamentos para su reconocimiento fueron esencialmente de orden social. La misma ley de Reforma Agraria de 1953, al definir este tipo de propiedad, asumió que –por su tamaño– solo estaba destinada a generar niveles de producción que permitiesen al campesino y su familia satisfacer racionalmente sus necesidades (Capítulo II, Artículo 7). En

¹ Investigador social aimara especializado en temas de desarrollo rural y agricultura. Tiene varias publicaciones al respecto. Ha trabajado con organizaciones nacionales de investigación como el CEDLA e internacionales como el Global Development and Environment (GDAE) at Tufts University. Actualmente es investigador y consultor independiente (m.perezphajsi@gmail.com).

cambio, a decir de Castillo y Campen (1981), cuando las autoridades gubernamentales comenzaron a concebir los primeros planes de colonización (a la conclusión del camino Cochabamba–Santa Cruz en 1953), no solamente lo hicieron en función de la escasez de tierras (que ya era patente en algunas zonas de la región andina), sino también de la necesidad de incrementar la producción nacional de alimentos, en concomitancia con la política de sustitución de importaciones de alimentos adoptada con la Revolución Nacional². Es decir, los campesinos andinos trasladados a las tierras bajas –además de producir para su propio sustento– debían también hacerlo para el mercado nacional, convirtiéndose “...en proveedores de productos esenciales en vez de consumidores” (Guevara 1955,104).

De ahí que los proyectos específicos de colonización que comenzaron a ser ejecutados con regularidad desde comienzos de los años sesenta en todo el país, no dejaron de incorporar expectativas de producción de alimentos. Por ejemplo, uno de los objetivos del “Proyecto de Desarrollo del Alto Beni” en el departamento de La Paz (ejecutado desde 1961) establecía “diversificar la economía del país, incorporando rubros de producción como el café, cacao, cítricos, caña de azúcar, arroz, etc.” (Loza y Méndez 1981,60). Casi simultáneamente fueron también incorporadas explícitamente en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 1962-1971 para las 100.000 familias que el Estado se propuso trasladar a “nuevas zonas del oriente” del país (Castillo y Campen 1981). Pero adquirieron carácter de política pública a través de las facultades atribuidas al Instituto Nacional de Colonización (INC) –creado en 1965–, ya que uno de los fines de los planes, programas y proyectos de colonización promovidos por esta entidad fue “impulsar la ampliación de ciertos rubros alimenticios de oferta deficitaria en el mercado interno (arroz, café, caña de azúcar, cítricos y maíz)” (Dandler 1984 citado por Pacheco 1998,126).

En consecuencia, las zonas de colonización –al menos las que fueron abiertas a ese proceso hasta mediados de los años ochenta, cuando se agotó el modelo de sustitución de importaciones– no solo respondieron a propósitos de alivio de la presión demográfica y de una mejora de las condiciones sociales de los campesinos andinos, sino a expectativas de producción de alimentos para el mercado nacional. En esos años no existía el término ni la noción de seguridad alimentaria, pero es evidente que esa concepción de la pequeña propiedad en las zonas de colonización respondía a una política alimentaria, por la que los productores no solo debían producir para su propio sustento, sino también para el resto de la sociedad. Esta concepción, en el entendimiento actual, equivale inequívocamente a la seguridad alimentaria.

2 La Ley de Reforma Agraria de 1953 concibió la colonización como solución al problema de la alta presión demográfica en ciertas zonas de la región andina, lo que generaba escasez de tierra y, como consecuencia, agudización de las deplorables condiciones sociales de la población campesina. Por otro lado, si bien concibió la necesidad de incrementar la producción nacional de alimentos para sustituir importaciones, ese rol debía cumplirlo exclusivamente la mediana propiedad.

Sin embargo, no se conocen documentos oficiales que hubieran ido evaluando el cumplimiento de esas expectativas. Los informes de trabajo que realizaban las entidades públicas encargadas del seguimiento de los planes y proyectos de colonización, no tenían ni cumplían ese propósito. Solo es posible tener una idea aproximada de la evolución productiva de algunas zonas hasta la década de los noventa a través de estudios realizados por ONG, que hasta esos años produjeron ese tipo de información.

Incluso en la actualidad es muy difícil hacerse una idea precisa acerca de lo que acontece en las zonas de colonización en términos de seguridad alimentaria, y mucho menos de su aporte productivo. Los índices oficiales de desnutrición y de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria (VAM) a escala municipal pueden dar solo una idea al respecto, ya que usualmente esos ámbitos geográficos no coinciden con las áreas de las zonas de colonización. Del mismo modo, la información oficial disponible respecto a los aspectos productivos –por ejemplo, los planes de desarrollo municipal (PDM) y las estadísticas departamentales de producción generadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRT)– proporciona solo un acercamiento general, insuficiente para establecer la contribución específica de esas zonas a la seguridad alimentaria nacional.

Estos vacíos, más el contexto actual del debate internacional y nacional sobre el rol y la importancia de la pequeña propiedad agraria en la producción de alimentos, justifican la búsqueda de una aproximación más pormenorizada a las zonas de colonización, tratando de identificar los términos en los que están respondiendo (o no) a las expectativas que justificaron su acceso a tierras fiscales. Este ensayo se ha propuesto ello, enfocándose en la zona de colonización de Rurrenabaque, ubicada en el municipio del mismo nombre (cantón, hasta 1994), provincia Ballivián del departamento de Beni. En consecuencia, el marco en el que se efectúa esta aproximación analítica está definido por la búsqueda de respuestas a las siguientes interrogantes:

- ¿Cuáles han sido las bases y/o las causas políticas y agrarias para el cumplimiento o no de las expectativas estatales en términos de contribución de la pequeña propiedad agraria a la seguridad alimentaria nacional y local en el caso de Rurrenabaque?
- ¿Cómo influye la concepción de desarrollo y de seguridad alimentaria en la valoración de esa contribución?

El estudio se enfoca en la población intercultural de Rurrenabaque, pero en los momentos y aspectos necesarios abarca el ámbito municipal, puesto que el desarrollo de la zona de colonización no ha estado aislado de este en-

torno. La medición de la seguridad alimentaria toma como base una propuesta metodológica del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para identificar el estado de la (in)seguridad alimentaria en contextos de vulnerabilidad. Se ha recurrido a dos fuentes de información. La primaria, levantada mediante boletas estructuradas aplicadas en una muestra de sesenta hogares seleccionados en función de su acceso físico y social (aceptación de las autoridades comunales), centrada en datos para la medición de indicadores de acceso y consumo alimentario, y de otros relativos a los activos de medios de vida de los hogares. Empero, por el carácter de esta muestra, los datos obtenidos no necesariamente son representativos del total zonal y/o poblacional del área estudiada. También se realizaron algunas entrevistas con autoridades municipales, funcionarios de ONG y personas clave del municipio de Rurrenabaque. Las fuentes secundarias han sido consultadas para los aspectos históricos y para solventar en alguna medida las necesidades de información que fueron surgiendo como consecuencia del adentramiento en la temática.

El contenido del documento se ordena en tres secciones. En la primera se presenta los resultados de la información procesada a través de tres apartados: en uno se ensaya la interpretación de los orígenes de la colonización en Rurrenabaque en su contexto natural, social y político; en otro se plantea una breve descripción del perfil socioeconómico actual del municipio; y en un tercer apartado se presenta la situación de la seguridad alimentaria de la población intercultural resultante de la estructura agraria, productiva y socioeconómica de la zona y del municipio. La segunda sección –la central– es eminentemente reflexiva y analítica; discute los hallazgos de la primera sección a la luz de las tesis implícitas contenidas en las interrogantes del estudio para, en última instancia, tratar de responder a la interrogante central: la contribución o no de la pequeña propiedad agraria a la seguridad alimentaria nacional y local en el marco de las bases de su desarrollo y de su contexto económico, productivo y agrario. El documento se cierra con una breve sección de conclusiones.

Configuración económica productiva y seguridad alimentaria de Rurrenabaque

Orígenes y desarrollo de la zona de colonización

Rurrenabaque fue abierta a la colonización a comienzos de los años ochenta, a la par del avance de la construcción del camino a esa localidad desde Yucumo; ha sido una de las últimas en la era del modelo de sustitución de importaciones. Su apertura coincidió con el inicio de la crisis de deuda externa que vivió la economía nacional y que derivó en la monumental inflación que se desató en 1982, lo que justificó la imposición del modelo de libre mercado en 1985. Por tanto, este

contexto ha sido afín a la conformación y el desarrollo de la estructura socioeconómica y la dinámica productiva de la zona de colonización de Rurrenabaque (y del municipio) al menos a través de los siguientes aspectos:

- la drástica reducción de recursos fiscales para sectores y programas estatales considerados poco prioritarios, que determinó una desatención estatal en la organización y funcionamiento de los proyectos de colonización ejecutados en esos años;
- la flexibilización como concepción de la acción estatal a partir de 1985, hecho que –sumado a la desesperación gubernamental por superar la crisis y retomar el crecimiento económico– condujo a las autoridades a desentenderse de los problemas sociales previos y/o los generados por el modelo, permitiendo que encontrasen soluciones transgrediendo derechos y normas; y
- la aplicación de medidas específicamente orientadas a imponer los fundamentos del modelo, una de las cuales ha estado directamente vinculada con el área rural del país: la liberalización del comercio agrícola, que implica la apertura del mercado nacional a las importaciones y obliga a insertar productos nacionales “competitivos” en mercados externos.

Pero también fueron (y son) parte fundamental del escenario en que nació la zona de colonización de Rurrenabaque los siguientes factores sociales y naturales locales preexistentes:

- La estructura socioeconómica del municipio con un estrato social de poder local descendiente de la población criolla que compartía el espacio geográfico con la población “camba” (descendiente del mestizaje español-indígena) y la indígena originaria (asentada en Rurrenabaque o viviendo en el entorno territorial), insertadas en actividades y posiciones subordinadas.
- Las limitaciones naturales en el plano de la producción agrícola porque en la zona de influencia de la carretera Yucumo–Rurrenabaque “...la capacidad de uso del suelo presenta algunas a muy severas limitaciones productivas, debido a la baja fertilidad, peligro de erosión y exceso de humedad, que reducen la elección de cultivos o requieren de prácticas especiales de conservación” (Robison y Mckean 1994 citado por SERNAP 2007).

Todos estos aspectos de orden político, social y ambiental marcan una diferencia fundamental entre Rurrenabaque y el proceso de apertura y consolidación de la colonización en Alto Beni (antesala de aquél) en los años sesenta y setenta. Así, en Rurrenabaque no se cumplió el plan inicial de al menos encarar una

colonización semi-dirigida; fue nulo el establecimiento de infraestructura social básica; y los mecanismos de control de los asentamientos se debilitaron y luego fueron permisivos.

En esas condiciones iniciales, los incentivos para la producción de algún cultivo comercial en Rurrenabaque fueron débiles. Por tanto, los primeros colonizadores que permanecieron en la zona básicamente producían para el autoconsumo, en superficies pequeñas, esperando una viabilidad comercial de la producción agrícola basada en la conclusión de la construcción del camino. Pero antes de que llegase ese momento, a fines de los ochenta apareció una poderosa opción económica no agrícola, afín al potencial natural de Rurrenabaque: la extracción de madera. Es que a los ojos de los gobernantes de ese entonces y de la lógica del modelo adoptado en 1985, este producto mostraba potencial de exportación, así es que decidieron fortalecer su “competitividad” a través de la flexibilización de facto de normas y controles ambientales, sociales y tributarios³. Con esas condiciones, Rurrenabaque se convirtió en un polo de atracción potente para las empresas madereras y otros actores subsidiarios e intermediarios⁴. A falta de una mejor opción productiva –la conclusión del camino en 1991 no sirvió de mucho a ese propósito– la zona de colonización en general fue parte de la “fiebre” extractiva que se prolongó en su fase más intensa más o menos hasta mediados de los noventa, con todos los ingredientes que el contexto legal e institucional flexibilizado lo permitió.

Por consiguiente, la etapa verazmente productiva de Rurrenabaque recién comenzó en las postrimerías del “auge” maderero, a medida que se fue decantando y quedaron o llegaron los productores agrícolas, y cuando la Reserva de la Biósfera–Tierra Comunitaria de Origen Pílon Lajas (RB–TCO Pílon Lajas) comenzó a consolidarse, estableciendo un límite con el área de la colonización⁵. Sin embargo, esa etapa se inició también en condiciones poco favorables para la agricultura porque:

- ya se había establecido los límites productivos de los cultivos tradicionales en la zona (arroz, plátano, yuca, maíz y cítricos), por la escasa aptitud de los suelos;

3 Kainowitz y otros (1997, citado por Pacheco) sostiene que entre 25% y 75% de (la extracción y) las exportaciones de madera registradas entre 1984 y 1991 pudieron haberse debido a las políticas de libre mercado. Es de suponer que en la década de los noventa -la más intensa- los efectos fueron mayores.

4 Como lo sugiere Pavez (1998, citado por SERNAP, 2009), la localidad de Rurrenabaque tampoco fue ajena a esta etapa cuando sostiene que los “motosierristas” y los “cartoneros” operaban ilegalmente para capitalistas de la región.

5 Pílon Lajas fue reconocida como área de reserva de la biósfera por la UNESCO en 1977, pero su reconocimiento legal y demarcación física (además de TCO de los pueblos indígenas T’Simane, Mosestén y Tacana) proviene de 1992. Tiene una superficie aproximada de 4.000 Km² y abarca partes de los territorios de los municipios Rurrenabaque y San Borja (departamento del Beni), y Apolo y Palos Blancos (departamento de La Paz). De acuerdo a SERNAP (2007), en el caso de Rurrenabaque abarca entre 38,8% y 46,7% de su territorio municipal, ya que en parte corresponde a una zona en litigio con el municipio de Palos Blancos.

- la liberalización del comercio interno de productos agropecuarios había comenzado a inducir el desplazamiento de la producción nacional del arroz a zonas más “competitivas”⁶, lo que suponía una amenaza para los productores de Rurrenabaque, ya que los rendimientos bajos de este cultivo (el más comercial de la zona en esos años) y los altos costos de transporte, lo hacían poco “competitivo”; y
- la etapa extractiva de la madera había dejado muchos predios a los que se podía acceder mediante caminos sin cobertura boscosa.

El único factor potencialmente favorable para la producción agrícola resultaba ser la posibilidad de crecimiento del mercado local debido a la fuerza que comenzó a cobrar en esos años la actividad turística vinculada al Parque Nacional Madidi, que estableció su base de ingreso en la pequeña ciudad de Rurrenabaque.

Perfil de la actual estructura socioeconómica del municipio

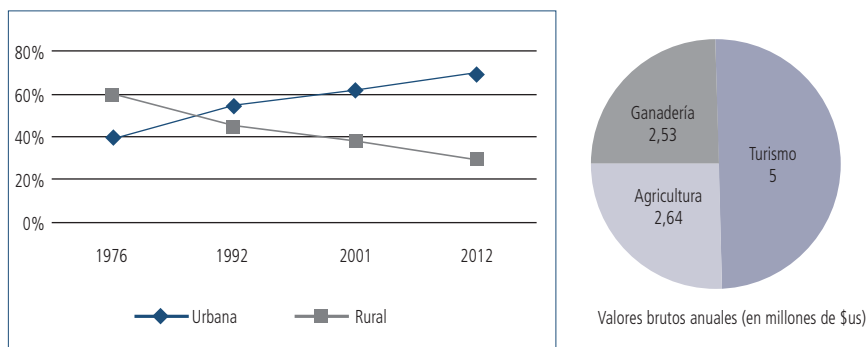
El municipio de Rurrenabaque territorialmente es uno de los dos más pequeños del departamento del Beni. Según el Censo 2012 tiene una población de 19.195 habitantes, de la que 70% es urbana (concentrada esencialmente en la capital municipal). La población rural (5.749 personas en 2012) está constituida básicamente por dos sectores sociales: el intercultural (70%) y el indígena originario (21%), además de varios sectores pequeños⁷ (9%), según estimaciones propias basadas en Villegas (1997, citado por DHV-CN, 2005) y el Censo 2012. A falta de información oficial, conjugando estas fuentes, se ha estimado en 4.050 personas la población intercultural en 2012, unas 600 más que en 2001, por lo que, considerando el área total aproximada que abarca la zona de colonización, su densidad poblacional sería de 0,2 personas por hectárea. Nuestro estudio también estableció que al menos 20% de la población intercultural es de origen “camba” y 10% nacida en la misma zona⁸.

6 Pérez (2003, 44) alude al “proceso de ajuste en la asignación de recursos internos” para explicar los cambios (desplazamientos) geográficos de ciertos cultivos a partir de la apertura comercial dispuesta en 1985. En el caso del arroz, su cultivo se concentró y amplió en el departamento de Santa Cruz y en el sureste de Beni, mientras que se fue reduciendo en las zonas de colonización del norte de La Paz (incluyendo Rurrenabaque), aspecto que es demostrado por Ortiz y Soliz (2007) para el período 1986 y 2006.

7 Entre las que estarían las actividades por cuenta propia en algunos pequeños núcleos poblacionales de la zona de colonización y el reducido sector empresarial ganadero.

8 Además están varias comunidades indígenas originarias que, por la compleja conformación de la zona de colonización, han quedado dentro de ella, aunque poblacionalmente no son significativas.

Gráfico 1
Municipio Rurrenabaque: Población según censos y participación sectorial en la economía



Fuente: elaboración propia en base a encuesta familiar 2013, INE y Gobierno Municipal de Rurrenabaque (2008) y (2011)

Nota: El cálculo del valor económico del turismo ha sido estimado con base en gastos promedio de los turistas durante su estadía en Rurrenabaque. En el caso de la agricultura corresponde al valor bruto de la producción, y en el de la ganadería se ha sumado el valor de la leche producida y el de las ventas de ganado en pie.

La economía municipal (con datos estimados a 2007) tiene tres pilares productivos: el turismo, la agricultura y la ganadería (Gráfico 1). El primero se asienta principalmente en actividades de la ciudad de Rurrenabaque (hotelería, alimentación, transporte, comercio, pequeña industria, artesanía, etc.). Su crecimiento está en función del flujo turístico que va en aumento; de acuerdo al Gobierno Municipal de Rurrenabaque (GMR 2011), entre 2003 y 2007 la cantidad de turistas creció de 16.681 a 26.689 personas extranjeras, mientras que las nacionales aumentaron de 11.816 a 19.648. Los otros dos sectores son eminentemente rurales y en conjunto tienen un valor algo mayor al del turismo (Gráfico 1). La base de ambos es la producción del sector intercultural, ya que solo 30% de la ganadería correspondería al empresarial, mientras que en la agricultura el sector indígena solo participa con 5% (GMR, 2011). Empero, en función de la magnitud de recursos que inyecta en la economía local, el turismo es la actividad más importante del municipio, por lo que, a pesar de la regresividad que caracteriza la distribución de los ingresos de esa actividad (GMR, 2002), sus alcances van mucho más allá de la generación de “350 empleos directos y más empleos indirectos en la capital y en la región” estimados por GMR (2011).

Situación de la seguridad alimentaria de la población intercultural

Contexto productivo

Las principales actividades productivas de la zona de colonización son la agricultura y la ganadería. Los servicios (comercio y transporte) y la extracción de madera tienen alguna importancia pero no existen estimaciones acerca de su valor económico. La producción agrícola puede ser dividida en tradicional y no tradicional en función de su antigüedad en la estructura productiva de los colonizadores.

La producción tradicional comprende los cultivos de arroz, plátano, yuca, maíz y frejol, aunque el maíz es destinado mayormente a la alimentación del ganado doméstico (GMR 2011) y el frejol nunca tuvo un gran arraigo. Contrariamente a las tendencias de reducción de esta producción en la gran región de colonización del norte de La Paz –Ortiz y Soliz (2007) lo demuestran para el caso del arroz– en Rurrenabaque sigue creciendo. En efecto, GMR (2008) señala que la superficie cultivada de arroz, plátano y yuca aumentó de 2.664 a 3.644 ha entre 2001 y 2007. Sin embargo, solo una parte mínima de estos incrementos obedece al crecimiento del consumo de la población intercultural (porque apenas aumenta su cantidad), por lo que su destino mayor sería el comercio. GMR (2011) sostiene que el arroz se vende en Caranavi y Yucumo (desde donde posiblemente una parte llegue al mercado de La Paz); el plátano en Riberalta y Trinidad; y la yuca en pueblos de municipios cercanos. Sin embargo, si bien ninguna fuente plantea estimaciones cuantitativas acerca del significado del mercado urbano de Rurrenabaque para esta producción, tiene que ser muy importante –quizás más que los mercados extra municipales– considerando su tamaño poblacional y el movimiento turístico.

La producción agrícola no tradicional consiste básicamente en hortalizas (tomate, lechuga, pepino, cebolla, pimiento, repollo, rábano, berenjena y otros de menor importancia), que se cultivan en especial durante el invierno, y en frutas (papaya, sandía, cítricos, palta, mango, piña, coco, maracuyá, melón, carambola, copuazú y otros), aunque algunos como los cítricos y la papaya se producen desde el inicio de la colonización con fines de autoconsumo. También se debe incluir como parte de esta producción los pastos –el cultivo de mayor extensión en la zona, de acuerdo con GMR (2002)– y el cacao, cuya extensión está creciendo, según GMR (2011). Las hortalizas y las frutas se producen en pequeña escala y no de manera generalizada, y su mercado es principalmente la ciudad Rurrenabaque, aunque algunas con cierto arraigo en el consumo de los productores (como los cítricos, la papaya, la sandía, el tomate y la lechuga) también se destinan al autoconsumo y a un mercado “interno” (entre productores).

La crianza de ganado vacuno es una actividad no tradicional en la zona de colonización. Surgió aproximadamente a mediados de los noventa (95% de los

encuestados manifiesta que se dedica a ella más o menos desde esos años). Al inicio esta actividad se estableció en los predios desboscados durante el “auge” maderero, pero luego fue abarcando otros predios en barbecho (y quizás algunos desboscados para el efecto). GMR (2008) evidenció a través de una muestra que el tamaño promedio del hato familiar evolucionó de cuatro cabezas en 2001 a 40 en 2007 en las comunidades asentadas sobre la carretera; nuestro estudio encontró que 12% de la muestra tiene entre 40 y 100 cabezas por hogar, mientras que 70% tiene entre 0 y 19 cabezas. Por último, a decir de GMR (2008), los productores están transitando a la especialización de doble propósito (carne/leche, en unos casos y carne, en otros) y que entre 2001 y 2007 la producción de leche subió de 2.912 a 14.490 litros/día. La misma fuente añade que la leche fresca se comercializa casi en su totalidad en la ciudad de Rurrenabaque, pues su consumo en la población intercultural no tiene aún arraigo, en tanto que el ganado en pie (para carne) se comercializa en La Paz, a través de intermediarios.

Contexto económico

No existen datos oficiales sobre las condiciones sociales actuales de la población del municipio de Rurrenabaque, y menos de la intercultural. De acuerdo a información de los censos nacionales de 1992 y 2001, la incidencia de población pobre por necesidades básicas insatisfechas (NBI) en el municipio fue 85,5% y 82,5% respectivamente, mientras que la incidencia de pobreza extrema por línea de ingresos en 2001 fue 41,2% y el índice de desarrollo humano (IDH) en 2005 fue 0,66. En su momento, estos indicadores ubicaban a Rurrenabaque en un mejor sitio que la mayoría de los municipios rurales del país, pero probablemente expresaban mayormente la situación de su área urbana, que ya desde los años ochenta comenzó a ser dominante poblacionalmente.

Tampoco existe información oficial respecto a las condiciones económicas de la población intercultural, pero la información primaria obtenida por el estudio ha permitido un buen acercamiento al tema. En primer lugar, se ha logrado construir tres categorías de productores con base en la magnitud de su riqueza: “vulnerable”, “medio” y “acomodado”⁹. Con esta base, apelando a procedimientos indirectos¹⁰ –por tanto, aproximados– se ha logrado establecer que el ingreso monetario promedio por productor del estrato “acomodado” (8% de los productores de la muestra) es Bs. 69.600 anuales, el del estrato “medio” (58% de los product-

9 La construcción considera varios factores objetivos, pero ponderados diferenciadamente. Los de mayor valor son el tamaño del hato ganadero, la cantidad de fuentes de ingresos extra-prediales y la calidad de la vivienda; y los de menor valor son la propiedad de vehículos, el tamaño del predio y la tenencia de bienes domésticos sofisticados. Se ha constatado que el tamaño del predio es afín al del hato ganadero, por ello se ha excluido una consideración específica de ese factor.

10 Se ha partido de la información sobre promedios de gastos monetarios mensuales de los hogares en alimentación (en general y por estratos). Estos datos se han aplicado a la información de la estructura porcentual de gastos, “monetizando” los gastos en alimentación para determinar el valor monetario de los gastos totales, que es simultáneamente los ingresos monetarios totales de los hogares.

res) Bs. 48.000, y el del estrato “vulnerable” (33% de los productores) Bs. 32.400, en tanto que el promedio zonal es Bs. 44.000.

Ahora bien, si se acepta que el tamaño promedio de los hogares interculturales de Rurrenabaque es de cinco miembros, se obtiene que el ingreso monetario per cápita anual de los productores del estrato “vulnerable” es aproximadamente \$us 1.000 y el del “acomodado” \$us 2.000. Y si se aplica en estas magnitudes los parámetros internacionales que definen la pobreza extrema y la indigencia (\$us 2/día y \$us 1/día por persona, respectivamente), se obtiene que ningún productor de la muestra enfrenta alguno de estos flagelos (los del estrato “vulnerable” dispondrían \$us 2,8 diarios por persona). Es más, si se considera el valor de la producción agropecuaria que se auto consume como parte de los ingresos, se puede concluir que la situación de los productores interculturales de Rurrenabaque está alejada de la pobreza extrema, sin que ello niegue la posibilidad de que algunos hogares puedan estar en esa condición. Empero, esta constatación no debe conducir a asumir que los productores del estrato “acomodado” (que dispondrían \$us 5,6 diarios por persona), deban ser considerados millonarios, aunque algunos tienen condiciones para ser calificados como tales.

Cuadro 1
Fuentes de los ingresos monetarios (en porcentajes)

Fuente	General	Estrato		
		Vulnerable	Medio	Acomodado
Venta de productos agrícolas	27,3	30,6	26,8	22,8
Venta de ganado	20,8	4,4	24,6	38,6
Jornales	14,8	20,6	15,1	0
Otras actividades económicas*	9,5	13,7	6,5	15,7
Bonos	9,0	13,7	8,1	2,8
Comercio minorista	6,7	6,2	8,1	0,0
Venta de recursos naturales	4,5	3,1	4,6	7,1
Remesas	3,8	3,7	3,2	7,1
Transporte propio	2,0	0,6	2,2	4,3
Apicultura	0,8	1,2	0,8	0,0
Sueldos y salarios	0,8	2,2	0,0	1,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: elaboración propia en base a encuesta familiar 2013.

* las actividades de mayor peso son los servicios relacionados con equipos y maquinaria; otras actividades menos importantes son la artesanía y la medicina naturista; y hay casos aislados de aserraderos y venta de plantines.

Las fuentes de los ingresos monetarios de los productores interculturales son diversas y también difieren de acuerdo al estrato de riqueza (Cuadro 1). Se puede destacar varios aspectos al respecto, pero son relevantes los siguientes para fines del estudio: i) la importancia de la agricultura en la generación de ingresos es menor a la esperada en una zona teóricamente agrícola, quizá por ello es más bien distintiva de los productores del estrato “vulnerable”; ii) la diversificación de fuentes de ingresos es más sostenible en el estrato “acomodado” porque se basa en actividades productivas; por el contrario, en el estrato “vulnerable” solo una de las principales fuentes es productiva (la agricultura), pues la otra importante es el empleo en jornaleo; iii) si se relaciona la estructura de las actividades que generan los ingresos de los productores del estrato “vulnerable” con el nivel de esos ingresos obtenidos anteriormente, se puede deducir que la agricultura y el jornaleo son actividades poco rentables, de ahí que los bonos en este estrato adquieren más importancia que en los otros; y iv) la ganadería y el empleo extra predial (jornaleo) desempeñan un rol fundamental en la diferenciación económica de los productores, la una como signo de poder económico y el otro como indicio de necesidad (especialmente de los productores “vulnerables”).

Cuadro 2
Destino de los gastos monetarios
(En porcentajes)

Gastos en	General	Estrato		
		Vulnerable	Medio	Acomodado
Alimentación	30,3	36,5	28,4	24,0
Educación	14,3	11,8	15,0	18,0
Insumos y equipos agrícolas	11,2	10,6	10,8	16,0
Transporte	9,3	11,8	9,2	2,0
Salud	8,0	8,8	8,2	4,0
Ropa	8,0	11,8	6,3	8,0
Servicios básicos	7,3	5,9	7,9	8,0
Insumos ganaderos	6,7	0,0	9,7	6,0
Pago de crédito	2,8	2,8	2,6	4,0
Otros gastos	2,1	0,0	1,9	10,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: elaboración propia en base a encuesta familiar 2013.

Por último, el destino de los gastos monetarios es también diverso (Cuadro 2), empero sobresalen los siguientes aspectos: i) los gastos en alimentación en general no son altos y su mayor proporción en el estrato “vulnerable” es lógica, sin

embargo, aunque en términos absolutos los del estrato “acomodado” gastan más en ese rubro (quizás porque apelan mayormente a la compra y/o consuman más) no significa, necesariamente, que coman mejor; ii) sorprende la mayor importancia de los gastos agrícolas que los ganaderos realizan en el estrato “acomodado”, pero podría deberse al tamaño de sus cultivos de pastos; iii) el mayor gasto del estrato “acomodado” en educación puede ser signo de una profundización de la diferenciación económica y social con los otros estratos, por la vía de una mayor capacitación de sus miembros.

Contexto agrario

La actual estructura agraria en la zona de colonización de Rurrenabaque dista mucho de la formalmente establecida por las normas y expectativas gubernamentales al inicio de la colonización. En aquel momento las autoridades decidieron que las dotaciones familiares fueran en base a núcleos de 1.200 ha, cada uno de 40 lotes de 25 ha, un área comunal de 100 ha y un área verde de 100 ha (GMR 2002), aunque hubo algunas dotaciones de 50 ha, especialmente en las comunidades cercanas a la localidad de Rurrenabaque¹¹. En cambio, en la muestra entrevistada, nuestro estudio encontró que menos de un tercio de los productores tiene 25 ha (Cuadro 3), y aunque es posible que entre los que tienen más que esa cantidad están algunos que ya accedieron a ese tamaño desde el inicio de la colonización (los que recibieron 50 ha y/o más de un predio de 25 ha), es indudable que la conformación de un estrato de productores que disponen de extensiones mayores a 25 ha es relativamente nueva. Por tanto, se puede decir que la actual estructura agraria de la zona tiende a la concentración.

Cuadro 3
Tenencia de tierra

Extensión del predio (en ha)	% de productores
Hasta 25	30,00
26-50	61,67
51-100	6,67
101-200	1,67

Fuente: elaboración propia en base a encuesta familiar 2013.

¹¹ De acuerdo a las estipulaciones de la ley de Reforma Agraria de 1953, las dotaciones de este tamaño correspondían a zonas de colonización del departamento de Santa Cruz. Por tanto, descartando alguna irregularidad, es posible que en algún momento las autoridades hayan decidido dotaciones de ese tamaño haciendo un paralelo de Rurrenabaque con aquel departamento.

Evidentemente esta estructura agraria, más la baja densidad demográfica de la zona, puede conducir a sospechar que la concentración de tierras obedece a un proceso de acaparamiento de tierras con fines de especulación. Empero, esa sospecha puede ser descartada al menos en parte si se considera el crecimiento de la actividad ganadera. Efectivamente, incluso asumiendo que todos los productores hubieran adoptado el sistema semi-extensivo, los requerimientos de tierra –una hectárea por cabeza como mínimo para un hato mediano de 30 a 40 cabeza– rebasarían en mucho el tamaño de un predio de 25 ha. Por tanto, la concentración de tierras (que no solo opera por vías formales como la compra, sino también por otros mecanismos informales como “al partir”, préstamo, etc.) estaría vinculada en gran medida al crecimiento de la ganadería, que influye en una menor presencia de productores en la zona (y, obviamente, en la baja densidad demográfica). Por el contrario, a pesar de su crecimiento, la producción agrícola no parece haber influido en estos cambios; más bien su relativo lento desarrollo al parecer fue uno de los factores que incentivó y dinamizó la actividad ganadera.

Indicadores de seguridad alimentaria

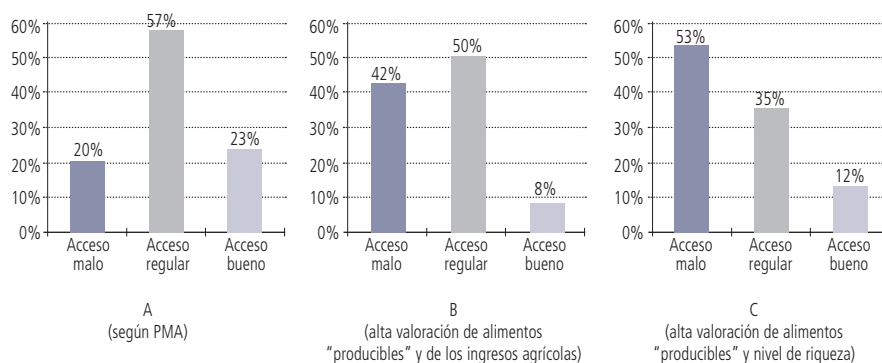
Como ya se ha señalado, para la valoración del estado de la seguridad alimentaria de la población intercultural se ha procesado la información primaria apelando a una metodología del PMA propuesta para identificar grupos de (in)seguridad alimentaria en contextos de vulnerabilidad¹². Sintéticamente la metodología se basa en la construcción de indicadores de acceso y consumo de alimentos. En el primer caso adopta el indicador Fuentes de Alimentos e Ingresos, que se construye asignando valores a esas fuentes de tal modo que, al ser procesados articuladamente, determinan las tres categorías de acceso alimentario: “malo”, “regular” y “bueno”. En el segundo caso adopta el Puntaje de Frecuencia de Consumo de Alimentos (PCA), que valora la cantidad (kilocalorías) y la calidad (nutrientes) de la dieta alimenticia semanal de los hogares, considerando los alimentos de su consumo usual distribuidos en los ocho grupos generalmente aceptados: básicos, azúcares, leguminosas, verduras, carnes, leche/queso, aceites, frutas¹³. De acuerdo a la metodología, el puntaje de consumo más bajo es 28 para casos como Rurrenabaque, por tanto, los hogares con un puntaje menor a este valor se ubican en la categoría de PCA “pobre”, los que tienen un puntaje entre 28,5 y 42 corresponden a la categoría “al límite”, y los que registran un puntaje mayor a 42 hacen parte de la categoría “aceptable”.

12 Para una descripción completa de esta metodología se puede consultar PMA: (2009).

13 En el caso de la población intercultural de Rurrenabaque se identificaron 21 alimentos de consumo más o menos generalizado y cotidiano.

Por último, el procesamiento articulado de los valores de los indicadores de acceso y consumo permite obtener los niveles de (in)seguridad alimentaria de la población considerada, diferenciando tres grados en función de las limitaciones o ventajas simultáneas en el plano de esas dos dimensiones: “severa”, “moderada” y “adecuada” (o segura).

Gráfico 2
Acceso alimentario de la muestra poblacional, según tipos de valoración de fuentes de ingresos y alimentos



Fuente: elaboración propia en base a encuesta familiar 2013.

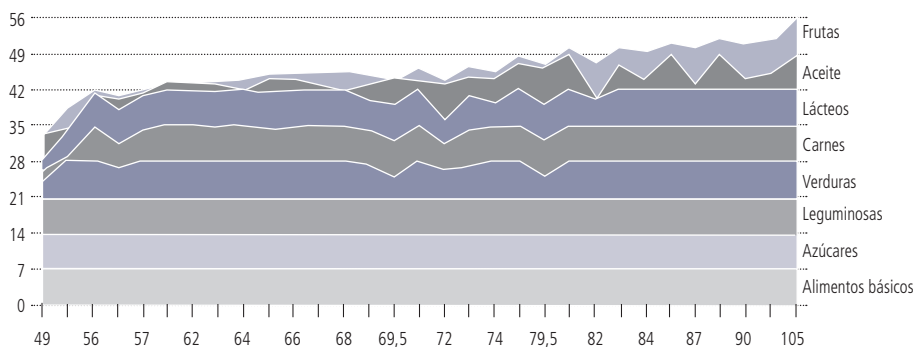
En el Gráfico 2 se presenta el indicador del acceso alimentario de la población intercultural de Rurrenabaque. El caso A representa el indicador aplicando los criterios de valoración recomendados por el PMA para Bolivia (mayor valor del empleo no agrícola que la venta de la producción agrícola o el empleo agrícola, como fuente de ingresos, y mayor valor de la compra de alimentos que su producción, como fuente de alimentos). En cambio, el caso B resulta de otorgar mayor valor a la producción propia de los alimentos “producibles” en la zona¹⁴, y de asignar un mismo valor al empleo no agrícola y a la venta de la producción agrícola y el empleo agrícola. Y el caso C también se basa en la ponderación positiva de la producción propia de los alimentos “producibles”, pero considera al nivel de riqueza en lugar de las fuentes de ingresos monetarios.

Como se puede deducir, el factor que explica la diferencia entre los casos A y B es la mayor o menor importancia que se otorga a la producción propia de alimentos “producibles” en la zona, puesto que la modificación introducida en las fuentes de ingreso tiene poco peso. Por tanto, a través de esos casos se puede

¹⁴ Los alimentos “producibles”, al ser cultivados por varios productores de la zona, quiere decir que pueden serlo por los demás. Se trata de los siguientes: arroz, yuca, carne de res, carne de pollo, cítricos, plátano/postre, papaya, huevo, poroto, cebolla, tomate y leche/queso. Obviamente, la compra de los alimentos “no producibles” tienen una ponderación también alta.

ver que, si se privilegia la compra de alimentos –incluso de los “producibles” en la zona–, solo una mínima proporción de los productores encuestados tendría un acceso pobre (caso A). Pero si se considera importante la producción propia de al menos los alimentos “producibles” el porcentaje de productores con acceso “pobre” es alto (caso B), puesto que la compra de alimentos –peor si abarca incluso los “producibles”– estaría determinando la vulnerabilidad del acceso. El caso C muestra que la proporción de productores con “acceso” pobre es mucho mayor si se considera importante la producción propia de los “producibles” y el nivel de riqueza de los productores; quiere decir que el menor nivel de riqueza (que no incluye los ingresos monetarios, sino el patrimonio material de las familias) afecta el acceso a alimentos mucho más que considerando solo los ingresos monetarios.

Gráfico 3
Puntaje de consumo alimentario (PCA)



Fuente: elaboración propia en base a encuesta familiar 2013.

El Gráfico 3 presenta los resultados de la medición del consumo alimentario (PCA). El total de los productores de la muestra expresa puntajes mayores a 42 (eje horizontal del Gráfico), por lo que se ubican en la categoría “aceptable”, esto es, que su dieta alimenticia es buena en términos de cantidad y calidad, obviamente la de algunos mucho más. Ciertamente no se puede descartar errores en el levantamiento de la información de base que hayan conducido a ese resultado, pero esa posibilidad puede ser descartada considerando la información sobre la frecuencia de consumo de cada alimento (Cuadro 4). Esta información muestra, por ejemplo, el alto consumo de los alimentos que corresponden al grupo de carnes (sumándolos se obtiene que el consumo de este grupo es mucho mayor a siete días en el promedio general); si a este consumo se agrega el de todos los alimentos del grupo leguminosas, se obtiene tres días en el promedio general; y haciendo lo

mismo con los lácteos, se obtiene dos días. La suma total de estos tres grupos es ya suficiente para obtener una buena condición del consumo alimenticio.

Cuadro 4
Promedio de días de consumo de alimentos, general y por estratos

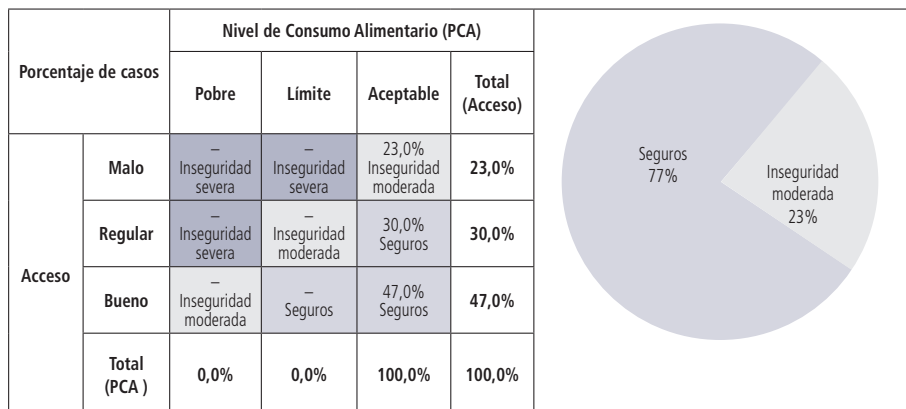
	Alimentos	General	Vulnerable	Medio	Acomodado
1	Arroz	6,43	6,35	6,43	6,80
2	Yuca	2,82	3,30	2,57	2,60
3	Papa/chuño	5,12	4,85	5,14	6,00
4	Fideo	2,85	2,50	3,06	2,80
5	Pan	4,08	4,40	3,74	5,20
6	Carne de res	2,80	2,90	2,80	2,40
7	Carne de pollo	1,33	1,05	1,46	1,60
8	Sardina/pescado	1,02	1,15	0,94	1,00
9	Carne de monte	1,02	2,20	0,46	0,20
10	Huevo	3,88	3,80	4,17	2,20
11	Naranja/cítricos	3,68	3,65	3,83	2,80
12	Plátano/postre	5,55	6,10	5,49	3,80
13	Papaya	1,57	0,95	1,63	3,60
14	Poroto	1,17	1,05	1,23	1,20
15	Haba seca	2,08	1,70	2,29	2,20
16	Cebolla	6,77	6,75	6,83	6,40
17	Tomate	5,07	4,95	4,97	6,20
18	Zanahoria	5,68	6,20	5,54	4,60
19	Azúcar	6,67	6,65	6,63	7,00
20	Aceite	6,98	6,95	7,00	7,00
21	Leche /queso	2,37	1,45	2,80	3,00

Fuente: elaboración propia en base a encuesta familiar 2013.

La información del Cuadro 4 es también reveladora de otros aspectos interesantes: i) el consumo de carne vacuna (alimento no tradicional en la zona) es similar en los tres estratos, su precio relativamente bajo podría explicar esta situación; ii) el huevo y la carne de monte son un recurso alimenticio muy efectivo del estrato “vulnerable”, aprovechando su acceso casi gratuito; iii) la yuca y el plátano (alimentos tradicionales en la zona) parece que se encaminan a convertirse en alimentos de los productores “vulnerables”, pues su consumo entre ellos es más alto; iv) el tomate, la leche/queso y la papaya (alimentos no tradicionales en la zona) tienen un mayor arraigo en el estrato “acomodado”, quizás porque los precios de los dos primeros están más a su alcance, y el tercero es asumido como signo de distinción; v) la papa y el pan, por sus relativos altos precios en la zona,

están más al alcance de los “acomodados”, por lo que también marcan un rasgo de diferenciación socioeconómica entre productores.

Gráfico 4
Índices de seguridad alimentaria de la muestra poblacional



Fuente: elaboración propia en base a encuesta familiar 2013.

Por último, en el Gráfico 4 se presenta los niveles de seguridad alimentaria que registra la población intercultural de Rurrenabaque, resultado del procesamiento de los indicadores del consumo (PCA) y del acceso que pondera la producción de los alimentos “producibles” y asigna valores positivos a algunas fuentes de ingresos (caso B). Las magnitudes obtenidas no son sorprendentes, ya que en la metodología del PMA el valor del PCA es decisivo en la determinación de la (in)seguridad alimentaria, de tal modo que ni siquiera la reducida proporción de productores que tienen buen acceso en el caso B (12%) afecta en gran medida los resultados finales. En consecuencia, la prácticamente óptima situación de la seguridad alimentaria en Rurrenabaque debe ser revalorada considerando el contexto productivo, económico y agrario de la zona de colonización.

¿Cuál es el horizonte de la seguridad alimentaria en Rurrenabaque y de su contribución a la disponibilidad nacional de alimentos?

Si se sitúan los resultados de la seguridad alimentaria de la zona de colonización de Rurrenabaque en su contexto productivo y agrario, y en el contexto histórico, económico y demográfico del municipio, es posible concluir que esos resultados no son circunstanciales, sino que responden a condiciones estructurales que se han venido configurando sobre la base de dos pilares económicos: el intenso flu-

jo turístico con destino al Parque Madidi, que tiene como base la pequeña pero creciente ciudad Rurrenabaque, y la crianza de ganado vacuno, en tanto actividad no tradicional de la población intercultural. Esta concluyente convicción surge del análisis y comprensión del funcionamiento del sistema económico productivo que se ha conformado en el municipio por la confluencia sinérgica de esos dos factores, con sus repercusiones en la seguridad alimentaria de la población intercultural. A continuación ese análisis.

Prácticamente desde que comenzó el crecimiento del turismo, más o menos a mediados de los noventa¹⁵, ese proceso fue ascendente, con pocas caídas, según se desprende de la información estadística de GMR (2002) y GMR (2008). Al estar asentado en la ciudad de Rurrenabaque, sus recursos crecientes dinamizaron los sectores económicos urbanos, atrayendo población porque generaba y genera fuentes de empleo. A su vez esa dinamización ha revitalizado la poco competitiva producción tradicional de la zona de colonización porque se ha constituido en una demanda segura y creciente de arroz, plátano y yuca, y en ingresos también seguros para sus productores. Pero además, ha contribuido a que los productores aprovechen las economías de escala para incrementar esa producción e insertarse en mercados de la región y así lograr ingresos adicionales. De ese modo, en vez de reducirse la producción tradicional (como sucede en toda la amplia región de colonización), ha ido creciendo, lo que también ha contribuido no solo a que permanezca en el consumo alimentario de la población intercultural, sino que sea producida por ella misma.

No obstante, el nivel de los ingresos que históricamente ha generado la producción agrícola tradicional, nunca ha sido expectante debido a sus precios estructuralmente bajos (como todo cultivo campesino de producción masiva), a sus rendimientos bajos y al aislamiento vial de la zona. Así es que prácticamente desde los primeros años de la etapa productiva del desarrollo de la zona de colonización, los productores se han visto obligados a buscar fuentes de ingresos complementarias. Esta necesidad condujo a algunos a dedicarse a la actividad ganadera o a buscar ingresos a través del empleo extra predial (en la misma zona y en la creciente ciudad de Rurrenabaque). Pero también surgió la posibilidad de incursionar en la producción agrícola no tradicional (hortalizas, frutas, miel de abeja) y en otros rubros no agrícolas (artesanías, por ejemplo), aprovechando la demanda constituida fundamentalmente por el flujo turístico. Entonces, la producción agrícola no tradicional se comercializa principalmente en la pequeña ciudad, para el consumo turístico y de algunos estratos urbanos. Sin embargo, también ha venido incorporándose en el consumo de los mismos productores y de los sectores populares urbanos, determinando que sus niveles de producción (y de ingresos para los productores interculturales) vayan en aumento.

¹⁵ La promoción turística de esta área comenzó en los primeros años de esa década.

De su lado, la actividad ganadera de carne (venta de ganado en pie) se fue fortaleciendo a medida que los productores establecieron su viabilidad comercial extra regional y sus potencialidades como generadora de ingresos comparativamente mayores a los de la agricultura tradicional, debido a sus bajos costos de producción. Esa constatación también condujo a los productores a percatarse que los hatos numerosos producen economías de escala, por lo que la actividad tendió y tiende al crecimiento, presionando sobre las tierras con poco o ningún uso, especialmente en las áreas que han sufrido un mayor desbosque durante la primera etapa de desarrollo de la zona de colonización. Es más, la ampliación de la ganadería puede estar absorbiendo predios con fuertes limitaciones productivas agrícolas y habilitando predios ubicados en lugares carentes de infraestructura vial, puesto que la actividad no requiere de ella. Y todo este proceso obviamente ha originado presiones de emigración y/o de cambios en el empleo entre quienes han cedido y están cediendo sus tierras. Por último, si bien seguramente la carne vacuna ya estuvo en el consumo de la población intercultural desde su llegada (todos los municipios vecinos y una parte de Rurrenabaque son ganaderos desde mucho antes), con su dedicación a esa actividad, se ha acentuado.

En ese contexto, la incursión de los productores ganaderos en la producción de leche desde comienzos del presente siglo ha sido inducida también por la demanda originada en el flujo turístico. Esta actividad genera ingresos comparativamente mayores a los de la agricultura tradicional, pero además de forma segura y creciente porque al tratarse de un producto diferenciado (leche fresca) es prácticamente imposible que en las actuales condiciones de comunicación vial pueda ingresar a la zona un producto idéntico con precios menores, y los productos procesados (leche en polvo y otros similares) no representan una fuerte competencia ya que para los consumidores no es indiferente acceder a uno u otro. Por otro lado, la inserción gradual de este producto en el consumo cotidiano de los estratos medios y populares de la ciudad de Rurrenabaque y de los mismos colonizadores, induce un incremento de su producción, con efectos en los ingresos de los productores.

En síntesis, el turismo inyecta recursos crecientes en la economía local influyendo en la creación de empleo e ingresos en sectores urbanos; parte de esos ingresos son captados por los productores interculturales agrícolas y de leche a través de sus ventas en la pequeña ciudad, generándose empleo agropecuario. Pero estos productores, en mayor o menor grado, reciclan esos recursos en la economía local a través de sus gastos e inversiones, contribuyendo así a mantener y generar empleos e ingresos en otros sectores del municipio. De su lado, los productores interculturales ganaderos y agrícolas que venden fuera del municipio crean empleo agropecuario, pero también una parte de los recursos que captan la inyectan en la economía local a través de sus gastos e inversiones, generando nue-

vos empleos en otros sectores. A su vez, gran parte de los empleos que se crean por una u otra vía en la ciudad de Rurrenabaque y en la zona de colonización, son absorbidos por los mismos productores interculturales. Finalmente, entre los bienes y servicios que ofrecen los sectores urbanos están los alimentos tradicionales y nuevos, de mayor o menor valor alimenticio, que han sido o se están incorporando en el consumo de la población intercultural a través de la compra.

En consecuencia, es este sistema económico productivo que se ha configurado en el municipio de Rurrenabaque el que explica los altos niveles de seguridad alimentaria de la mayoría de la población intercultural, porque determina sus bajos niveles de pobreza y una suficiente y variada disponibilidad local de alimentos de calidad¹⁶, factores que redundan en sus buenos niveles de acceso y consumo alimentario. Y no solo ello, la disponibilidad se basa en un complemento entre producción local y extra municipal, y entre producción tradicional y no tradicional, mientras que el acceso resulta de un equilibrio entre compra y producción propia.

Estas evidencias permiten responder con nitidez y contundencia la primera interrogante que se plantea el estudio, ya que no solo se constata el cumplimiento de las expectativas estatales en términos de contribución de la pequeña propiedad agraria de la zona de colonización de Rurrenabaque a la disponibilidad nacional de alimentos, a través de las ventas de su producción agropecuaria en los mercados local (la ciudad de Rurrenabaque), regional y nacional, sino también el logro de su propia seguridad alimentaria (si se extrapolan a toda la población intercultural los resultados verificados para la muestra).

Sin embargo, ha sido quizás más importante la identificación de las bases y/o las causas políticas, económicas y agrarias de estos logros (segunda parte de la primera interrogante que se plantea el estudio), sintetizadas en el sistema económico productivo descrito, porque a través de él no solo es posible explicar los logros, sino también las formas en que se definen y la racionalidad que las sustenta. En efecto, no solo se han identificado las articulaciones y sinergias intersectoriales de orden productivo, también se ha establecido la operativa general que explica la mejora de la seguridad alimentaria. Por ejemplo, se ha determinado que la base de la mejora de la seguridad alimentaria de la población intercultural es la mejora de sus ingresos económicos, que ha repercutido en una ampliación de la compra de alimentos (“producibles” y no “producibles”). Pero también se ha establecido que la generación de ingresos monetarios no se origina exclusivamente en la venta de productos agropecuarios, sino también en el empleo extra predial lo que expresa una situación inesperada para una zona con tan baja densidad demográfica. Y lo más extremo, las actividades agropecuarias que generan los mayores ingresos

¹⁶ De los 21 alimentos incluidos por el estudio en el menú consumible, 10 (carne vacuna, leche, yuca, plátano, arroz, pescado, carne de monte, papaya, cítricos y frejol) se producen o existen en el mismo municipio. Seis (todas las hortalizas, carne de pollo y huevo) dependen de la producción local y de proveedores externos. Y solo cinco (haba, azúcar, aceite, fideo y papa/chuño) dependen solo de proveedores externos.

no son importantes en el auto consumo, pero son definitorias del andamiaje de la seguridad alimentaria de los productores.

En consecuencia, abordando ya la segunda interrogante planteada por el estudio, es también muy importante ver la racionalidad que determina la adopción de las actividades productivas y económicas de los productores interculturales de Rurrenabaque, ya que –en última instancia– ellas explican la forma en que se construye o establece su seguridad alimentaria (y la producción para la disponibilidad nacional), más allá de que el sistema continúe garantizando mejoras en los ingresos. Es más, se debe ver si esa racionalidad puede modificar esa estructura productiva y, por tanto, la actual operativa de la seguridad alimentaria de la población intercultural. En ese sentido, siendo evidente que la actual producción agropecuaria responde a criterios de viabilidad y rentabilidad, y no alimentarios, corresponde preguntarse si ello no condiciona un carácter aleatorio a la disponibilidad y al acceso alimentario, es decir, que los productores puedan cambiar de rubros (o acentuar alguno de los actuales) si encuentran que el cambio les reportaría mayores ingresos relativos, al margen de que ese cambio incluya o no productos alimentarios.

También compete plantearse si la compra de alimentos como mecanismo indistinto (pero creciente) del acceso alimentario (y peor si además incluye los alimentos “producibles” en la zona), no sienta las bases de una vulnerabilidad alimentaria de la población intercultural, puesto que puede socavar el acceso alimentario basado en la producción propia. Asimismo, corresponde preguntarse si la estrategia creciente del empleo extra predial –resultado también de la validez absoluta de la búsqueda de ingresos como criterio definitorio de desarrollo– no está conduciendo a aceptar acríticamente a productores agrarios sin esencia productiva, por tanto, a admitir la desnaturalización de la función social de la pequeña propiedad agraria intercultural, precepto primigenio de su reconocimiento estatal.

Es más, habría que preguntarse si la misma lógica que ha permitido o determinado la constitución de ese “modelo” de desarrollo y seguridad alimentaria de Rurrenabaque no contiene al mismo tiempo los gérmenes que lo impulsarán a una situación donde estos aspectos observados o alertados se agudicen y cobren absoluta “normalidad”; donde quizás se mantenga y hasta mejore la seguridad alimentaria de la población intercultural de Rurrenabaque, pero en un escenario económico productivo distinto al actual. En otras palabras, habría que preguntarse si Rurrenabaque no se dirige a un horizonte visualizado por el Banco Mundial para “modelos” de reducción de la pobreza rural basados en el “mercado”: una zona con mínima pobreza rural, posiblemente impulsada por el “motor” del empleo rural no agrícola (ERNA), pero donde la agricultura contribuya limitadamente al crecimiento económico (con productos de “alto valor”), actuando como cualquier otro sector transable competitivo, y con patrones de consumo alimentario

orientados a los productos pecuarios, aceites vegetales, frutas y vegetales, y procesados (Banco Mundial 2008).

A decir del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), ese horizonte debe ser esperado en el “modelo” de reducción de la pobreza rural basado en el “mercado” ya que “la agricultura no podrá ser la vía de salida de la pobreza para toda la población rural, (...) muchas personas tienen un acceso extremadamente limitado o nulo a la tierra y a los mercados, y no podrán depender de la agricultura. Tendrán que buscar oportunidades en la economía rural no agrícola (en el empleo asalariado o en el autoempleo), que puede ser para ellos la senda principal que les lleve a salir de la pobreza” (FIDA 2011,184-185).

En consecuencia, de no mediar acciones deliberadas de conducción y regulación del actual sistema económico productivo de Rurrenabaque, no tendría que sorprender que, en perspectiva, la zona de colonización concrete la visión del Banco Mundial y del FIDA (y de otros organismos internacionales de desarrollo). Es más, esa perspectiva podría precipitarse en poco tiempo debido a la inminente conclusión de la carretera asfaltada La Paz–Rurrenabaque. Ese acontecimiento podría viabilizar un mayor ingreso de alimentos procesados y de otros competitivos con los locales (el arroz, con certeza, la leche líquida envasada, casi seguro y, probablemente, algunas hortalizas), lo que desincentivaría su producción en la zona. Pero también podría hacer más competitiva la producción de “alto valor” insertada en mercados extra municipales (ganadería vacuna y, quizás, algunas frutas, hortalizas y algún producto nuevo). Asimismo, esta “especialización” de la actividad agropecuaria (que desplazaría a otros productores) y el incremento del flujo turístico, podrían hacer crecer significativamente el ERNA de la población intercultural¹⁷, facilitado por la dinámica poblacional y económica que ya ha adquirido la pequeña ciudad de Rurrenabaque. A partir de allí, que el ERNA sea el “motor” del desarrollo (o al menos sea la actividad económica productiva dominante) ya sería una cuestión de algo más de tiempo.

En ese eventual escenario no necesariamente se deterioraría la situación de la seguridad alimentaria de la población intercultural; es más, hasta podría mejorar, pero su base sería fundamentalmente la mejora del acceso alimentario por la vía de la compra de alimentos, puesto que lo más probable es que los productores reduzcan mucho más la producción propia de los alimentos “producibles” (con mayor razón los dedicados esencialmente a actividades del ERNA). Y la disponibilidad local de alimentos ya no estará basada en un complemento entre producción local y extra municipal, y entre producción tradicional y no tradicional; lo más probable es que primen los alimentos procesados de origen extra municipal y que no necesariamente sean de calidad.

¹⁷ En el caso de Rurrenabaque el ERNA está constituido por las actividades de transporte propio, el comercio minorista, el alquiler de maquinaria, la elaboración y comercio de artesanías y el empleo formal. En conjunto representan casi 20% de los ingresos en la muestra encuestada.

Conclusiones

La zona de colonización de Rurrenabaque está marcada por dos etapas en su conformación y desarrollo. La primera coincidió con los últimos momentos del modelo de sustitución de importaciones y los primeros del libre mercado, donde se sucedieron los ajustes económicos, institucionales y políticos que sentaron las bases del nuevo modelo. No obstante, para Rurrenabaque esa transición también significó la expresión de un Estado permisivo que facilitó el libertinaje social y empresarial en el acceso a tierras y en la depredación de los recursos naturales, prácticamente como continuidad de una larga historia de saqueos de recursos naturales en la región. La segunda etapa arrancó a mediados de los años noventa, cuando se detuvo la extracción de madera en gran escala y comenzó a erigirse la actual estructura socioeconómica y productiva de la zona de colonización y del mismo municipio. Esta construcción no solo ha sido conflictiva en términos sociales, sino muy difícil por las adversidades productivas naturales, la desatención estatal y el cuasi-aislamiento vial del occidente del país.

La actual estructura socioeconómica del municipio de Rurrenabaque es *sui generis*, por el tamaño poblacional y el rol económico de su capital, factores asociados a la gran dinámica que ha cobrado la actividad turística orientada al Parque Nacional Madidi. La actividad turística es en gran medida explicativa del desarrollo económico que ha logrado el municipio, aunque ese logro no hubiera sido posible sin la incursión de un sector de los productores interculturales en una actividad comercial de “alto valor” (la ganadería vacuna), ya que ambos han logrado constituir un sistema productivo altamente sinérgico que integra a todos los demás sectores productivos y que está reduciendo la pobreza en la zona de colonización. Estos factores constituyen los pilares de las buenas condiciones de seguridad alimentaria que expresa la población intercultural en general, tomando como referencia la muestra encuestada.

Teniendo presente la definición usual de seguridad alimentaria y los resultados de las indagaciones analíticas realizadas por el estudio, se puede afirmar categóricamente que los productores interculturales de Rurrenabaque están satisfaciendo con creces las expectativas del Estado boliviano respecto a su contribución a esa dimensión del desarrollo, especialmente a través de la producción no tradicional, que refuerza la disponibilidad nacional de alimentos, pero también mediante sus propias condiciones de seguridad alimentaria, que aporta a la mejora de los índices nacionales.

Un factor importante de los logros productivos, económicos y alimentarios de la población intercultural es la racionalidad fundamentalmente comercial que gobierna sus actividades productivas, por lo que los diversos equilibrios que se han construido y que explican las buenas condiciones de seguridad (entre pro-

ducción tradicional y no tradicional, compra de alimentos y producción...), responderían a un “modelo” de desarrollo basado en el “mercado”. Por lo mismo, de no mediar acciones de política pública (locales y nacionales) que protejan y regulen los logros y equilibrios que ha alcanzado el sistema económico productivo de Rurrenabaque, la zona podría transitar a un escenario en el que dominen las actividades no agropecuarias (empleo rural no agrícola) y donde la seguridad alimentaria sea valorada esencialmente con criterios de mercado. En ese sentido, se cierne el riesgo de que la compra de alimentos (incluyendo los que pueden ser producidos solventemente en la zona) se convierta en un expediente normal y generalizado del acceso alimentario de los productores interculturales, generando condiciones de vulnerabilidad. Y lo más controversial: que Rurrenabaque se convierta en una zona nominal de productores agrarios, desnaturalizando la función social de la pequeña propiedad agraria intercultural, precepto primigenio de su reconocimiento estatal.

La culminación de la carretera asfaltada que conecta la sede de gobierno con la región, puede ser un factor detonante de esos cambios por sus previsible efectos en la viabilidad comercial de nuevos productos o la acentuación de otros (la ganadería de carne, por ejemplo), con todas sus derivaciones agrarias, diferenciación económica y desplazamientos sociales.

En consecuencia, la valoración positiva de los logros de los productores (y del municipio) de Rurrenabaque no debe detenerse en los buenos indicadores e índices; los riesgos previsible que implican la preeminencia extrema de la racionalidad comercial en el desarrollo de esta zona deben servir para revisar críticamente el trayecto que puede seguir el mismo, percatándose que ese camino –por más promisorio que se muestre– puede conducir a una vulnerabilidad absoluta de la seguridad alimentaria. Y no se trata de condenar el progreso económico de los pequeños productores (en este caso la población intercultural), o que accedan a más tierra, a mayor producción, etc., pues también se debe romper el estigma del pequeño productor exitoso como sinónimo de “pequeño burgués” o renegado de su condición original, cuestionado porque ya no responde a los cánones o al imaginario construido hace tres o cuatro décadas como condición para su aceptación social. Compete al Estado definir que ese legítimo derecho tenga bases soberanas en materia de desarrollo agrícola y seguridad alimentaria.

Referencias

Banco Mundial, (2008). *Informe sobre el desarrollo mundial 2008, Agricultura para el desarrollo*. Washington, Estados Unidos de Norteamérica: BM, Mundi-Prensa, Mayol. Obtenido de http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2008/03/17/000333038_20080317065959/Rendered/PDF/414550SPANI

- Castillo, A y Campen, R. (1981). "Agricultura y subsistencia en el norte de Santa Cruz". En *Apuntes sobre colonización*. La Paz, Bolivia: CEP.
- Decreto Ley 3464. *Ley de Reforma Agraria*. (1953). Bolivia. Obtenido de <http://tan.poderjudicial.gob.bo/cuerpo.asp?TPagina=0&TContenido=1&TPaginaweb=3464>
- DHV, CN (2005). Diagnóstico socioeconómico y cultural zona 2: piedemonte y llanuras, Informe Final (versión sujeta a aprobación). La Paz, Bolivia: SNC, BID. Obtenido de <http://www.bicusa.org/en/Document.101798.pdf>
- FIDA (2011). *Informe sobre la pobreza rural 2011*. Roma, Italia: FIDA. Obtenido de <http://www.ifad.org/rpr2011/report/s/rpr2011.pdf>
- GMR (2002). *Plan de Desarrollo Municipal de Rurrenabaque 2002 - 2006*. Rurrenabaque, Bolivia: Gobierno Autónomo Municipal de Rurrenabaque.
- GMR (2008). *Plan de Desarrollo Municipal de Rurrenabaque 2008 - 2012*. Rurrenabaque, Bolivia: Gobierno Autónomo Municipal de Rurrenabaque.
- GMR (2011). *Diagnóstico de la situación del sistema económico-productivo de Rurrenabaque*. Rurrenabaque, Bolivia: Gobierno Autónomo Municipal de Rurrenabaque.
- Guevara, W. (1955). *Plan inmediato de política económica del gobierno de la Revolución Nacional*. La Paz, Bolivia: UMSA.
- Loza, H. y Méndez, M. (1981). "La colonización en Alto Beni". En *Apuntes sobre colonización*. La Paz, Bolivia: CEP.
- Ortiz, A. y Soliz, L. (2007). *El arroz en Bolivia*. La Paz, Bolivia: CIPCA.
- Pacheco, P. (1998). *Estilos de desarrollo, deforestación y degradación de los bosques en las tierras bajas de Bolivia*. La Paz, Bolivia: CIFOR/CEDLA/TIERRA.
- Pérez, M. (2003). *Apertura comercial y sector agrícola campesino*. La Paz, Bolivia: CEDLA.
- PMA, (2009). Manual para la evaluación de la seguridad alimentaria en emergencias (Segunda edición). Roma, Italia: FAO, ECHO. Obtenido de http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/manual_guide_proced/wfp203215.pdf
- SERNAP. (2007). Reserva de la Biósfera y Territorio Comunitario de Origen Pilon Lajas, Plan de manejo. La Paz, Bolivia: SERNAP. Obtenido de http://turismo.umsa.bo/documents/332882643/0/pdm_pilonlajas2007.pdf
- SERNAP. (2009). *Pilon Lajas 2007-2017*, Plan de manejo y plan de vida de la Reserva de la Biósfera y Tierra Comunitaria de Origen. La Paz, Bolivia: SERNAP, CRTM. Obtenido de <http://www.worldcat.org/title/plan-de-manejo-y-plan-de-vida-de-la-reserva-de-la-biosfera-y-tierra-comunitaria-de-origen-pilon-lajas-2007-2017/>

Cuestión Agraria

Volumen 1 Número 1 Septiembre de 2014

Seguridad y soberanía alimentaria entre campesinos e indígenas

CONTENIDO

Seguridad y soberanía alimentaria entre pequeños propietarios campesinos e indígenas: marco introductorio a los estudios de caso <i>Gonzalo Colque</i>	7
Artículos	27
Cuando la soya se impone: transformaciones en las comunidades campesinas y sus implicaciones alimentarias <i>Enrique Castañón Ballivián</i>	
En el campo, los productores de mercancías prefieren comprar sus alimentos <i>Miguel Urioste F. de C.</i>	55
Dependencia y autoabastecimiento alimentario en la TCO Guaraní de Macharetí <i>Jose Luis Eyzaguirre Rodríguez</i>	77
La persistencia de la agricultura campesina y sus implicaciones alimentarias en Villa Serrano <i>Rossmory Jaldín Q.</i>	105
Mercado o seguridad alimentaria, dilema de los pequeños productores agrícolas de Rurrenabaque <i>Mamerto Pérez L.</i>	137